



**ESTADO  
DE LA NACIÓN**

---

**Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2023**

---

## **Investigación**

---

# Desigualdades y Desarrollo Humano Sostenible

**Investigador:**

José Francisco Pacheco Jiménez

San José | 2023



339.46  
P116d

Pacheco Jiménez, José Francisco.  
Desigualdades y desarrollo humano sostenible / José Francisco Pacheco Jiménez. -  
- Datos electrónicos (1 archivo : 3.200 kb). -- San José, C.R. : CONARE - PEN, 2023.

ISBN 978-9930-636-13-8  
Formato PDF, 101 páginas.  
Investigación para el Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible  
2023 (no. 29)

1. DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. 2. DESARROLLO ECONÓMICO.  
3. DESIGUALDAD SOCIAL. 4. CONDICIONES ECONÓMICAS. 5. EDUCACIÓN. 6. EM-  
PLEO. 7. POLÍTICA PÚBLICA. 8. COSTA RICA. I. Título.



## Contenido

Descargo de Responsabilidad .....	4
Hallazgos relevantes .....	4
Antecedentes .....	5
De la desigualdad de ingreso a la desigualdad multidimensional.....	7
Persisten altos niveles de desigualdad monetaria con pocos cambios en la última década .....	8
Múltiples conglomerados con perfiles muy disímiles fragmentan el territorio y crean amplias brechas multidimensionales .....	10
<i>Desigualdad en el derecho a educación y conocimiento de calidad</i> .....	11
Desigualdad en el derecho a una vida sana .....	14
Desigualdad al derecho a vivir una vida libre de violencia .....	17
<i>Desigualdad en el derecho a vivir una vida en un entorno ambientalmente seguro y sostenible</i> .....	19
<i>Desigualdad en el derecho a vivir una vida confortable</i> .....	20
<i>Patrones en torno al derecho a tener una participación política activa</i> .....	23
Una Costa Rica fragmentada más que polarizada: coexistencia de múltiples conglomerados cantonales con amplias brechas multidimensionales entre sí .....	25
Transmisión intergeneracional: resultados y determinantes.....	28
Análisis de determinantes multidimensionales .....	34
<i>Formación de desarrollo humano</i> .....	34
<i>Oportunidades laborales</i> .....	48
<i>Acumulación de activos</i> .....	66
<i>Un país con alta tenencia de vivienda, pero con calidad diversa y poca protección de activos</i> .....	67
<i>Acceso a recursos financieros y disponibilidad de activos</i> .....	70
Política pública y desigualdad .....	77
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil: barreras institucionales y los problemas de su universalización.....	77
La Caja Costarricense del Seguro Social: asignación presupuestaria y necesidades sanitarias .....	81
Anexos.....	83
Referencias .....	85

## Descargo de Responsabilidad

Esta Investigación se realizó para el *Informe Estado de la Nación 2023*. El contenido de la ponencia es responsabilidad exclusiva de su autor, y las cifras pueden no coincidir con las consignadas en el *Informe Estado de la Nación 2023* en el capítulo respectivo, debido a revisiones posteriores. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe

## Hallazgos relevantes

- Persisten niveles elevados de desigualdad monetaria con pocos cambios observados en los pasados años. Durante la última década, todos los deciles poblacionales experimentaron una contracción en su ingreso real a lo largo de la pasada década. Los segmentos de mayores ingresos tuvieron, a su vez, mayores reducciones.
- Desde una óptica de desigualdad multidimensional, el territorio costarricense se puede estructurar alrededor de múltiples conglomerados cantonales con perfiles sociales, ambientales y políticos similares entre sí, pero con condiciones de vida muy disímiles entre ellos. Eso sí, todo conglomerado tiene, al menos, un ámbito donde su rezago es considerable respecto al resto del país.
- Importantes progresos se observan en materia de movilidad intergeneracional. Más del 60% de los hijos e hijas mayores de 24 años que viven con sus progenitores les han superado académicamente, sea en número de años de escolaridad o en la obtención de un diploma más elevado. Si bien esta movilidad escolar se ha logrado traducir en mejores puestos laborales, su dinámica no es tan significativa. Existe una preocupación de que un mayor logro académico no se traduce hoy día necesariamente en mejores empleos, mayores remuneraciones adecuadas y mejores perspectivas de vida.
- Las personas menores de 5 años que residen en zonas rurales, son hombres y pertenecen a hogares de bajo nivel socioeconómico suelen mostrar menos asistencia a programas de primera infancia a la vez que sus entornos inmediatos carecen de suficientes factores formadores de su desarrollo cognitivo y psicosocial. Patrones similares se ubican en acceso a servicios de salud y resultados nutricionales. Preocupa, pues, que estos infantes puedan ver comprometido su desempeño académico presente y futuro, así como su rendimiento general en edades adultas, perpetuando de esta forma las brechas que hoy les separan de sus contrapartes.
- La persistencia de brechas en esas categorías, sin embargo, deben valorarse con dos consideraciones en mente. La primera es que existen dimensiones en las cuales los malos resultados los viven los grupos mejor posicionados. La incidencia de ciertas enfermedades en niñas y los mayores problemas de obesidad en menores de zonas urbanas y quintiles son ejemplos de que ningún grupo se encuentra exento de experimentar estas situaciones. Segundo, que un grupo tenga una mejor posición no significa que esté en una condición óptima. En múltiples indicadores, el grupo de mejor desempeño se ubicó lejos de la mejor situación posible.
- En material laboral, las ventajas obtenidas por muchos grupos poblacionales en el ámbito académico no se traducen necesariamente en mejoras en el mercado laboral. El caso de las

mujeres y las personas jóvenes refleja esa condición. Ambos grupos tienen mejor escolaridad y preparación complementaria, pero suelen tener a su vez más problemas para insertarse exitosamente en el mercado laboral (como personas ocupadas). Cuando lo logran, su incorporación suele verse perjudicada por incumplimientos o menores horas laborables.

- En sentido inverso, las personas migrantes externas y las residentes de las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte, Brunca y zona rural persistentemente rezagan al resto de sus contrapartes en todo ámbito analizado. En lo particular, la fuerza laboral migrante se posiciona como el grupo poblacional con las condiciones adversas de entre todos los temas laborales analizados.
- Altas tasas de tenencia de vivienda caracterizan al país, siendo la mayoría de las brechas relativamente reducidas entre grupos. No obstante, este resultado, preocupa que algunos segmentos como migrantes, residentes del Pacífico Central, Huetar Caribe y Huetar Norte y las familias más pobres tiendan a habitar viviendas de mala calidad. Adicionalmente, estos activos no suelen estar protegidos ante riesgos naturales o de otro tipo.
- Si bien un porcentaje elevado de personas posee activos financieros, lo cierto es que la tenencia de los más rentables está altamente concentrada en pocas manos. Las mujeres, las personas migrantes y las residentes rurales suelen mostrar las menores tasas de tenencia.
- Si bien el Estado está llamado a implementar políticas que promuevan una reducción de brechas en el acceso a servicios públicos, lo cierto es que en determinadas ocasiones es justo dicho ente quien crea las barreras que dificultan alcanzar objetivos de cobertura como la universalización de la Red de Cuido.

## **Antecedentes**

La creciente desigualdad del ingreso y la riqueza se ha convertido en tema recurrente en ámbitos académicos y políticos. El Reporte sobre Desigualdad Mundial 2022 informa, por ejemplo, que el 10% más rico de la población mundial obtiene el 52% del ingreso global en tanto la mitad más pobre recibe el 8,5%. Si la desigualdad se mide por medio de la riqueza, entonces la distribución anterior se ubicaría en 76% para el segmento más rico y únicamente 2% para la mitad más pobre.

Este patrón no es exclusivo de países de ingreso medio y bajo, sino que afecta de igual manera a los países desarrollados. Pérez-Arce et al (2016), por ejemplo, muestran que el incremento de la desigualdad del ingreso es un fenómeno que se acelera en los 80s en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania producto de un estancamiento del ingreso de las familias con menos recursos en tanto aquel de las familias más ricas se expandía aceleradamente. América Latina, por su lado, se ubica entre las regiones más desiguales del mundo con un 10% de la población más rica captando 22 veces más ingreso nacional que el 10% más pobre y el 1% de las familias del estrato superior recibiendo 21% del ingreso total de los países (BID, 2020).

La preocupación por el incremento de la desigualdad viene aparejada al hecho que ella parece explicar gran parte de los problemas sociales, económicos, políticos y ambientales que experimenta el planeta, en particular después de las repercusiones derivadas de la pandemia por COVID-19 (OIT, 2014; OIT, 2021). Polacko (2021) menciona que la desigualdad creciente

está asociada a una cantidad importante de efectos nocivos en la sociedad. Por ejemplo, mayores niveles de desigualdad están asociados a menores tasas de crecimiento productivo, a una mayor inestabilidad del PIB, innovación e inversión, menor consumo por parte de las familias y una menor inversión pública. Asimismo, la desigualdad se correlaciona con menor esperanza de vida, mayor propensión a enfermarse, mayores tasas de estrés psicosocial, mayores tasas de criminalidad y menores posibilidades de movilidad social, entre otros.

Costa Rica no escapa a los patrones de desigualdad antes descritos. Según datos de CEPAL, el coeficiente de Gini para Costa Rica no es sólo mayor que el promedio latinoamericano, sino que el mismo prácticamente no varió entre 2010 y 2020 al tiempo que la región latinoamericana observaba cierto declive. El deterioro, aunque es generalizado, no recae de forma proporcional sobre los distintos grupos, y al aumentar las asimetrías, la situación puede tener consecuencias adversas de corto y largo plazo en materia de crecimiento económico, inestabilidad social, deterioro de la democracia y otros aspectos.

Este resultado inicial podría ser un reflejo del abandono progresivo del contrato social costarricense, tema que el Programa Estado de la Nación ha venido exponiendo a lo largo de sus distintos informes. En corto, lo anterior podría presuponer el rompimiento de aquella idea arraigada de un país que busca la equidad, con esfuerzos, normas e instituciones que tienen como foco la ampliación de capacidades y oportunidades en las personas, la educación y el trabajo como mecanismos de movilidad social, y la tarea constitucionalmente establecida de estimular la producción y la justa distribución de la riqueza, en un ambiente ecológicamente sano y en democracia. A su vez, esos mecanismos parecieran haber sido sustituidos por otros que perpetúan una mayor acumulación de riqueza, teniendo además una dinámica endógena que le permite auto-sostenerse y crecer en el tiempo (Lamont and Pierson, 2019).

Si bien el problema de la desigualdad creciente en Costa Rica ha venido siendo expuesto por muchos años ya, tal parece que el país aún carece de una discusión sólida sobre las causas de esa dinámica, así como de las opciones de política pública necesarias para revertir la tendencia. Un cambio fundamental al respecto debería apuntar al reconocimiento que la desigualdad no es sólo un asunto de ingreso monetario y riqueza material. La literatura reciente sobre estudios en la materia es clara en establecer que el bienestar de una sociedad no se encuentra limitado a esas dos variables sino que su naturaleza es multidimensional y por lo tanto moldeada por diversas aristas sociales, económicas, ambientales y políticas (McKnight et al, 2019; Thanh Bui and Erreygers, 2020; Savaglio, 2004). Lo anterior hace de un enfoque integrador, explicativo y propositivo un aporte pertinente y oportuno, en línea con las grandes conclusiones de Informes.

El objetivo del presente capítulo se orienta, pues, a aportar un análisis sobre las manifestaciones de la desigualdad multidimensional en territorios y grupos poblacionales en términos de capacidades y oportunidades asimétricas para el desarrollo humano, ampliado con una visión sobre las elaboraciones de las personas sobre las causas, alcances y efectos de la desigualdad sobre sus vidas y su entorno cercano (familiar o comunitario), así como el sentido de pertenencia y participación en la sociedad. Además, se plantea la necesidad de discutir ejemplos de cómo la política pública, siguiendo la obligación constitucional del Artículo 50 de organizar y estimular “la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” y estimular la equidad en varias dimensiones, ha sido diseñada e implementada en la práctica, valorando si la misma contribuye

a revertir barreras o si por el contrario promueve brechas más amplias en contra de grupos particulares. En esa línea, se persiguen cuatro objetivos fundamentales:

- Describir los principales patrones que caracterizan la desigualdad monetaria y multidimensional en variables de resultado, con particular énfasis en su dimensión geográfica.
- Estimar, desde la óptica de la desigualdad de oportunidades, las brechas de acceso a bienes y servicios que hoy día caracterizan a distintos grupos poblacionales.
- Estudiar las condiciones que rigen la movilidad intergeneracional en Costa Rica como condición fundamental en la mejora de los niveles de desigualdad monetaria y multidimensional
- Aproximar el vínculo entre esfuerzos de política pública y patrones de desigualdad, especialmente territoriales, que permita valorar el rol que juega la política pública en la conformación dichas condiciones.

### **De la desigualdad de ingreso a la desigualdad multidimensional**

La discusión teórico conceptual en torno al tema de la desigualdad ha crecido de forma importante en las últimas 3 décadas. Tradicionalmente, el debate alrededor del concepto de desigualdad ha girado en torno al grado de distribución del ingreso o la riqueza de un país. La OCDE, por ejemplo, establece que la desigualdad es “una medida que destaca la brecha entre los ingresos disponibles de diferentes individuos u hogares en un año en particular”. Para DESA-UN (2015), la desigualdad de resultados ocurre cuando los individuos de un país no poseen un nivel de bienestar material o de condiciones económicas similares.

Si bien el enfoque monetario representa una primera aproximación al complejo fenómeno de la desigualdad, su abordaje es útil para comprender tendencias históricas, diferencias entre grupos y otros aspectos desde una perspectiva de resultados. Es decir, cuando la desigualdad se aborda desde la visión monetaria, lo que en realidad se está evaluando es un resultado final de un conjunto de procesos anteriores que dan forma a la distribución del ingreso.

A lo largo de los últimos años, sin embargo, los enfoques recientes en el análisis de la desigualdad han considerado necesario explorar su naturaleza y dinámica desde otras ópticas. El punto de inflexión establece que la condición social y económica de una persona no se puede evaluar únicamente desde la perspectiva del ingreso o riqueza por cuanto las disparidades entre personas no surgen única y exclusivamente de las diferencias en ingreso o riqueza. Tal y como lo expresa Savaglio (2006), las personas son distintas no sólo por su condición monetaria sino también en sus niveles educativos y condiciones sanitarias, entre otros, todo lo cual toma parte de la discusión de lo que Sen (1997) planteaba en torno a la naturaleza y causas de la desigualdad (¿por qué desigualdad? ¿desigualdad de qué?). Es así como nace la necesidad de ampliar el enfoque analítico trascendiendo el ingreso o riqueza como centro de discusión hacia un paradigma de lo que se ha venido denominando como desigualdad multidimensional.

La desigualdad multidimensional tiene su génesis en la necesidad de concebir el bienestar como producto no sólo del ingreso o riqueza sino de un conjunto de aspectos no pecuniarios que también son relevantes en la determinación de la calidad de vida de la población. Tal y como lo detalla Arenas-Pacheco (2021: 86), “estos enfoques [**de la desigualdad de ingresos**<sup>1</sup>] dejan

---

<sup>1</sup> Negrita es propia.

fuera otras caras de la desigualdad que son también importantes porque brindan un panorama mucho más amplio del problema, al abarcar casi la totalidad de la vida social, como las condiciones étnicas, religiosas, educativas y de género, en las cuales está inmersa la gente en sus contextos espaciotemporales específicos”.

Para superar las críticas al enfoque monetario de la desigualdad y profundizar en la dinámica de la desigualdad multidimensional, al menos dos aspectos deberían ser tomados en cuenta. Primero, profundizar en la idea detrás de la desigualdad de oportunidades, misma que surge cuando factores de entorno o del azar y no aspectos relacionados con el esfuerzo personal, determinan las probabilidades de alcanzar determinado nivel de bienestar. La desigualdad multidimensional se encontraría de esta forma asociada a características individuales o sociales como edad, sexo, zona de residencia o grupo étnico (Romer et al, 2003). La caja 1 detalla algunas de las perspectivas teóricas sobre los determinantes de la desigualdad de oportunidades. Segundo, mención particular merece la **movilidad intergeneracional**, eso es, el grado de asociación que existe entre el bienestar de los hijos e hijas en relación con el bienestar de sus progenitores (Torche, 2015). Bajos niveles de movilidad intergeneracional se asocian asimismo a una alta desigualdad de oportunidades (CAF, 2022).

---

#### Recuadro 1

##### Determinantes de la desigualdad de oportunidades: posiciones teóricas

Las teorías sobre igualdad de oportunidades establecen la existencia de dos fuentes de desigualdad entre personas (Lefranc, Pistolesi y Trannoy, 2006). La primera incluye aquellos **factores de entorno o circunstanciales**, los cuales se refieren al grupo de determinantes del ambiente en que se desenvuelve la persona, genéticos o del azar que determinan las probabilidades de éxito económico. La desigualdad se encontraría asociada a características individuales o sociales como edad, sexo, zona de residencia o grupo étnico, que a su vez inciden en el acceso del individuo a servicios educativos de calidad, a servicios de salud y nutrición, a empleos de calidad o a una vida social activa.

La segunda fuente se refiere a los **factores individuales** sobre los cuales la persona es responsable y que se encuentran vinculados al nivel de **esfuerzo** que aplique. Según la evidencia empírica al respecto, los factores exógenos representan entre el 40% y el 56% del componente explicado de la desigualdad según el estudio de Brunoria, Palmisanob y Peraginec (2017) mientras que Figal (2011) indica que para Italia los factores de entorno explican un 20% de la disparidad en los ingresos<sup>1</sup>.

---

## **Persisten altos niveles de desigualdad monetaria con pocos cambios en la última década**

El presente apartado tiene como objetivo discutir las principales tendencias y patrones que caracterizan la desigualdad monetaria en Costa Rica. Para ello, el análisis hará uso de una serie de instrumentos estadísticos tradicionalmente utilizados en el ámbito de la desigualdad, incluyendo coeficientes como el de Gini, los cocientes de percentiles y otros indicadores relacionados.

En cuanto a la distribución de la población por entre los deciles de ingreso, la Encuesta Nacional de Hogares (2022) estima que en Costa Rica habitan 604,923 personas (11,6% de la población total) que pertenecen al primer decil de ingreso, es decir, que viven con ₡72,000 o menos por mes<sup>2</sup>. Al otro lado del espectro pertenecen 387,074 personas del decil 10 (7,4% del total),

---

<sup>2</sup> Todos los valores monetarios acá considerados se expresan en términos per cápita por mes, salvo que se aclare lo contrario.



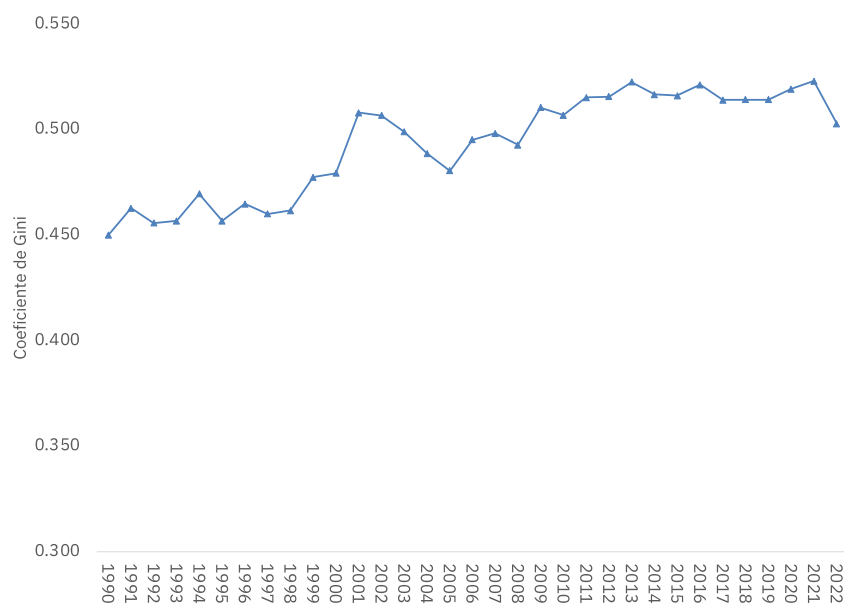
mismas que perciben un ingreso mensual de ₡866,667 o más cada una. De forma acumulada, 1,726,295 habitantes pertenecen a los deciles 1 al 3. Esto significa que hoy día, 1 de cada 3 personas residentes en el territorio costarricense vive con ₡140,500 por mes en tanto únicamente el 1% (52,036 personas) vive con ₡1,962,730 por mes o más, cada una.

Si se compara esa situación con la observada 10 años atrás, la situación ha cambiado poco. En el 2012, la población de los tres primeros deciles concentró el 33,8% de los residentes en Costa Rica mientras el decil 10 representó un 7,5%. Un detalle relevante sobre la dinámica del ingreso es que, al comparar su valor real neto en los hogares entre 2012 y 2022, todos perdieron capacidad adquisitiva. Al promediar los movimientos de los deciles 1 al 3, 4 al 6 y 7 al 10, los datos indican que el ingreso del primero de ellos perdió un 9,4% de capacidad de compra siendo el decil 1 el único que mantuvo constante su valor real en el tiempo. A medida que se analizan deciles superiores, la caída fue mayor. Para los deciles 4 al 6, el ingreso perdió un 10,3% mientras para el segmento 7 al 10 dicho porcentaje fue del 13%. Individualmente hablando, el decil 10 observó la mayor contracción real: 19,2%.

El coeficiente de Gini es posiblemente la métrica más utilizada para ilustrar la evolución de la desigualdad del país. El valor promedio de largo plazo del Gini en Costa Rica (1990-2022) se estima en 0,493 con una importante tendencia a crecer a lo largo de los años. Durante 1990-1999, el coeficiente de Gini promedió 0,461 manteniéndose en un rango 0,45-0,47. Durante la primera década del siglo XXI, el coeficiente creció cerca de 0,034 puntos respecto al decenio anterior para promediar 0,496. Durante este lapso, el coeficiente alcanza por primera vez el valor de 0,50. Finalmente, en un tercer momento, a partir del 2009, el país supera el valor del Gini de 0,50 y desde entonces el mismo no ha logrado bajar de ese límite.

### Gráfico 1

Costa Rica: evolución del Gini. 1990-2022



Fuente: Elaboración con datos de las Enaho 2012 y 2022.

Por otro lado, el cuadro 2 a continuación muestra un conjunto de ratios entre distintos percentiles de ingreso. Dos aspectos sobresalen del cuadro 1. Los valores para los tres cocientes se mantienen similares entre 2012 y 2022, con la particularidad que en casi todos los casos los valores son mayores en el 2017, reduciéndose para el 2022. No obstante, ello, los datos de este último año suelen ser superiores a los del 2012. Resulta importante anotar que el ingreso per cápita de las personas en el percentil 90 fue 11,3 veces superior al de aquellas personas del percentil 10. En términos monetarios esto se deriva de ingresos per cápita netos que rondan los ₡63,000 (percentil 10) y los ₡741,471 (percentil 90). De forma similar, una persona del percentil 90 obtiene ingresos que son, en promedio, 3,5 veces superiores al percentil 50. El valor del ingreso para el p50 equivale a ₡211,467, lo cual a su vez indica que la mitad de la población de Costa Rica vive mensualmente con dicho ingreso. Un patrón similar se observa entre grupos medios en donde la brecha del p75 (₡311,751 por persona) es 3,5 veces superior al del p25 (₡88,400).

#### Cuadro 1

Ratios de ingreso entre percentiles, 2012, 2017 y 2022

Año	p90/p10	p90/p50	p75/p25
2012	11,21	3,48	3,51
2017	11,41	3,64	3,45
2022	11,26	3,50	3,59

Fuente: Elaboración con datos de las Enaho 2012, 2017 y 2022.

### Múltiples conglomerados con perfiles muy disímiles fragmentan el territorio y crean amplias brechas multidimensionales

Tal y como lo establece CEPAL (2021), el territorio (entendido como “un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos sobre el que se ejerce algún tipo de autoridad”) tiene un rol preponderante en la configuración de los patrones de desigualdad de un país debido a que brechas de acceso a servicios claves como educación, salud y conectividad tenderían a perpetuarse estructuralmente debido a la tendencia de las familias de residir en forma permanente o por largos periodos en sus lugares de nacimiento. Además, el territorio cumple un papel adscriptivo, es decir, el mismo determina las relaciones sociales de las personas al tiempo que refuerza los aspectos positivos o negativos de pertenencia a determinados sitios, tales como posiciones en torno a estigma y discriminación.

En el caso de Costa Rica, la ENAHO 2022 reporta que el 64% de la población es no migrante, es decir, el lugar de nacimiento y su residencia actual son las mismas. Adicionalmente, un 27,2% de las personas es migrante interna (el sitio de nacimiento difiere del lugar donde vive pero ambos se refieren al mismo país) en tanto el 8,8% es migrante externa.

La persistencia de brechas territoriales tiene raíces profundas. Arias y Sánchez (2015), en su análisis espacial sobre la pobreza en Costa Rica, señalan que la persistencia de brechas territoriales refleja un proceso histórico de gestión de lo público hacia la centralización y concentración alrededor de la Región Central, patrón que se expresa en una mayor proporción de inversiones en esta zona en contraste a la cantidad de recursos que recibe el resto del país.

Consecuentemente, las mayores oportunidades a salud y educación y el mejor acceso a servicios básicos y empleos tienden a generarse en la Región Central.

El presente apartado detalla los patrones de desigualdad multidimensional territorial para una serie de variables que son claves en la configuración de la calidad de vida de las personas incluyendo participación política, presencia de riesgos financieros, educación, salud y acceso a servicios básicos.

### ***Desigualdad en el derecho a educación y conocimiento de calidad***

Los datos muestran que entre 2012 y 2022, la escolaridad promedio de la población mayor a 24 años pasó de 8,35 a 8,90 años. Excepto en el caso de la población migrante, cuya escolaridad se mantuvo prácticamente igual, el resto de los segmentos poblacionales vio incrementar su nivel educativo entre 0,21 (personas de 45 a 59 años) y 1,16 años (población de 25 a 34 años). Otros grupos con incrementos en escolaridad superiores a 1 año fueron las personas de 60 años o más y las personas residentes en la región Chorotega. Además de la población migrante y las personas de 45 a 59 años, otros segmentos de reducida mejora fueron las poblaciones urbanas y la Pacífico Central cuyos aumentos en escolaridad no supera los 0,40 años.

Adicional a la dinámica anterior, la prevalencia de brechas en escolaridad deviene en un elemento central en el análisis de la desigualdad multidimensional. Las brechas por sexo, si bien denotan una mayor escolaridad en mujeres que en hombres (1,03 veces), son reducidas y dentro de lo que podríamos considerar no estadísticamente significativas. De hecho, esta categoría posee las brechas en escolaridad más reducidas de entre las variables consideradas.

Por el contrario, las distancias por cuestión geográfica son amplias y persistentes en el tiempo. Las brechas urbano-rurales se contrajeron de 1,41 a 1,34 veces, pero siguen siendo de las más altas entre los distintos criterios utilizados en este segmento.

Por región de planificación, la dinámica tendió en la mayoría de las regiones a una leve reducción de las brechas. En tres casos, Brunca, Chorotega y Brunca, la diferencia de escolaridad cayó en valores cercanos a 0,1 años mientras en la Huetar Norte y la Pacífico Central prácticamente no hubo cambios sustantivos. En todo caso, la diferencia que hay entre las regiones de Costa Rica con la región Central sigue siendo elevada, en un rango del 1,14 a 1,35 veces.

Las brechas de escolaridad por condición migrante fueron las que más crecieron en este periodo. Los datos disponibles permiten observar que, en tanto en el 2012 la escolaridad de las personas no migrantes fue 1,1 veces superior a la escolaridad migrante, para el 2022 ese valor se ubicó en 1,19 veces. Este sustancial incremento se explica por el incremento de la escolaridad entre no migrantes (de 8,4 a 9,1 años) a la vez que el nivel académico de los grupos migrantes caía (de 7,7 a 7,6 años).

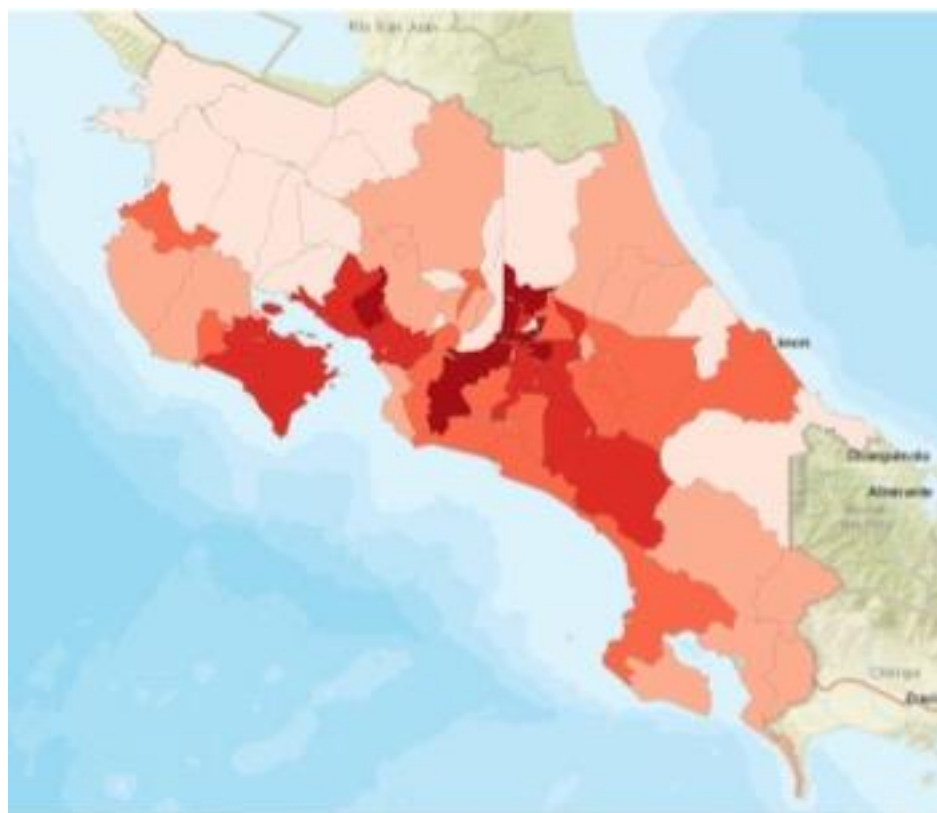
Por último, todas las brechas por grupo etario tendieron a crecer, siendo la única excepción aquella entre jóvenes de 25-34 años y adultos de 60 años o más. Las personas jóvenes de 25 a 34 años son el grupo con la mayor escolaridad general (10,6 años) mientras el nivel educativo de las personas mayores a los 59 años se posiciona entre los tres más bajos de la lista.

Ahora bien, desde la perspectiva territorial, los datos del mapa 1 son claros en demostrar la existencia de amplias diferencias entre los sectores centrales del país y las regiones costeras y fronterizas. El rango de escolaridad se estima en 4,1 años, mismo que va desde los 4,4 años en

Palmares a los 8,50 años en Montes de Oca. Esto equivale a una brecha de 1,95 veces en favor del segundo de los cantones. Al agrupar los distintos cantones por quintil de escolaridad, los resultados indican que la escolaridad media de los 9 cantones del primer quintil es de 4,85 años ubicándose allí cantones como Los Chiles, Upala, Sarapiquí y La Cruz, entre otros. El quinto quintil, por su lado, tiene una escolaridad promedio de 8 años y allí se localizan cantones como Tibás, San Pablo, Heredia y Santo Domingo, entre otros.

### Mapa 1

#### Quintiles territoriales de escolaridad en población adulta



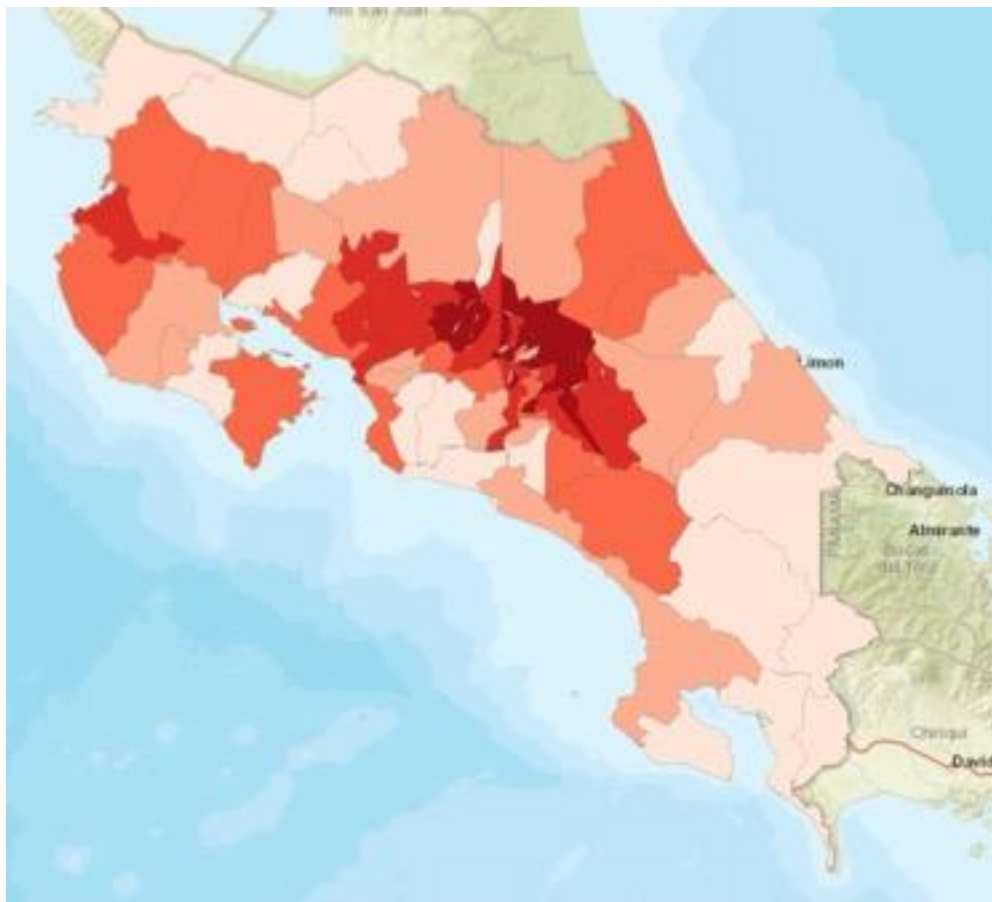
Fuente: Base de datos del ICN.

En aras de complementar los resultados antes mencionados, el análisis incorpora dos indicadores de proceso educativo y de insumo. El primero se refiere al porcentaje del alumnado de primaria que recibe lecciones de informática y el segundo al número de estudiantes por profesor de secundaria.

En relación con el primero de ellos, amplias brechas caracterizan la cobertura de estudiantes con lecciones de informática. Un total de 11 cantones presentan coberturas menores al 50% existiendo tres de ellos (Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto) donde la población beneficiada con lecciones de informática no superó el 33%. Al otro lado del espectro se posicionan 26 cantones con cobertura superiores al 90%. Sobresalen cuatro casos donde el porcentaje de alumnos beneficiados supera el 97%: Naranjo, Vázquez de Coronado, Oreamuno y Montes de Oca. El mapa 2 muestra la alta concentración de los cantones más beneficiados en la zona central del país en contraposición a las zonas fronterizas y costeras donde los valores caen de forma importante (esto es, donde las regiones son más claras).

## Mapa 2

### Porcentaje de estudiantes de primaria que recibe informática



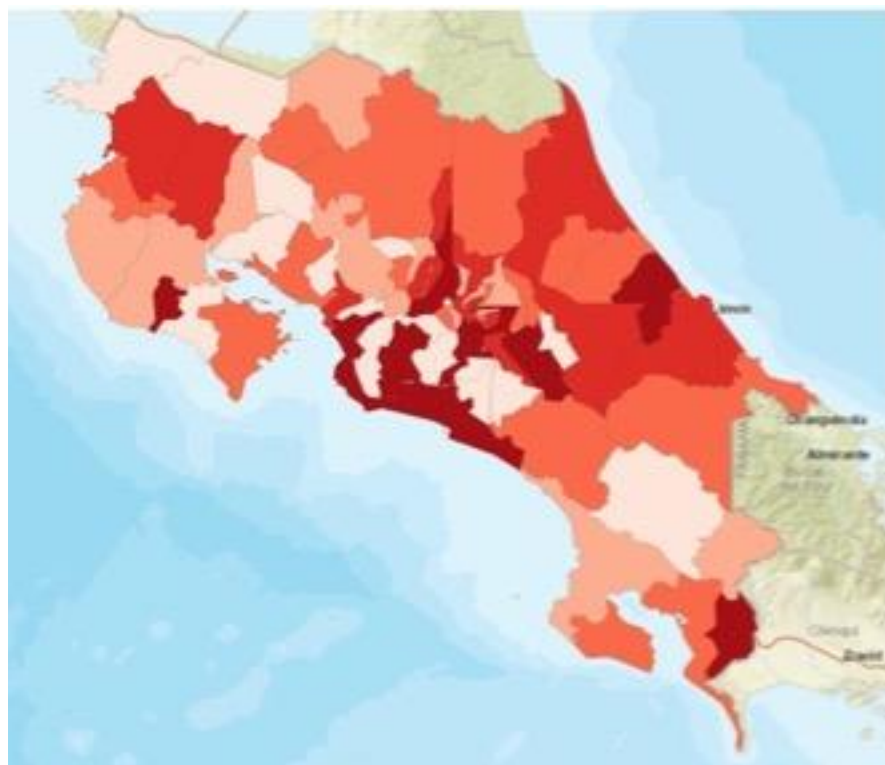
Fuente: Base de datos del ICN.

El otro indicador seleccionado se refiere al número de estudiantes por profesor de secundaria. Si bien no hay un único parámetro de referencia internacional para determinar el tamaño óptimo, diversas fuentes consideran que coeficientes en el rango 15:1 a 18:1 podrían ser adecuados a nivel de secundaria. Rangos menores podrían ser considerados ineficientes en tanto mayores a 18 alumnos podrían atentar contra la calidad educativa en aspectos como atención individualizada.

Los datos disponibles estiman un promedio nacional de 12,5 estudiantes por profesor de secundaria con un rango que va desde un mínimo de 8 alumnos en Dota y Nandayure hasta un máximo de 23 en Hojancha. Si la atención se enfocara en aquellos con cantones cuyas ratios fueran 15/18 a 1, entonces solamente 9 territorios están en el rango recomendado: Puriscal, Goicoechea, Desamparados, Santa Bárbara, Alajuelita, Quepos, Corredores, Parrita y Garabito. Al analizar los extremos, un total de 5 cantones tienen coeficientes por debajo de 9 estudiantes por docente, siendo Dota, Nandayure, Zarcero, León Cortés Castro y Mora los clasificados en ese segmento. Por su lado, Orotina y Hojancha superan los 18 estudiantes por docente.

### Mapa 3

#### Número de estudiantes por profesor de secundaria



Fuente: Base de datos del ICN.

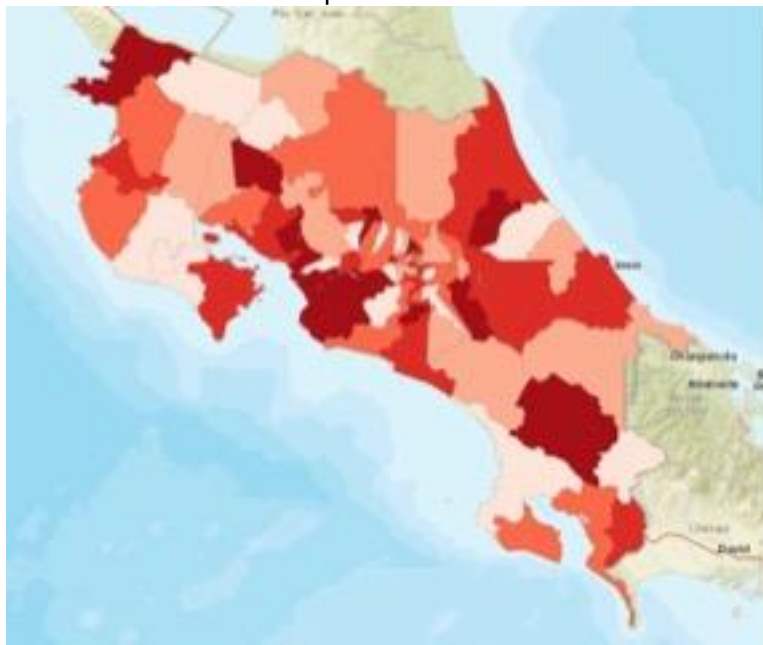
### Desigualdad en el derecho a una vida sana

En materia de salud, la variable considerada para el análisis territorial es la tasa de mortalidad infantil. Si bien la misma (por cada 1,000 nacidos vivos) en Costa Rica ha sido históricamente baja y de un dígito, la desagregación cantonal sí muestra una amplia dispersión de resultados. El promedio simple en este indicador muestra un valor de 8,1 decesos en un rango que va desde 0 muertes hasta 29,8 fallecimientos. Las mayores tasas (colores más oscuros) suelen ubicarse en zonas alejadas de la GAM con particular énfasis en las fronteras y algunas áreas costeras.

Individualmente, el país reporta 7 cantones donde la tasa de mortalidad infantil es nula. Estos cantones son Acosta, San Mateo, Poás, Guatuso, Santa Bárbara, Nandayure y Hojancha. Es notoria la dispersión en muchos puntos del territorio nacional. Por otro lado, al referirse a los sitios con mayor mortalidad infantil, aparecen como los más elevados los cantones de Orotina, Guácimo, Puriscal, León Cortés y Turrubares.

#### Mapa 4

#### Tasa de mortalidad infantil por cantón



Fuente: Base de datos del ICN.

En aras de ampliar el alcance sanitario en la visión multidimensional, el análisis incorpora dos variables adicionales, a saber, el porcentaje de población con diabetes y el porcentaje con hipertensión. Vale decir que las dos condiciones presentan una correlación elevada entre ellas del orden del  $R^2 = 0,83$ . Es decir, los cantones con elevadas tasas de diabetes suelen coincidir en un buen porcentaje con aquellos que también experimentan elevadas tasas de personas con hipertensión.

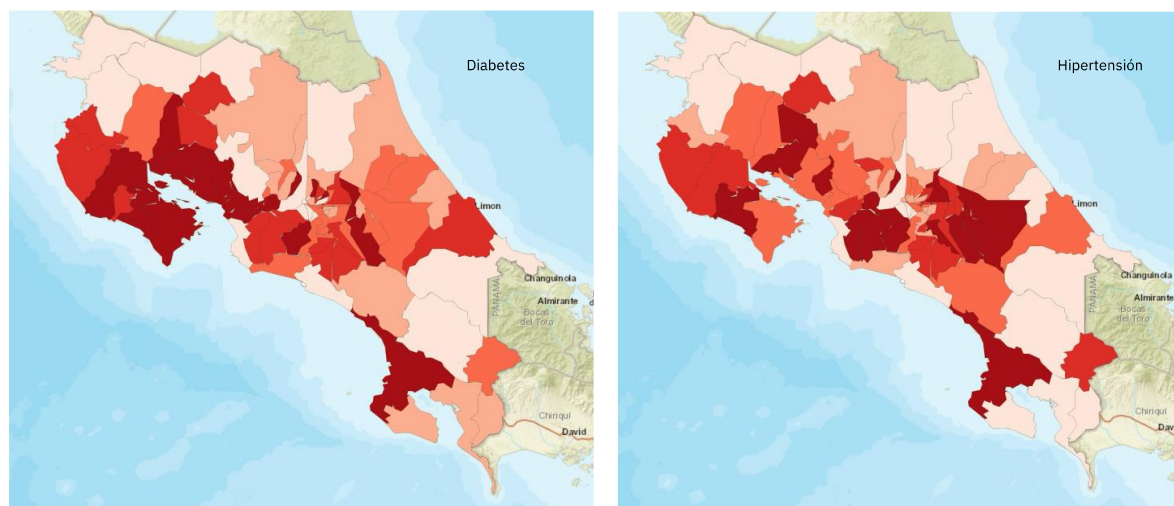
La tasa nacional de diabetes se estima en 5,7% de la población nacional (promedio simple de cantones) con un rango que va del 3,1% en Talamanca al 9,5% en Acosta. Por su lado, en materia de hipertensión, la incidencia va del 5,5% de la población en Talamanca al 23,6% en Nandayure para una media nacional del 13,4%. La particularidad de estas dos condiciones es la alta cantidad de lugares que comparten las primeras o las últimas posiciones en cuanto a incidencia de cada enfermedad. Por ejemplo, de los 15 cantones con menores niveles de diabetes, 12 también aparecen dentro de los sitios con menores niveles de hipertensión. Los primeros 5 cantones con menores tasas son Talamanca, Los Chiles, La Cruz, Flores y Belén. Llama la atención los primeros tres por cuanto en una cantidad amplia de indicadores económicos y sociales, esos cantones suelen aparecer con rezagos importantes respecto al resto de las unidades, con lo cual un resultado bajo en enfermedades crónicas no concuerda con lo esperado dados sus respectivos perfiles. Esta particularidad podría más bien reflejar un problema de acceso a servicios de primer nivel especialmente, de forma que su ausencia podría generar un sub-registro de los verdaderos casos de personas con diabetes e hipertensión. Esto se puede aproximar por el hecho de que, en los tres cantones considerados, el 63% de la población se ubica a 15 Km o más del EBAIS más cercano. Caso contrario, Flores y Belén, cantones con elevado nivel de desarrollo humano, se ubican en los puestos cuatro y cinco con menores tasas al tiempo que toda su población se encuentra a menos de 15 Km.



En cuanto a los cantones con mayores tasas, si bien existe un poco más de dispersión, se mantiene una vinculación importante. Así, de los 15 cantones con mayores tasas de incidencia de diabetes, 7 repiten en cuanto a incidencia de hipertensión. Sobresalen Nandayure, Montes de Oro y Acosta.

#### Mapa 5

#### Porcentaje de la población con diabetes e hipertensión, por cantón



Fuente: Elaboración propia.

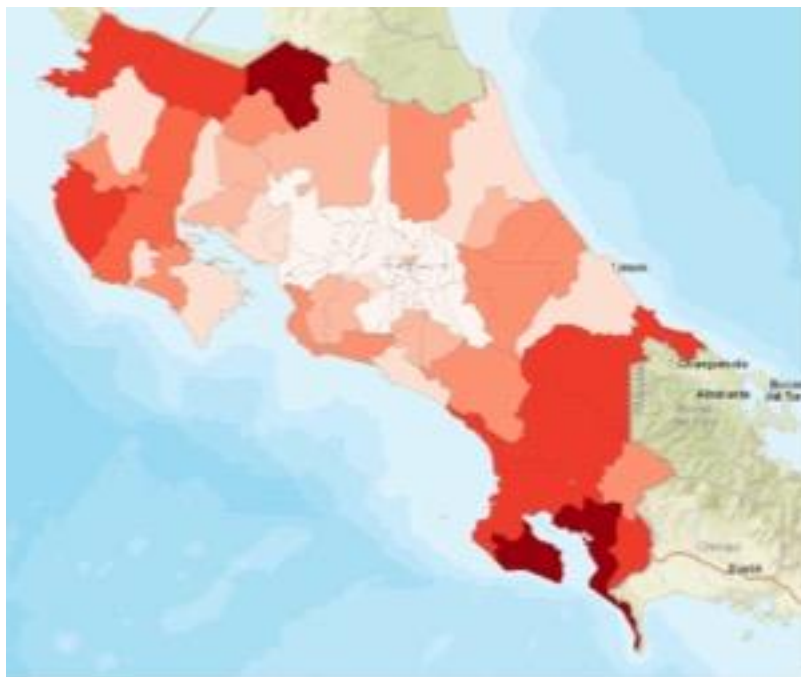
Un aspecto de interés para el presente análisis se refiere al nivel de accesibilidad de la población a servicios de primer nivel. Para ello, se consideró el porcentaje de la población con acceso a un EBAIS a una distancia mayor a los 15 Km desde su hogar. En este caso, cuanto mayor el porcentaje, peor la situación del cantón.

A nivel global, los resultados muestran que un 18% de la población costarricense reside a más de 15 Km de un EBAIS. Esta cifra, sin embargo, está acompañada por una cantidad importante de consideraciones particulares. Por ejemplo, 18 cantones del país tienen a toda su población viviendo con acceso apropiado al primer nivel de atención, cifra que se puede ampliar a 32 cantones con más del 97% de su población con acceso apropiado. Al otro lado del espectro aparecen 9 cantones cuya población precisa recorrer esos 15 Km o más para visitar un EBAIS. Estos cantones son Upala, Buenos Aires, Corredores, Talamanca, Osa, Santa Cruz, La Cruz, Los Chiles y Golfito. De hecho, en estos dos últimos cantones, el porcentaje de la población sin acceso oportuno supera el 73,5%.



### Mapa 6

Población con acceso a EBAIS mayor a 15 Km



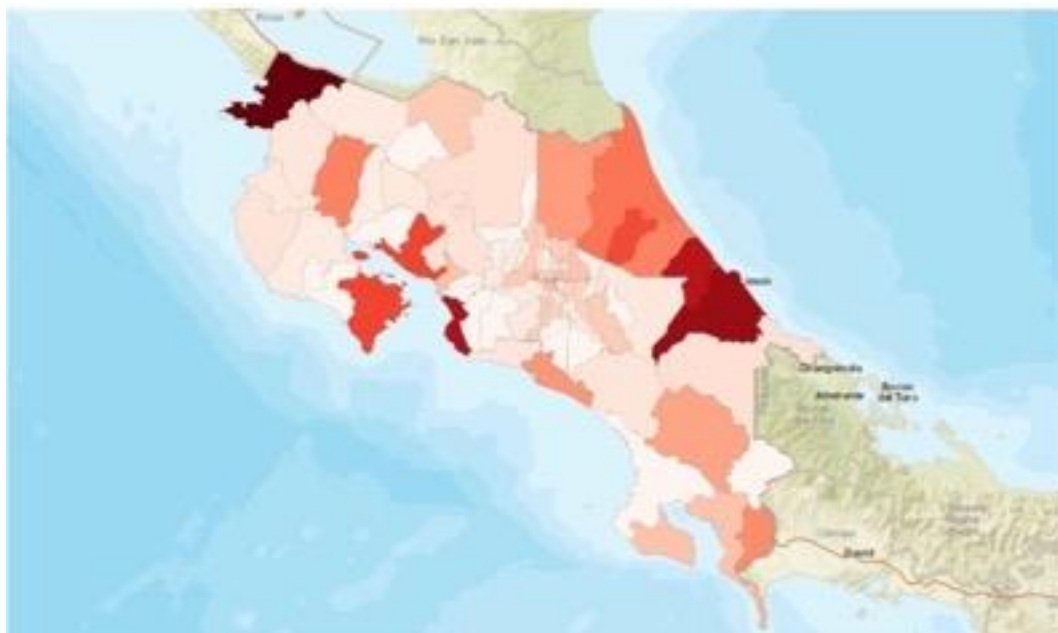
Fuente: Elaboración propia.

### **Desigualdad al derecho a vivir una vida libre de violencia**

Dos indicadores fueron seleccionados para esta dimensión, a saber, la tasa de homicidios y la tasa de asaltos por cada 100,000 habitantes. En un primer término, el promedio nacional se establece en 9,6 casos por cada 100,00 habitantes en un rango que va desde los cantones sin reporte de homicidios hasta aquellos cuya tasa supera los 35,0 casos.

### Mapa 7

#### Distribución de tasa de homicidios por cantón, según quintiles



Fuente: Elaboración con base en ICN.

Individualmente hablando, 19 cantones aparecen sin reporte de homicidios en tanto otros 15 experimentaron tasas de 15 homicidios o más. Al primer grupo pertenecen cantones como los de la Zona de los Santos (Dota, Tarrazú y León Cortés), Turrubares, Orotina, Puriscal y San Mateo, entre otros. Por su lado, los cinco cantones con mayores tasas de homicidios poseen todos valores por encima de los 35 episodios por 100,000 habitantes. Esos cinco cantones son Puntarenas, Matina, Garabito, Limón y La Cruz.

Cuando el análisis se traslada al número de asaltos por cada 100,000 habitantes, al menos tres consideraciones son importantes a detallar. Primero, a nivel nacional, el promedio simple de asaltos es de 149,9 casos por 100,000 habitantes. El rango de tasas va desde los 0 casos a los 817,7 casos por 100,000 personas.

Segundo, de nuevo tres cantones sin reporte de homicidios aparecen en la lista de sitios donde no hubo episodios de asalto. Estos cantones son Turrubares, Dota y San Mateo. Por otro lado, siete cantones que se ubicaron entre los 15 de mayores tasas de homicidios también aparecen en el tope de la lista de sitios con mayores niveles de asaltos: Pococí, Garabito, Limón, Quepos, Guácimo, Matina y Siquirres. La mayor tasa nacional, Siquirres, se eleva a 817,7 casos por 100,000 personas.

Tercero, existen dos casos que combinan resultados. Buenos Aires, por ejemplo, se ubica entre los cantones con mayores tasas de homicidios, pero al mismo tiempo se posiciona como 12 va entre las que tuvieron menos tasas de asalto. Por el contrario, Montes de Oca, cuya tasa de homicidios es cero, muestra una tasa de asaltos de 277,5 casos por 100,000 habitantes. De hecho, el cantón es 73 de 82 cantones en cuanto a asaltos (ordenados de forma ascendente).

## Mapa 8

### Distribución de tasa de asaltos por cantón, según quintiles cantonales



Fuente: Elaboración con base en ICN.

Una valoración conjunta entre las tasas de homicidios y las de asaltos permiten una consideración más integral en materia de seguridad. Estadísticamente hablando, la correlación entre ambos indicadores se estima en 0,49 un resultado que sugiere una moderada cercanía entre ellos. Al valorar ambas tasas, los cantones con mejor posicionamiento serían Turrubares, Dota, San Mateo, Nandayure y Sarchí. Al otro extremo, los cinco cantones con mayores niveles de inseguridad serían Garabito, Limón, Guácimo, Siquirres y Matina.

### ***Desigualdad en el derecho a vivir una vida en un entorno ambientalmente seguro y sostenible***

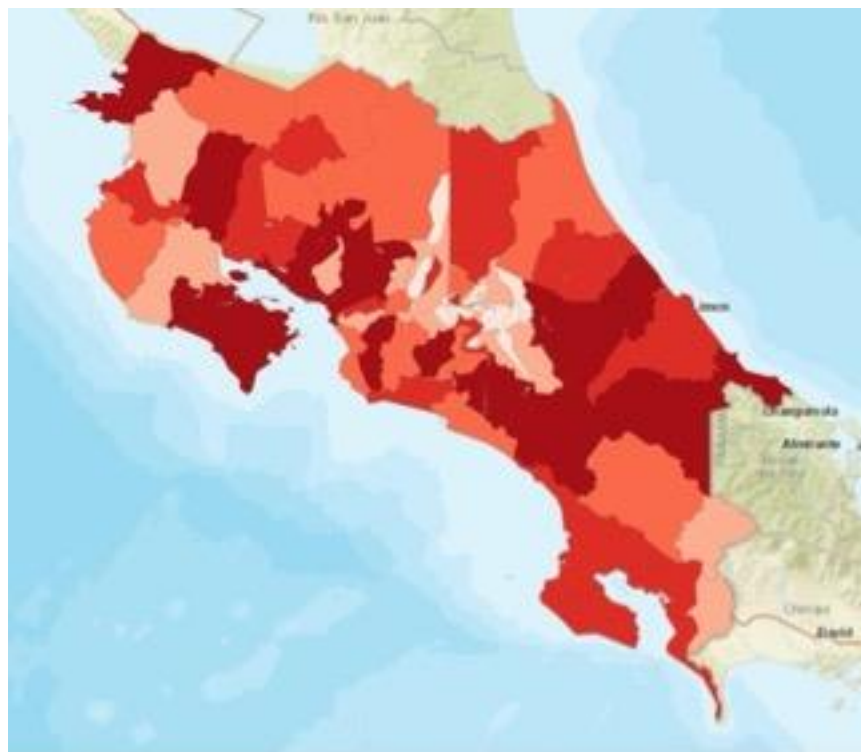
El ámbito de la desigualdad ambiental (i.e. la exposición diferenciada a riesgos de naturaleza medioambiental) se valora utilizando el índice cantonal sobre las condiciones para un desarrollo inmobiliario sostenible, presentado por el PEN en su informe 2020 con base en información del periodo 2016-2018. Al respecto, el PEN (2020: 33) explica y describe la herramienta en los siguientes términos:

“el estudio elabora un índice y una clasificación especial con una desagregación cantonal sobre las condiciones para un desarrollo inmobiliario más sostenible, que integra aspectos sobre la exposición a desastres, la capacidad de provisión de servicios públicos y la existencia o no de un espacio que permita una actividad inmobiliaria ordenada, con una regulación del uso del suelo que enmarque los procesos constructivos. Es una herramienta diferente y complementaria (no sustitutiva) para otras aproximaciones que identifican condiciones específicas del territorio en varias materias (riesgo de desastres y vulnerabilidad ambiental, por ejemplo).

El índice fluctúa entre 0 y 1 donde 1 expresa el valor más alto y por ende la mayor vulnerabilidad posible. El valor medio de la métrica se estima en 50,1 con 34 cantones teniendo valores por debajo de 50 puntos y los restantes 47 estando en 50 puntos o más. Existe una importante cercanía entre el puntaje obtenido por los cantones menos y más vulnerables con otros resultados multidimensionales ya comentados. Los cinco cantones con menores niveles de vulnerabilidad inmobiliaria son Belén, Flores, Escazú, San Isidro y Grecia. Por su lado, entre los cinco cantones con mayores riesgos, todos con valores por encima de 68 puntos, son Turrialba, Turrubares, Jiménez, La Cruz y Talamanca. Cabe destacar que los 10 cantones con menos riesgos (correspondientes al primer quintil en la distribución cantonal) pertenecen, en su totalidad, a la región Central del país, siendo 4 de San José, 3 de Heredia, 2 de Cartago y 1 de Alajuela. Los cantones con más riesgo, por su lado, ofrecen un panorama geográficamente más variado por cuanto 3 son de San José, 2 de Puntarenas, 2 de Guanacaste, 2 de Cartago y 1 de Limón.

#### Mapa 9

#### Índice cantonal sobre las condiciones para un desarrollo inmobiliario sostenible



Fuente: Elaboración con base en PEN, 2020.

#### **Desigualdad en el derecho a vivir una vida confortable**

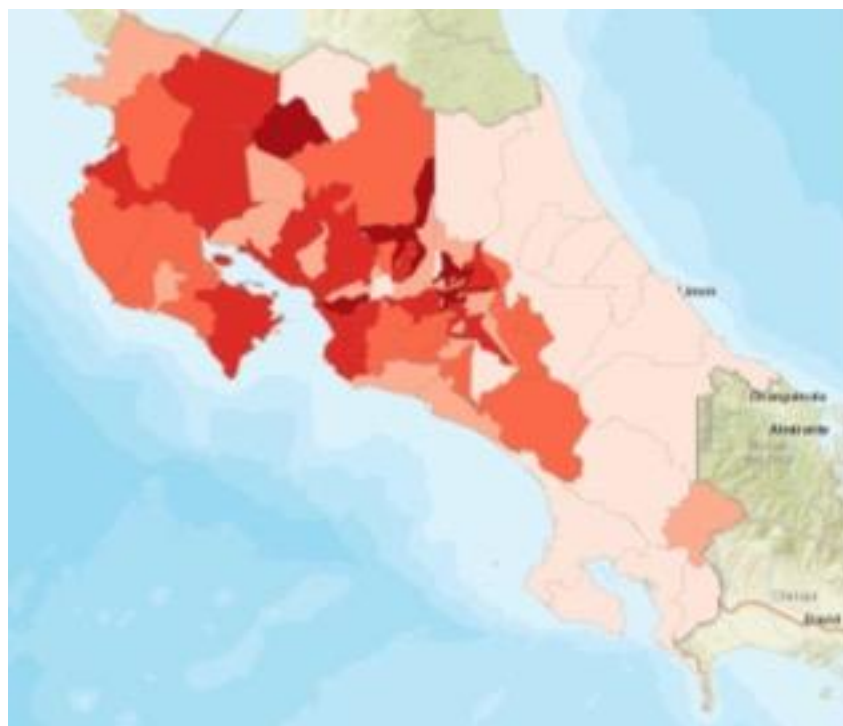
Para aproximar la dimensión de vida confortable, el análisis parte de 3 indicadores: acceso a agua potable, acceso a servicios de Internet y cantidad de interrupciones eléctricas por cantón por año.

En lo referente a acceso a agua potable, el rango de cobertura fluctúa entre un mínimo de 54,6% en Alvarado y un 97,2% en San Isidro de Heredia y Curridabat. El mapa muestra la particularidad

de un país cuyo suministro de agua potable es deficiente en la costa caribeña y la zona fronteriza con Panamá en tanto en la primera mitad del territorio el porcentaje mejora notoriamente, con una combinación de diversas situaciones. En total, 15 cantones experimentan coberturas poblacionales con agua potable que superan al 95% de su población. Por otro lado, otros 14 cantones no superan el 80% de cobertura.

#### Mapa 10

#### Porcentaje de hogares con acceso a agua potable, por cantón



Fuente: Elaboración con base en ICN.

En lo referente a interrupciones eléctricas por año, el número promedio de cortes es de 10. Sólo un cantón, Oreamuno, reporta cero interrupciones, pero hay adicionalmente 6 cantones con menos de cinco interrupciones anuales. Estos cantones son Zarceró, Paraíso, Grecia, Pérez Zeledón, Alvarado y Palmares. Los 11 cantones con mayores problemas al respecto tienen todos promedios anuales superiores a los 15 cortes o más siendo Hojancha, Mora y Talamasca los territorios más afectados. Esto quiere decir que, en promedio, una persona residente de alguno de los 10 cantones con menos interrupciones tendrá un apagón cada 89 días, mientras esa misma persona, si viviera en alguno de los cantones con mayores problemas, experimentaría esa misma condición cada 19 días.





## Mapa 12

### Porcentaje de hogares con acceso a Internet, por cantón



Fuente: Elaboración con base en ICN.

Un detalle importante para anotar sobre esta dimensión es que los coeficientes de correlación entre variables son bajos (agua-Internet con un 0,17, agua-cortes eléctricos con -0,30 e Internet con cortes con -0,27). Esta baja relación entre variables sugiere la existencia de un patrón caracterizado por la amplia dispersión de resultados de forma que un cantón que goza de buenos resultados en un indicador podría perfectamente observar resultados moderados o adversos en otro. Por ejemplo, Poás se posiciona entre los tres cantones con mejor cobertura con agua potable pero su cobertura con Internet se ubica por debajo del promedio nacional. Talamanca es el cantón con los peores indicadores de electricidad y agua, pero es 21 en cuanto a las coberturas más bajas con Internet.

### ***Patrones en torno al derecho a tener una participación política activa***

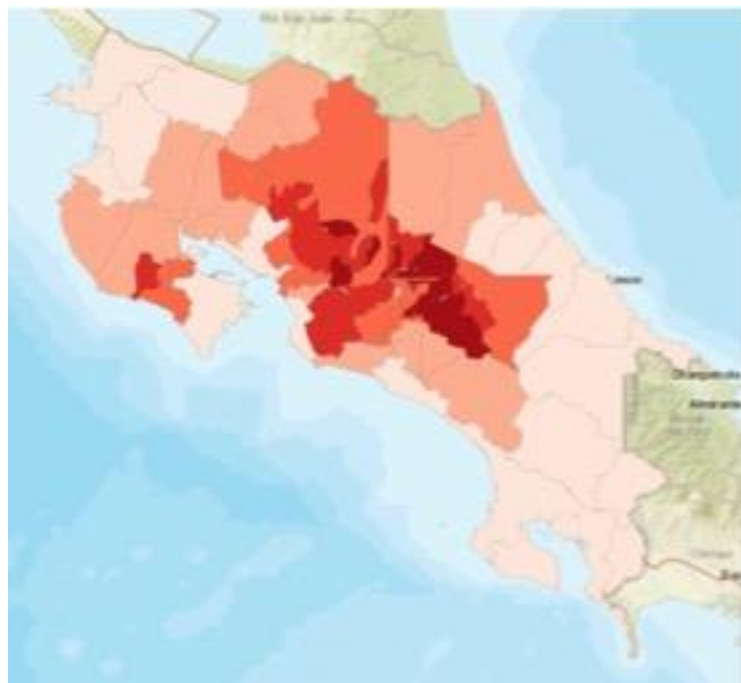
Para el análisis de la dimensión de naturaleza política se han seleccionado dos indicadores relacionados con participación en procesos electorales. Por un lado, se tiene la participación estructural en elecciones nacionales en tanto el segundo indicador se refiere a la participación estructural en elecciones municipales.

En relación con el primero de ellos, la participación nacional promedio se estima en un 66,8% de la población en edad de votar. El cantón con menor participación es Golfito (51,5%), donde una de cada dos personas ejerció su derecho en la última votación en tanto Zarcero (81,4%) lideró la participación. En total, 18 cantones tuvieron tasas por debajo del 60% siendo Golfito, Corredores, Osa, Talamanca y Coto Brus los que mostraron las cinco tasas más bajas. Por su lado, El Guarco, Cartago, Belén, Flores y Zarcero superaron el 75% de participación. Según se

deriva del mapa 2, las mayores tasas de participación se concentran en cantones de la GAM mientras aquellas zonas de baja votación (en colores claros) se focalizan en cantones costeros y fronterizos. Cuanto más se aleja el cantón del centro del país, menor participación en elecciones nacionales muestra.

### Mapa 13

Distribución de participación en elecciones nacionales por cantón, según quintiles



Fuente: Base de datos del ICN.

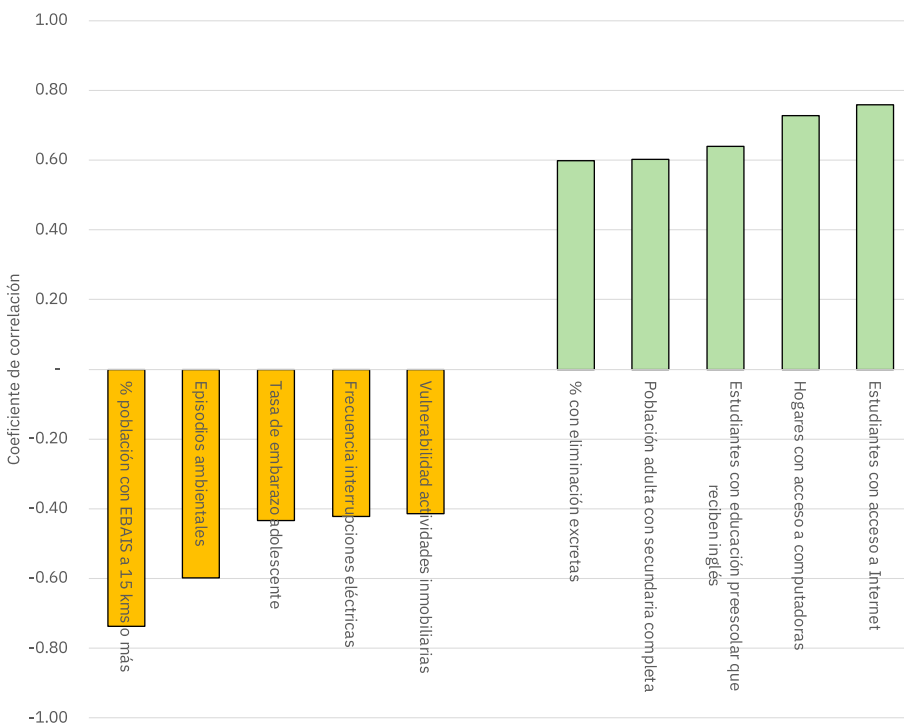
Una forma complementaria de analizar la participación cantonal en las elecciones nacionales es a través del grado de asociación entre el porcentaje de votación y algunos determinantes sociales y ambientales. El gráfico 2 muestra los resultados de dicha correlación. A nivel general, las mayores participaciones se encuentran positivamente relacionadas con elevados accesos a conectividad (estudiantes con acceso a Internet tiene correlación de 0,76) y logro educativo (población adulta con secundaria = 0,60).

Por su lado, la asistencia a las urnas estaría negativamente correlacionado con dos dimensiones principalmente, a saber, salud y ambiente. El acceso a servicios de salud (i.e. cuanto mayor la proporción de población con acceso distante a EBAIS, menor la tendencia a votar) y la existencia de altos riesgos ambientales son dos ejemplos. Así, por ejemplo, aquellos sitios con mayor número de emergencias de origen ambiental o mayor riesgo para la construcción (variable aproximada a la existencia de riesgos ambientales) suelen mostrar menores niveles de participación política que aquellos en situación inversa.



Gráfico 2

Correlación entre porcentaje de votación en elecciones nacionales y determinantes sociales y ambientales



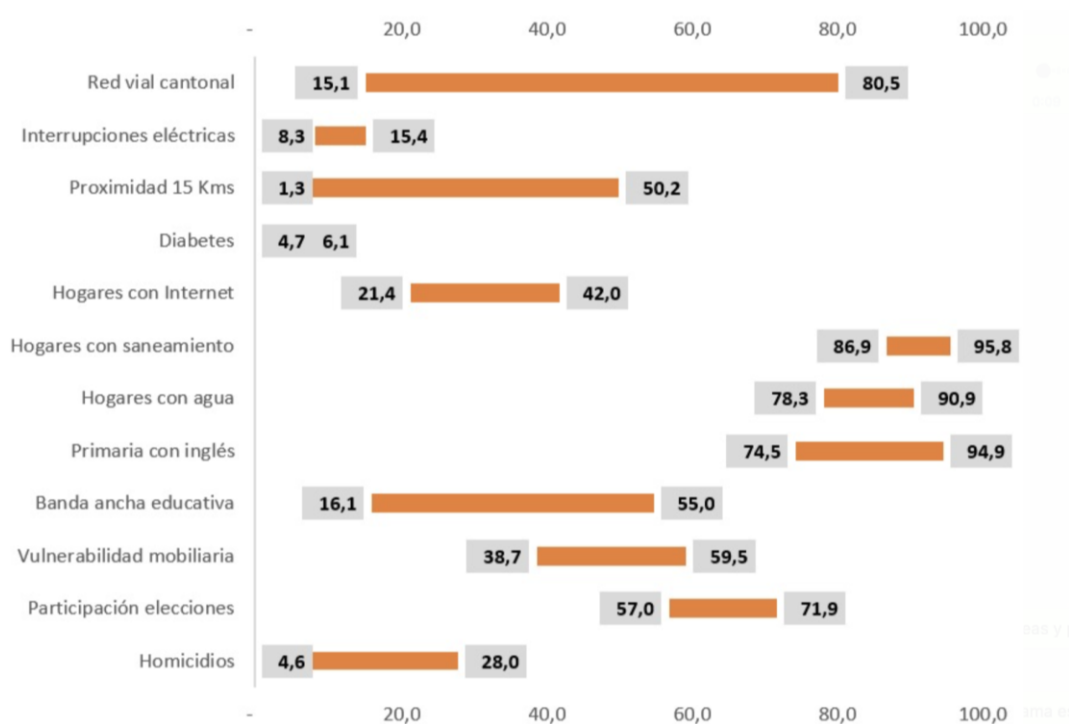
Fuente: Elaboración del autor.

### Una Costa Rica fragmentada más que polarizada: coexistencia de múltiples conglomerados cantonales con amplias brechas multidimensionales entre sí

El último apartado tiene como objetivo agrupar en torno a una serie de indicadores a los distintos cantones según características y patrones que sean similares entre sí. Para ello, el análisis aplica la técnica de clúster, misma que permite estructurar grupos de cantones que comparten condiciones similares sin que necesariamente se encuentren territorialmente próximas. Las variables utilizadas son las que se presentan en el gráfico 3, cada una con sus respectivos valores mínimos y máximos.

Gráfico 3

Valores máximos y mínimos de variables usadas en análisis integrados



Fuente: Elaboración del autor.

Los resultados correspondientes se sintetizan en el Cuadro 1. En total, cinco agrupaciones cantonales fueron estructuradas<sup>3</sup>. La lista de cantones a los cuales pertenecen cada uno de ellos se encuentra en el Anexo 1.

Varias conclusiones se derivan del cuadro respectivo. Primero, el mapeo general sugiere la existencia no es un patrón polarizado sino de un país altamente fragmento donde los cinco grupos coexisten cada uno con una serie de características específicas.

Segundo, si bien cada aglomerado se caracteriza por el predominio de cierto patrón que lo distingue del resto, no existe un solo caso donde esa tendencia sea uniforme. Por ejemplo, el aglomerado 1 aparece con los mejores indicadores en 9 de los 12 indicadores. Sin embargo, el grupo tiene un indicador (tasa de homicidios) que lo aleja de esas posiciones y lo ubica como el clúster con la segunda tasa más alta de entre los cinco grupos. Algo similar ocurre con el conglomerado 3, el cual encuentra en la red vial cantonal y en la tasa de personas con diabetes los dos indicadores que rompen el predominio de los demás. En el caso de los conglomerados 4 y 5, cuyos resultados se posicionan persistentemente entre los peores, se observan buenos resultados en la tasa de homicidios, el acceso a banda ancha educativa y la población con

<sup>3</sup> La coloración verde de las celdas implica un posicionamiento favorable en el respectivo indicador, siendo la tonalidad oscura la de mejores resultados. El color amarillo denota aquellos valores en posiciones intermedias en tanto los colores naranja y rojo reflejan los indicadores con peores características

diabetes<sup>4</sup>. En corto, no existe una sola zona del país, según la estructura antes comentada, que posea condiciones tales que no les haga experimentar al menos una dimensión con rezago.

## Cuadro 2

### Distancias entre aglomerados respecto a mejor resultado, por indicador (en veces)

Dimensión	Clúster 1	Clúster 2	Clúster 3	Clúster 4	Clúster 5
Tasa de homicidios	1,85	1,35	1,57	1,00	6,09
Participación elecciones	1,00	0,96	0,92	0,80	0,79
Vulnerabilidad mobiliaria	1,00	1,32	1,35	1,35	1,54
Banda ancha educativa	1,00	0,41	0,42	0,42	0,29
Primaria con inglés	1,00	0,98	0,95	0,79	0,89
Hogares con agua	1,00	0,98	0,97	0,94	0,86
Hogares con saneamiento	0,99	1,00	0,98	0,94	0,91
Hogares con Internet	1,00	0,78	0,63	0,51	0,57
Diabetes	1,13	1,28	1,30	1,19	1,00
Proximidad 15 Kms	1,00	9,69	14,08	38,62	36,92
Interrupciones eléctricas	1,00	1,11	1,29	1,39	1,86
Red vial cantonal	1,00	0,76	0,28	0,19	0,45

Fuente: Elaboración del autor.

Las conclusiones derivadas del trabajo cualitativo (Caja 2) muestran la importancia del territorio en forma como las personas viven la desigualdad. Las perspectivas entre personas residentes rurales y las urbanas difieren en una serie de aspectos y necesidades. Factores como la lejanía “del centro” y la poca valoración de la educación resaltan entre las preocupaciones de las personas entrevistadas en las zonas rurales en tanto temas como seguridad y costo de vida fueron enfatizados por las personas residentes urbanas.

Propiamente en lo dimensional, unas mejores condiciones de infraestructura y servicios (calles, puentes, medios de transporte público, agua, internet) se valora como parte de lo que significa tener bienestar entre las personas consultadas que viven en las zonas rurales, principalmente. Estos son ámbitos que en los cantones urbanos no aparecieron en primera instancia, ya que aunque se indica que, por ejemplo en referencia a la calidad de transporte público en general es posible llegar a sus sitios de destino sin mayor problema, aún cuando las condiciones post-pandemia han desmejorado, en aspectos como la puntualidad, la periodicidad, la condición de algunos autobuses y el trato de algunas personas que les conducen.

La puesta en valor de lo que significa mejores condiciones de infraestructura y servicios fue más evidente en el caso de Tuis de Turrialba, La Cruz y Talamanca, al tratarse de elementos básicos para trasladarse de un lugar a otro, establecer comunicaciones o realizar las tareas más cotidianas como cocinar, usar el inodoro o bañarse. Estas acciones no siempre se pueden desarrollar de la misma forma que en otras partes del país, no obstante, la diferencia en la condición de los caminos, la conexión de internet, el acceso a agua potable, entre otros, de estos

<sup>4</sup> La baja tasa promedio de población con diabetes en el conglomerado 5 podría mostrar barreras de acceso a servicios de primer nivel que no logran detectar las enfermedades crónicas de esta población. Esta hipótesis se fortalece al contrastar este resultados con la población que posee un EBAIS a 15 o más kilómetros de su residencia.

cantones rurales también es palpable a lo interno de los mismos cantones, entre comunidades vecinas.

---

#### Recuadro 1

##### Desigualdad y territorio: algunas valoraciones a partir del estudio de campo

La investigación cualitativa desarrollada en agosto del 2023 para el Informe de Estado de la Nación permitió evidenciar el comportamiento del territorio como criterio de análisis. Se apuntan grandes diferencias en el acceso a oportunidades educativas y laborales de calidad en las comunidades de los cantones rurales de La Cruz (Centro), Turrialba (Tuis) y Talamanca (varias) teniendo en cuenta también como interactúan de manera permanente otros elementos interseccionales como el género y la edad. Esta lejanía de los centros de toma de decisiones se percibe como excluyente y discriminatoria por parte del Estado, en donde su situación geográfica suma al entramado que origina las expresiones de desigualdad en las que encuentran mayores dificultades para poder actuar desde su individualidad.

Este tema no es menor cuando se trata de contar, incluso, con servicios básicos como el agua potable o electricidad, atención de la salud en los diferentes niveles, incluyendo la atención de emergencias e internet. El estado de las vías de comunicación y de los medios de transporte colectivo, también representa un obstáculo para las comunidades rurales consultadas, siendo las habitadas por personas indígenas de Talamanca las más afectadas. Este aislamiento les hace no ser receptores de muchas de las ventajas de las que gozan otros territorios del país, lo que genera otros fenómenos culturales, como la apatía hacia la participación de los procesos electorales, la migración del campo a la ciudad, el desarraigo familiar y comunitario, la duplicación de gastos en el caso de las jefaturas de hogar que deben salir de sus territorios por trabajo, mayor incidencia de delitos, y la percepción de estar en el olvido.

Las desigualdades que deja ver el territorio en el que las personas habitan nacen, en el caso de cantones como Desamparados (Gravilias) o Escazú (Centro), también permiten destacar que hay marcadas desigualdades urbanas, por ejemplo, en ámbitos como la seguridad. En este ámbito las personas en Escazú se mostraron muy satisfechas por vivir en un cantón que consideran tranquilo, aunque les signifique alquilar viviendas por altos montos. En el caso de Desamparados, las personas sienten coartada su libertad de movimiento en ciertas horas del día y en ciertos lugares de su misma comunidad/distrito/cantón, viendo como su territorio se redefine constantemente, por aspectos como este.

Fuente: García, 2023.

---

#### Transmisión intergeneracional: resultados y determinantes

*Él siempre fue peón hasta que en un momento logró sacar un préstamo y comprarse su propio bote y la economía mejoró un poquito en mi casa, pero aun así eran condiciones muy difíciles porque el mar es muy inestable. Ellos siempre lucharon porque yo estudiara. (Hombre, 30 años, La Cruz)*

La movilidad intergeneracional (MI) se refiere a la relación existente entre el estado socioeconómico de los progenitores y el status que alcancen sus hijos e hijas cuando sean personas adultas (Causa y Johansson, 2009; Cappellari, 2021). Si la MI es elevada, eso significa que los hijos tenderán a copiar el perfil socioeconómico de sus padres, sea este en forma de ingresos, ocupaciones o niveles educativos similares.

Sobre su análisis y valoración, dos aspectos podrían ser importantes a tomar en cuenta. Siguiendo a CAF (2022), existe un cuerpo de información que se interesa por los patrones y la

forma que adquiere dicha MI en tanto, por otro lado, es clave entender los canales de reproducción de la desigualdad. Sobre los primeros, los patrones de MI pueden detallarse a partir de aspectos como ingresos de los hijos e hijas en relación con aquellos de sus padres, ocupaciones en los que se desempeñan los hijos e hijas, en cuanto a complejidad (gerencial, profesional, administrativo, técnico, etc) y nivel educativo alcanzado por la segunda generación en relación a la de los progenitores

El segundo bloque analítico importante busca analizar los factores que son promotores u obstáculos de la MI. En aras de estructurar el análisis, los autores recomiendan estudiar la MI desde tres canales de reproducción de la desigualdad, según su propia terminología. Siguiendo a CAF (2022), estos canales podrían sintetizarse en formación de desarrollo humano, existencia de oportunidades laborales y procesos de acumulación de riqueza.

Esta sección detalla los resultados de una primera aproximación al tema de la transmisión intergeneracional a partir de indicadores usualmente estimados en la materia. Para ello, el análisis ha calculado 3 coeficientes de transmisión padres-hijos: la educativa, la ocupacional y la de ingreso. Posteriormente, en un segundo momento, el análisis profundiza en determinantes multidimensionales que correlacionan con la movilidad intergeneracional y los niveles generales de desigualdad.

### **Una amplia mayoría de hijos e hijas supera el nivel educativo de sus progenitores; progreso en el mercado laboral es observable, pero menos significativo**

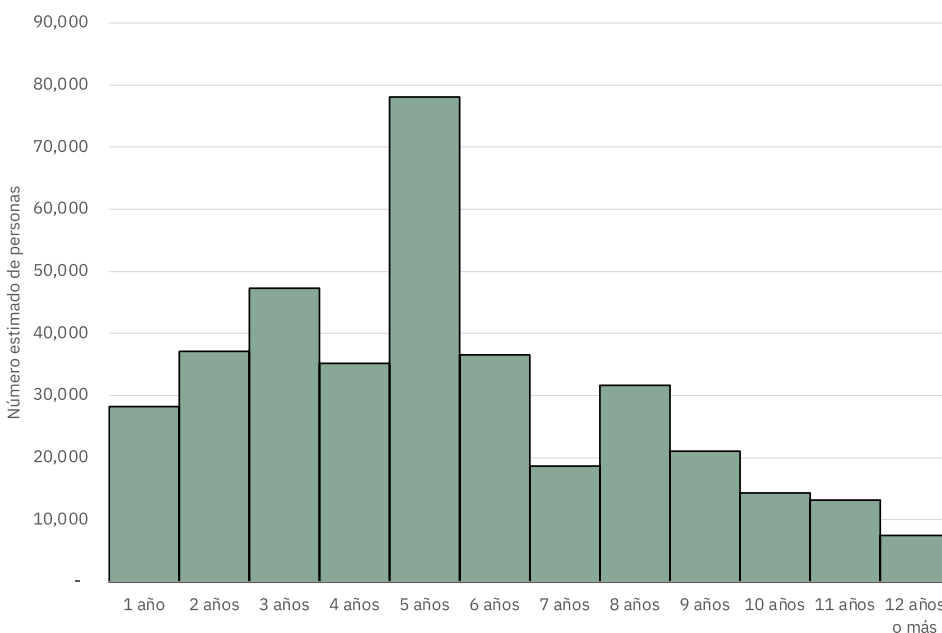
La escolaridad promedio de las jefaturas de hogar en Costa Rica se estima en 8,7 años con 53,6 años de edad en tanto para sus descendientes esos valores alcanzan los 10,5 años y 35,5 años respectivamente. El coeficiente de correlación entre ambas variables se estima en 0,486, mismo que sugiere que un porcentaje importante del nivel educativo de los hijos e hijas se encuentra desligado de aquel que obtuvo sus padres.

En aras de profundizar en este aspecto, el análisis estimó la matriz de transición para los años de escolaridad y el nivel de instrucción. En cuanto a la primera de esas variables, un 15,8% de los hijos muestran niveles de escolaridad iguales a las de sus padres en tanto sólo un 18,1% se ubicó por debajo. En otros términos, 2 de cada 3 hijos e hijas mayores a los 24 años logró superar los años de escolaridad de sus padres o madres.

Ciertamente este es un dato que demuestra un nivel de movilidad elevado en materia educativa en los casi 20 años que separan ambas generaciones. Resulta de igual forma importante cuánto más ha estudiado esa segunda generación. En promedio, los hijos e hijas estudiaron 5,3 años más que sus padres siendo precisamente 5 años el número más representativo de la distribución (gráfico 3). El 60% de este grupo estudió 5 o más años respecto a sus progenitores en tanto el 17,7% se distanció 1 o 2 años únicamente.

Gráfico 4

Distribución de la diferencia de años de escolaridad entre padres e hijos



Fuente: Estimación con base en Enaho 2022.

Un segundo resultado relacionado al logro académico entre generaciones se visualiza en la **matriz de transición** según nivel de instrucción alcanzado (ver anexo 2). En este caso, el objetivo es conocer si el incremento en escolaridad anteriormente mostrado se ha traducido en saltos cualitativos importantes en cuanto al título académico obtenido. Según la matriz mencionada, un 61,4% de los hijos e hijas obtuvieron un grado académico superior al de sus progenitores en tanto uno de cada cuatro alcanzó el mismo nivel de instrucción. En total, cerca del 39% de los hijos no superaron el grado académico de sus padres.

Como es de esperar en una situación con estas características, la dinámica varía considerablemente según el grado de escolaridad de partida en los padres. Los resultados indican que, entre progenitores cuyo nivel académico es primaria completa o menos, el 78% de sus hijos superó ese grado académico. De todos los hijos e hijas con padres con educación primaria o menos, un 21,3% obtuvo secundaria incompleta, el 26,3% alcanzó secundaria completa y un 19% universidad en cualquiera de sus grados.

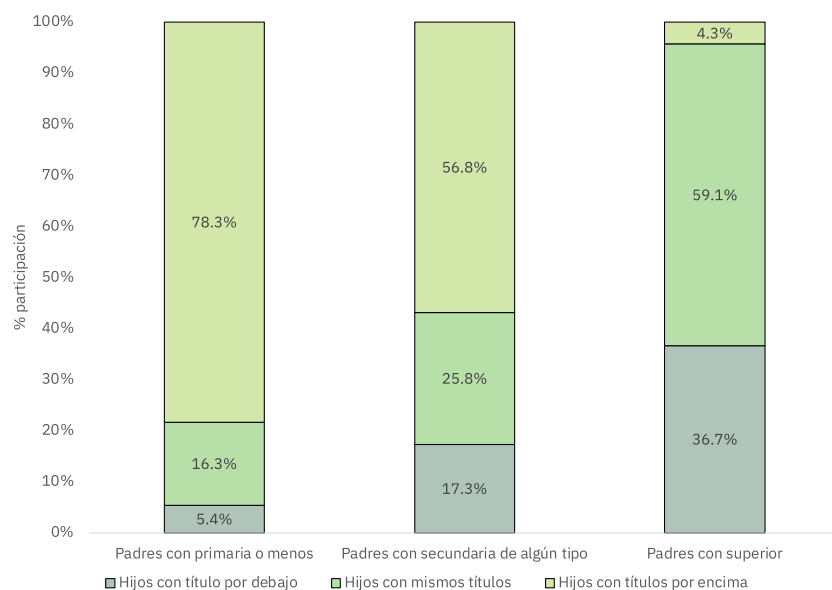
Cuando los padres tienen algún tipo de educación secundaria (académica o técnica, completa o incompleta), los valores anteriores tienden a ser más moderados si bien algunos resultados suelen ser esperanzadores. Por ejemplo, aproximadamente el 57% de los hijos e hijas en esta categoría superaron a sus padres en tanto uno de cada cuatro y uno de cada seis alcanzaron el mismo título u obtuvieron uno menor. Eso sí, cabe resaltar que la mitad de los hijos (50,9%) se mantuvieron con un nivel de instrucción máximo de secundaria mientras un 40% alcanzó niveles universitarios.

Finalmente, los padres con instrucción universitaria suelen tener hijos con al menos grados iguales o superiores. Se rescata un detalle particular: cerca del 37% de los hijos e hijas de este

segmento no superaron grado universitario alguno. El 87% de estos hijos tampoco asiste al sistema educativo formal, es decir, no se encuentran en proceso de culminación de un grado universitario en los próximos años.

### Gráfico 5

Distribución académica de los hijos según nivel de instrucción de padre



Fuente: Estimación con base en Enaho 2022.

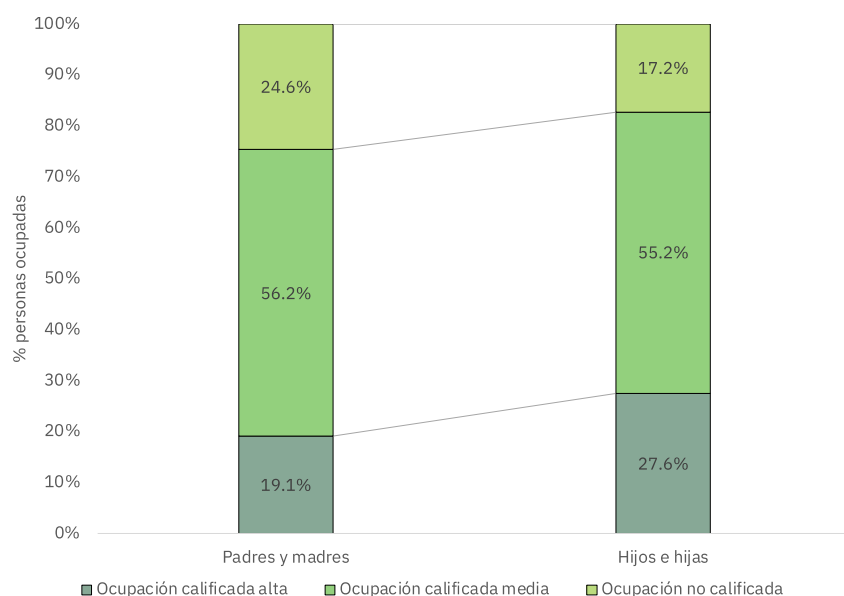
La matriz de transición ocupacional muestra un patrón menos dinámico en cuanto a la movilidad de los hijos respecto a sus padres. Al considerar la línea diagonal de la matriz que refleja que los hijos tienen los mismos puestos que sus padres, se estima que el 23,3% de los casos se ubican allí. En contraparte, alrededor del 77% de los hijos ocupan cargos diferentes a los de sus progenitores. Es en este punto donde surgen aspectos de interés analítico en torno al tema de la movilización.

El gráfico 5 presenta una primera consideración en relación con la estructura laboral de cada grupo en términos de su cualificación. Entre las jefaturas y la siguiente generación, existen dos diferencias sustantivas. Por un lado, el porcentaje de hijos en labores de baja cualificación (ocupaciones elementales) es cerca de 7,4 puntos porcentuales menor a la de sus padres. Por el otro lado, prácticamente toda diferencia se explica por el mayor porcentaje de hijos en labores de alta cualificación (i.e. gerentes, profesionales o personas técnicas de nivel media). El hecho que los descendientes posean una mayor proporción de personas ocupadas en el segmento de mayor cualificación podría explicar los patrones crecientes de desigualdad observados en Costa Rica a lo largo de los años.

Al individualizar el análisis por categoría laboral, surgen un conjunto de elementos relevantes para la valoración de la movilidad ocupacional. En primer lugar, un 51% de los hijos con padres cuyo puesto actual es de alta cualificación labora en cargos no profesionales, es decir, lo hace en labores de mediana o baja cualificación. Cerca del 73% de este segmento lo hace en apoyo administrativo y ventas.

Entre jefaturas con ocupaciones elementales, la distribución indica que tres de cada diez hijos mantienen el mismo puesto que sus padres, es decir, son trabajadores de baja cualificación. Este porcentaje contrasta con el 17% a nivel nacional. De hecho, la mayor posibilidad de trabajar en puestos de baja cualificación se ubica en hijos cuyos padres ya laboran en ellas. Al comparar, por ejemplo, tales proporciones, sólo un 6,6% de los hijos de padres con puestos de alta cualificación lo hace en ocupaciones de baja cualificación mientras que un 15,6% de los hijos cuyos padres trabajan en cargos de cualificación media lo hacen en ocupaciones elementales. Solamente 3,8% de los hijos de padres con baja cualificación laboral trabajan como profesionales.

**Gráfico 6**  
Estructura laboral de padres e hijos según nivel de cualificación

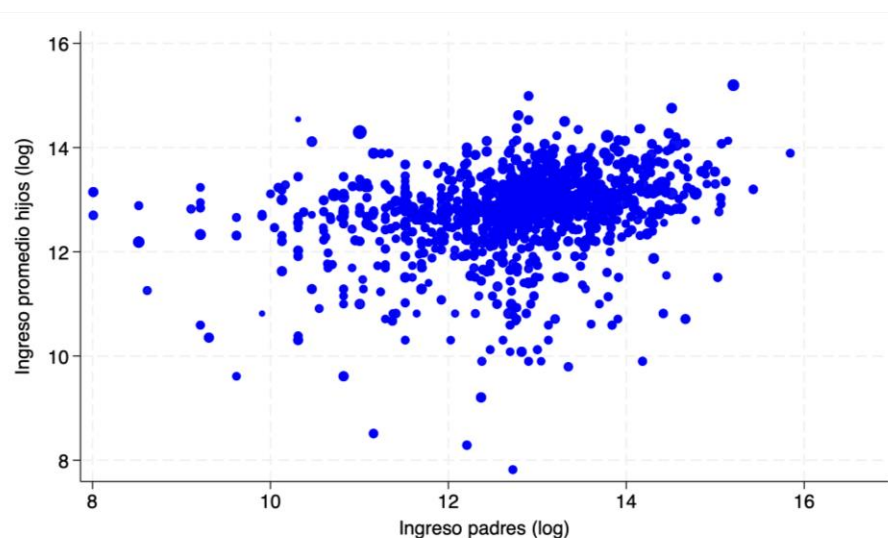


Fuente: Estimación con base en Enaho 2022.

Por último, la movilidad del ingreso se puede analizar a través de múltiples coeficientes que la literatura ha aplicado de materia persistente (ver, por ejemplo, Adermon, Brandén y Nybom, 2019; Mitnik y Grusky, 2020). La dispersión de ingresos totales entre los dos grupos se encuentra en el gráfico 7. El coeficiente de correlación se estima en 0,335 en el caso de los ingresos totales y en 0,30 en el caso de los ingresos derivados del trabajo. En ambos casos, la asociación es medianamente baja lo cual apunta a una relación débil entre los ingresos de ambas generaciones, es decir, a la existencia de una baja influencia de los ingresos paternos en aquellos de la siguiente generación.



**Gráfico 7**  
Relación entre ingresos laborales generacionales



Fuente: Estimación con base en Enaho 2022.

Similares consideraciones se abordaron en el trabajo con los grupos focales. De nuevo, la vivencia de la desigualdad varía de forma importante según la perspectiva fuera rural o urbana. Sobresale, en general, la idea que se tiene que la educación hoy día no garantiza (como solía hacerlo) acceso a mejores empleos y a unos salarios que conduzcan a una significativa mejor calidad de vida (vis-à-vis la situación de los progenitores). Además, se concluye que hoy día resulta más complicada la adquisición de vivienda y el acceso a crédito sea para la compra de activos o para financiar emprendimientos.

### Recuadro 3

#### Principales preocupaciones inter-generacionales a la luz de los grupos focales

Las conclusiones en torno al estudio cualitativo sugieren que, si bien las hijas e hijos han superado a sus progenitores en la cantidad de años de estudio, cuando se trata del ingreso y de los bienes acumulados en el mismo periodo de la vida, la mayoría aún no alcanza el estado de los padres y madres.

Especialmente en lo que se refiere a compra de vivienda o bienes inmuebles, las personas consultadas de los cantones urbanos mostraron su preocupación y descontento por las dificultades que experimentan u observan en sus entornos más cercanos para adquirir una casa propia. Algunos ni siquiera pueden acceder a un préstamo ya que no cuentan con las condiciones establecidas por la banca, o porque en los casos en los que fueron sujetos de crédito, adquirieron deudas de hasta 30 años.

Se destaca una devaluada percepción de la ecuación *+estudio=mejor trabajo (bien remunerado/estable)* en el caso de las percepciones encontradas en los grupos focales de Desamparados y Escazú, y una aún menor valoración en los cantones rurales consultados. En ellos se consideró que la educación no está garantizando el acceso a empleo, menos aún a uno bien remunerado dentro de sus cantones. A pesar de ello, la mayor parte de las personas de los 3 cantones rurales consultados, manifestaron estar igual o mejor que sus progenitores en términos generales, además de su deseo porque sus hijas/hijos estudien incluso más de lo que lo hicieron ellas/ellos.

La conclusión a la que llegan las personas participantes del estudio en cuanto a la injerencia de la relación *educación/trabajo* en la movilidad social, resulta especialmente inquietante en los cantones en los que hay otros factores que, unidos al desempleo, conforman el caldo de cultivo para que personas jóvenes encuentren en el involucramiento con actividades ilícitas la forma más inmediata de obtener dinero. Sin embargo, y como un voto de confianza unánime, las personas consideraron que más y mejores oportunidades de educación representan la primera puerta a una vida con mayor bienestar para ellas y las generaciones más jóvenes.

Fuente: García, 2023.

---

## **Análisis de determinantes multidimensionales**

Basado en las contribuciones de Nunn et al (2007), CAF (2022), Iversen et al (2021) y Pérez-Arce et al (2016), el capítulo ha estructurado el análisis multidimensional de la movilidad a partir de tres grandes apartados cada uno contemplando una serie de variables de distinta naturaleza que la literatura reconoce como determinantes de la movilidad. Las tres categorías consideradas son las siguientes: *formación de desarrollo humano, oportunidades laborales y acumulación de capital*.

### **Formación de desarrollo humano**

En materia de “**Formación de desarrollo humano**”, el apartado comprende aspectos especialmente de primera infancia, infancia intermedia, infancia tardía y adolescencia relacionados con formación educativa, acceso a nutrición apropiada y disponibilidad de servicios de salud, entre otros. Al respecto, el desarrollo teórico y empírico apunta a una estrecha correlación positiva entre una adecuada formación en los primeros años de vida con niveles futuros de productividad, ingresos laborales y bienestar material (Lee and Lee, 2018). Esta relación es inclusive más fuerte si las intervenciones se realizan durante los primeros años (gestación y primera infancia) tal como lo señalan Roos, Wall-Wieler and Boram Lee (2019).

Muchos de los factores acá considerandos han sido explorados como variables que inciden en la desigualdad y la movilidad intergeneracional a través de dos vías, Por un lado, un conjunto de factores que potencian el desarrollo humano actual y futuro de las personas infantes producto de las decisiones parentales al respecto, tales como el momento de su inclusión en el sistema educativo formal y la calidad de la alimentación brindada. De igual manera, existen otros determinantes que facilitan una mayor formación del desarrollo humano a nivel infantil, especialmente el nivel de apoyo parental en actividades cognitivas y psicosociales (educación y crianza).

### **Servicios prenatales**

Durante el embarazo, el acceso a servicio prenatal es crítico para prevenir complicaciones gestacionales y, en caso de emerger una situación de alto riesgo, brindar a la madre los medios necesarios para protegerla a ella y al feto. Según la OMS, la ausencia de un control prenatal adecuado incrementa los riesgos de partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer, factores asociados comúnmente a morbilidad y mortalidad neonatal, menor desarrollo cognitivo y mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles.

Tal y como lo indican varias publicaciones, una atención prenatal de calidad y de acceso oportuno (geográfico, temporal, institucional) es crítica para reducir riesgos de embarazo o, en caso de

surgir gestaciones con complicaciones asociadas, otorgar los tratamientos necesarios y darle un seguimiento más cercano a la mujer embarazada (ISEM, 2006). Garantizar un acceso oportuno y de calidad es esencial, entendiéndose en ese sentido proveer un servicio accesible en tiempo y lugar con un paquete de servicios clínicos y de apoyo según protocolos internacionales.

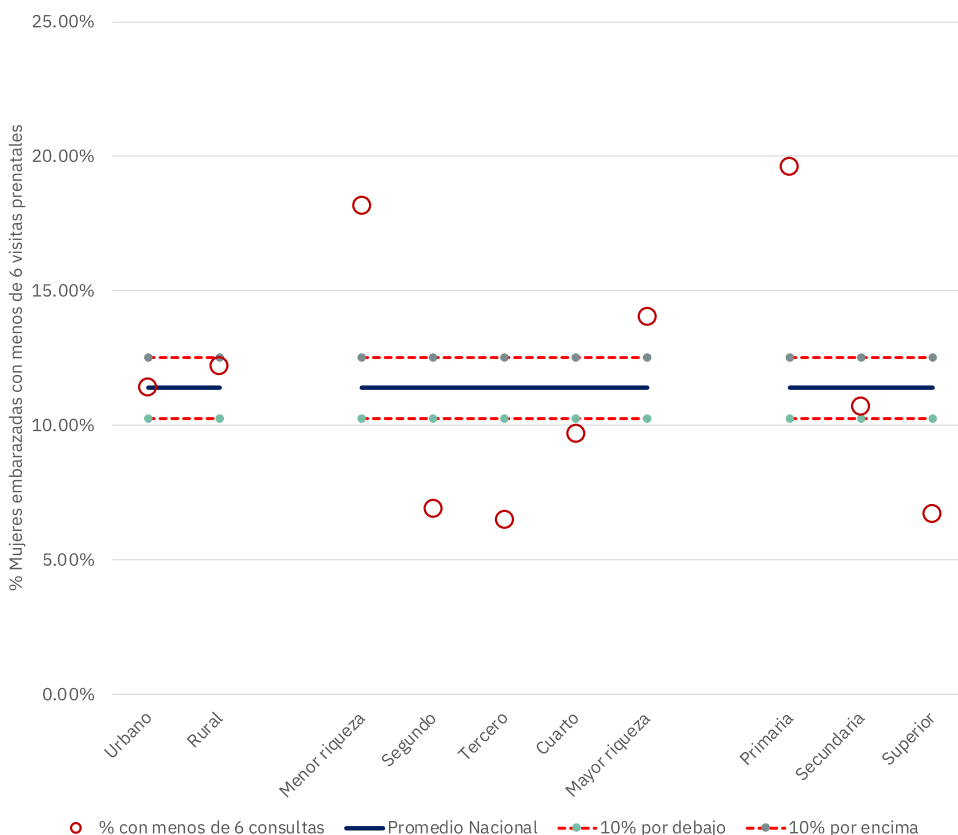
La literatura sobre determinantes sociales es clara, sin embargo, en afirmar que el acceso a controles prenatales no es uniforme por entre los distintos grupos poblacionales (Cáceres y Molina, 2010). Condiciones étnicas, educativas, etarias, socioeconómicas o de residencia suelen afectar negativamente a unas mujeres más que a otras imponiendo barreras que dificultan la buena gestión de embarazo.

Para analizar las diferencias de acceso a servicios prenatales, el capítulo hace uso diversos indicadores relacionados con cobertura y calidad. En general, los resultados sobre cobertura muestran entre el 97,5% y el 100% de las mujeres que buscaron atención prenatal recibieron al menos una consulta. Si bien esto es un paso en la dirección correcta, existen protocolos clínicos que definen esa atención como oportuna, accesible y de calidad a partir del cumplimiento de ciertos parámetros.

Uno de esos protocolos se refiere a la cantidad mínima de visitas prenatales. A nivel internacional, se considera que una mujer gestante no debería recibir menos de 6 consultas a lo largo del periodo de embarazo a la vez que debería iniciar el control entre la octava y la duodécima semana de gestación (Reis-Muleva et al, 2021). A nivel nacional, se estima que el 11,6% de las mujeres embarazadas reciben menos de esas 6 consultas mencionadas. Las disparidades por grupo son amplias en los criterios analizados excepto residencia. Por ejemplo, una de cada cuatro mujeres con educación primaria no completa el mínimo recomendado, casi el doble del porcentaje observado en mujeres con universidad. Algo parecido surge por condición socioeconómica donde la proporción de mujeres de menor índice de riqueza es 2,8 veces superior a las mujeres de riqueza media. Resulta interesante anotar en este caso que no aparece una relación lineal entre cumplimiento de las 6 visitas prenatales y condición económica de la mujer embarazada. De hecho, las mujeres del quintil V aparecen como el segundo grupo con menor cumplimiento.

Al analizar el número de consultas recibidas, el promedio nacional se ubica en torno a las 8,7 visitas por periodo de gestación. Las mujeres de menor condición socioeconómica y aquellas con educación primaria tienen la particularidad de mostrar los menores promedios del orden de las 7,8 y 8,0 consultas. Al otro lado se ubican las mujeres con educación terciaria y pertenecientes a los quintiles IV y V, todas con promedio por encima de las 9 consultas. Un detalle interesante a anotar en este caso es que, de los casos que reciben 10 o más consultas prenatales, el 43,6% son mujeres de los dos mayores quintiles de ingreso mientras aquellas del primer quintil apenas representan un 12%. Por participación individual, el 11% de las mujeres más pobres suelen recibir más de 9 consultas en tanto el 43% de las mujeres del quintil se ubican en ese segmento. Esto puede reflejar o bien una mayor calidad de atención que permite detectar casos riesgosos (lo cual obliga a programar más citas) o un uso ineficiente de los recursos médicos que conlleva una sobredemanda innecesaria.

**Gráfico 8**  
**Porcentaje de mujeres embarazadas con al menos 6 consultas prenatales, 2018 (promedio y rangos)**



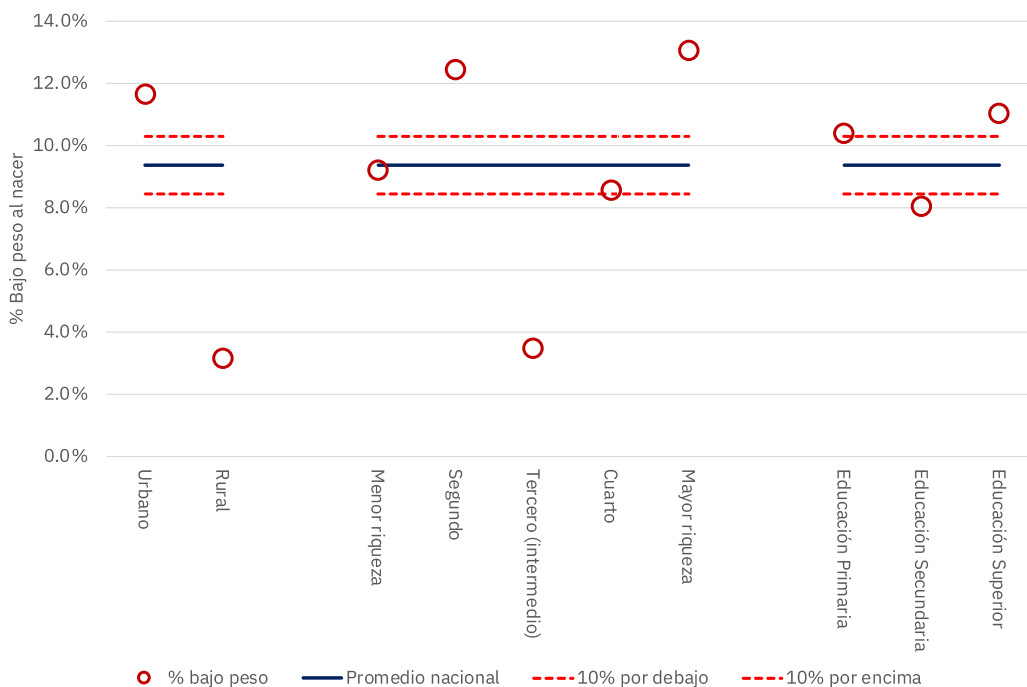
Fuente: Estimaciones a partir de la EMNA 2018.

Si, por el contrario, el interés se concentra en el porcentaje de mujeres embarazadas que empiezan el control prenatal antes de la semana 8 o de la semana 12, entonces se realzan 3 hechos. El primero es que, a nivel nacional, el 92% de las gestantes han empezado su ciclo prenatal a la semana 8 del embarazo en tanto para la semana 12 ese porcentaje se eleva al 95,8%. Segundo, si bien las brechas intra-grupo son estrechas, persiste un rezago en mujeres urbanas (94,7% versus 98,7% en zona rural a la semana 12) y en mujeres con educación secundaria (94,2% versus 98,7% en aquellas con universitaria). Tercero, de todos los subgrupos analizados, son las mujeres del quintil V son las que inician más tarde el control prenatal. Para la semana 12, un 87,2% de ellas ha tenido su primera cita de control en tanto el resto de los segmentos alcanza tasas superiores al 95,6%.

En materia de bajo peso al nacer, los resultados muestran que cerca de 1 de cada 10 bebés nacen pesando menos de 2,500 gramos (i.e. el estándar clínico de bajo peso). Los datos muestran patrones claros, en algunos casos, a la vez que algunos resultados son poco esperados. Por ejemplo, la proporción de bajo peso al nacer es 3,7 superior entre bebés cuya madre reside en zonas urbanas respecto a aquellas que habitan en zonas rurales. Dos consideraciones adicionales llaman la atención. En primer lugar, por nivel educativo, son las madres con educación superior las que suelen tener partos con bebés que experimentan bajo peso. Si bien su diferencia respecto a las mujeres con educación primaria no es amplia, sí se presenta una

brecha significativa respecto a las mujeres del orden de las 1,4 veces. Algo similar ocurre al enfocar el análisis por nivel socioeconómico, según el “índice de riqueza” calculado por la misma encuesta. Al respecto, los quintiles II y V presentan tasas de dos dígitos que se distancian, en promedio en 1,5 veces a la incidencia que experimenta el quintil IV.

**Gráfico 9**  
Porcentaje bebés con bajo peso al nacer (promedios y rangos)



Fuente: Estimaciones a partir de la EMNA 2018.

### Entorno familiar y primaria infancia

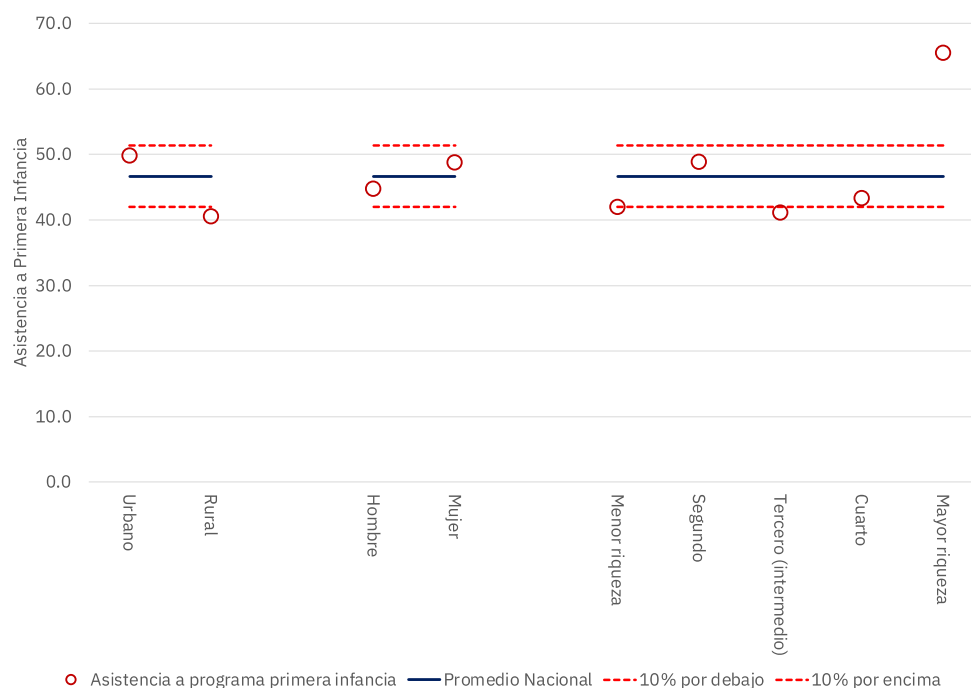
Dos dimensiones fueron consideradas como parte de este segmento, a saber, la asistencia a programas de primera infancia y las condiciones de entorno familiar. Tal y como se ha señalado en múltiples referencias, un acceso temprano a programas de cuidado e infancia temprana podría tener una serie de efectos positivos tanto en el desarrollo cognitivo y psicosocial del infante como en su status nutricional. Mitchell, Wylie y Carr (2008) y Bakkena, Brown y Downinga (2017), por mencionar dos referencias, dan cuenta de una multiplicidad de beneficios inmediatos y de largo plazo que suelen acompañar a las personas que asisten a programas de primera infancia. Entre otros, se destacan un mejor desempeño académico en escuela y colegio (en pruebas estandarizadas), mejor comportamiento social (por ejemplo, menos encarcelamiento), elevadas tasas de asistencia a centros educativos, mayor productividad laboral y mejores ingresos, entre otros. Todo esto se concluye a partir de análisis comparativos respecto a grupos que no asistieron a programas similares durante su niñez.

Para el año de referencia, el 46,7% de las personas menores de 5 años asistían a programas de primera infancia. Con la excepción de aquellos infantes que pertenecen al estrato socioeconómico más elevado (65% de cobertura), el resto de grupos no sobrepasan coberturas

del 50%. Esto permite reflexionar en torno a dos aspectos. El primero, más global, es en torno a la brecha tan significativa que aún separa a la niñez del óptimo de universalización de estos programas. Segundo, la persistencia de rezagos aún mayores en segmentos poblacionales vulnerables. Por ejemplo, los menores de quintiles I y III no sobrepasan el 42% de cobertura y en zonas rurales la cobertura es del 40%. Esto implica que las diferencias entre el menor y el mayor grupo son del 22% por zona, del 9% por sexo y del 59,5% por condición socioeconómica.

Gráfico 10

Asistencia a programas de primera infancia entre niños 0-5 años, por característica



Fuente: Estimaciones a partir de la EMNA 2018.

Las condiciones de entorno familiar se aproximan por dos indicadores: disponibilidad de libros y tiempo asignado por padres a diversas actividades de promoción cognitiva y psicosocial.

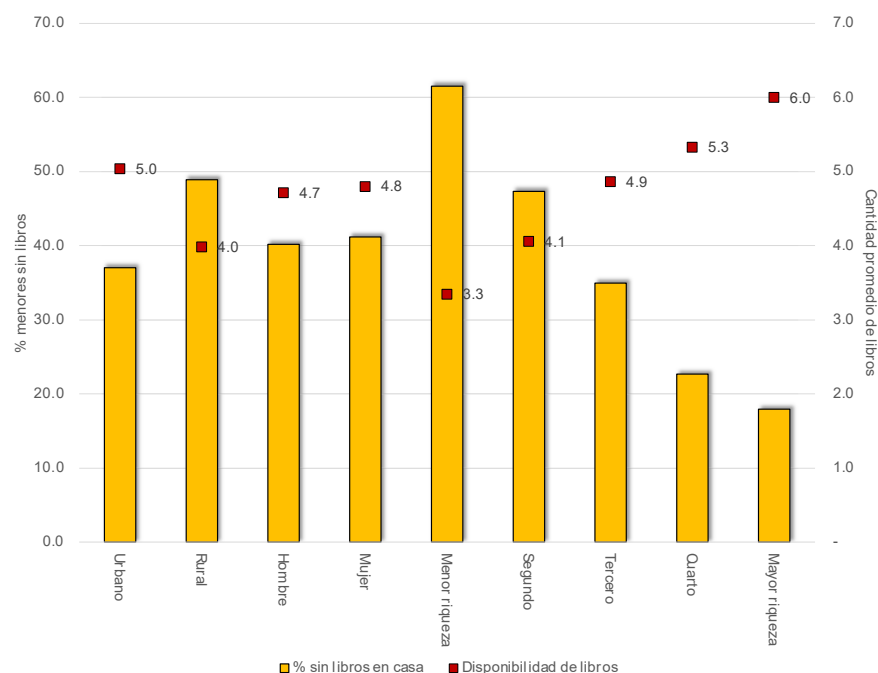
En Costa Rica, 4 de cada 10 menores de 5 años no tiene acceso a al menos un libro infantil en su casa. De los infantes con disponibilidad bibliográfica en sus hogares, el número medio de libros es de 5 unidades. De los niños y niñas con menor acceso a libros infantiles en su hogar, aquellos residentes de zonas rurales o pertenecientes a los dos primeros quintiles de riqueza muestran las mayores carencias. De hecho, de entre todas las relaciones acá mostradas, la asociación entre tenencia de libros infantiles y condición socioeconómica es la más fuerte en tanto la brecha por sexo es la más reducida (1 punto). Cada estrato socioeconómico superior se relaciona con un aumento de 11 puntos porcentuales en la tenencia de material infantil. Finalmente, los infantes rurales, el segundo grupo con menor disponibilidad de libros, rezaga a los menores urbanos en 12 puntos.

Importa no sólo la disponibilidad de material bibliográfico como la cantidad. Para ello, el mismo gráfico 10 muestra la cantidad promedio de libros por hogar en aquellos casos que respondieron tener al menos un ejemplar. El patrón de este coeficiente es muy similar al anterior, es decir, la

cantidad de libros es mayor en aquellos grupos que a su vez mencionan tener mayor disponibilidad. Así, por ejemplo, mientras sólo cuatro de cada diez infantes del quintil I tienen material infantil en casa, en aquellos que poseen acceso el número de ejemplares es de 3,3 unidades. Por el contrario, los menores de hogares del quintil V tienen una tasa de acceso del 82,1% y en promedio tienen 6 libros a disposición.

Gráfico 11

Porcentaje de menores sin acceso a libros infantiles y número promedio de ejemplares, 2018



Fuente: Estimaciones a partir de la EMNA 2018.

Otro aspecto fundamental en el proceso de formación de desarrollo humano a nivel infantil se relaciona con el involucramiento parental en actividades formadoras y de carácter lúdicas. Este involucramiento extra-aula ha demostrado ser una pieza fundamental para que mejorar el desempeño académico y el comportamiento social en general. Como tal, el mismo puede tomar distintas formas: leer con el menor, apoyo en la preparación de tareas, jugar y pasear. Topor et al (2010), por ejemplo, demuestran que el involucramiento de la madre tiene influencia positiva en el desempeño escolar de hijos e hijas por medio de un incremento de la competencia cognitiva (pensamiento creativo y pensamiento crítico) y una mejor relación entre estudiante y docente.

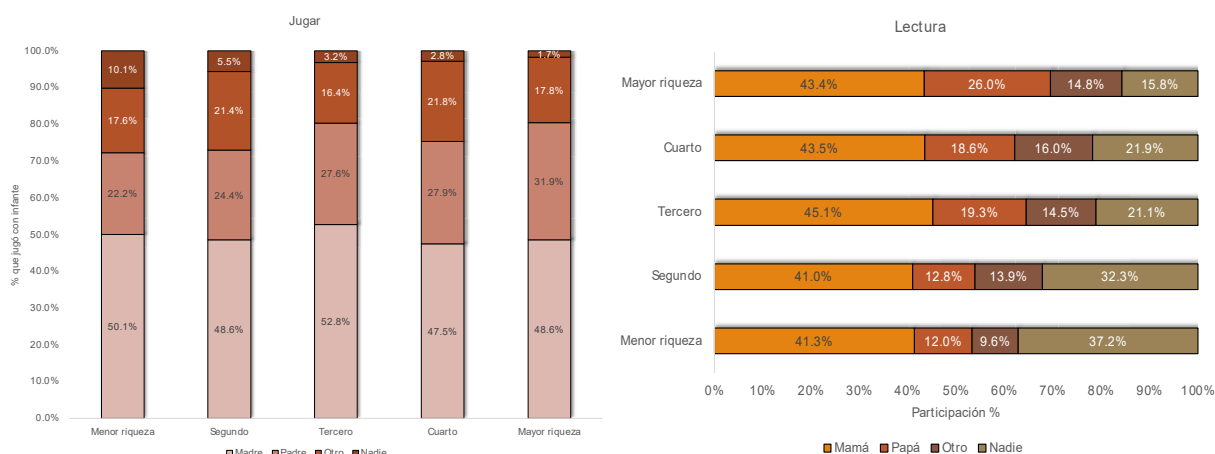
Para ilustrar esta relación, el análisis contempló dos actividades que son lectura de libros y juegos. Cuando se trata de lectura con los infantes, los progenitores tienden a ser menos activos en su involucramiento: uno de cuatro menores no tuvo esta actividad con sus padres o madres durante la semana previa a la entrevista. Si la valoración se remite propiamente a los padres y madres, entonces cerca de un 60% de ellos realizan lecturas con sus hijos e hijas. Eso sí, este grado de involucramiento es muy variado y crece conforme mejora el perfil socioeconómico del hogar. Por ejemplo, mientras 53,3% de los padres y madres del quintil I practican lecturas con sus menores, cerca del 70% del quintil V procede de igual forma siendo el involucramiento

materno unas 2,5 veces mayor al paterno. Por el contrario, un 37,2% de los niños y niñas del quintil I no tuvieron actividad alguna durante ese lapso, fuera con sus padres o con cualquiera otra persona. Entre los menores de 5 años del quintil más alto, este porcentaje cayó al 15,8%.

Jugar con el hijo o hija es una actividad mucho más popular en los hogares costarricenses. En promedio, el 76% de los progenitores se involucra en esta tarea, siendo la madre quien conlleva esta responsabilidad en el 65% de las veces. Dos aspectos sobresalen en este caso. Primero, al igual que con lectura, los infantes de hogares con menores recursos experimentan una tasa más reducida de involucramiento parental: el 10% no jugó con sus progenitores ni con ninguna otra persona durante el periodo de estudio. Entre menores del quinto quintil, el porcentaje es muy reducido del orden del 1,7%. Segundo, resulta importante anotar la existencia de una relación positiva entre condición socioeconómica y la participación de los padres: el 32% de ellos jugó con sus hijos/hijas, en contraposición a los papás del quintil I (22,2%).

Gráfico 12

Participación parental en actividades académicas y lúdicas en menores de 5 años, por quintil



Fuente: Estimaciones a partir de la EMNA 2018.

Si bien la tenencia de libros es un indicador proxy usualmente utilizado en los análisis empíricos sobre desigualdad y movilidad, lo cierto es que las conclusiones al respecto podrían sub-reportar la situación real si no se contempla la existencia de dispositivos electrónicos en el hogar, esto en el entendido que podrían sustituir la función que cumplen los libros.

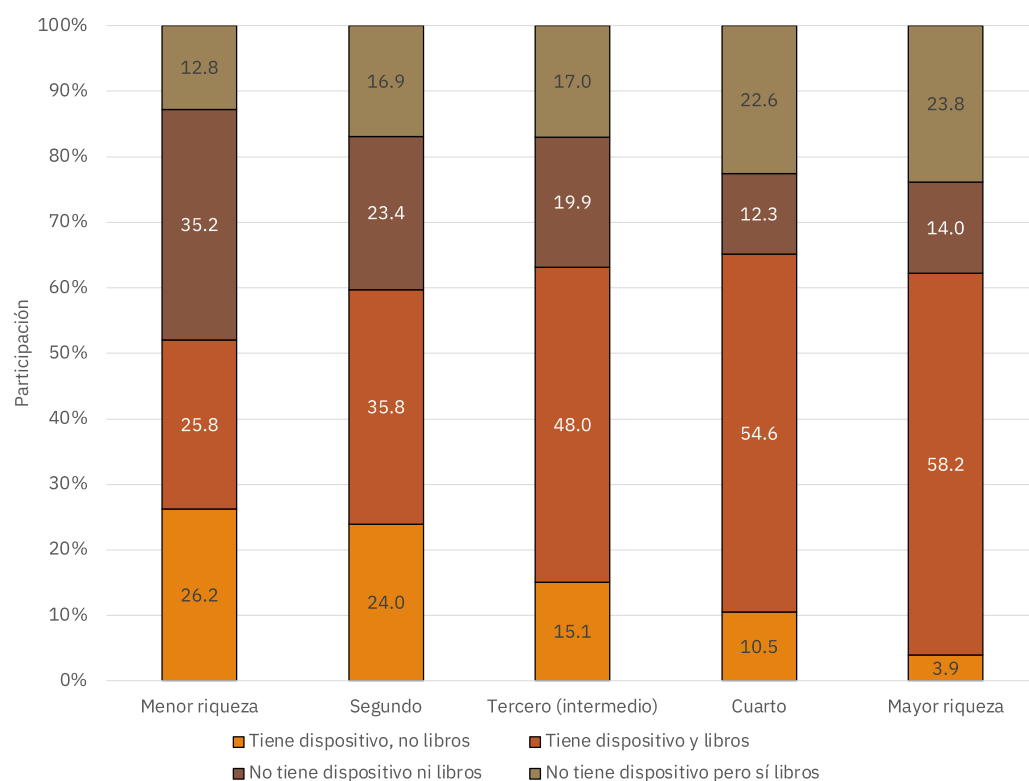
El gráfico 13 muestra la distribución de los hogares según tenencia de libros y dispositivos electrónicos. En el caso de las familias del primer quintil, una de cuatro posee ambos rubros en tanto poco más de un tercio no posee ni uno ni otro. Un 39% tiene uno de los dos. Un detalle interesante del grupo es que, de las cinco categorías de riqueza, es quien tiene el mayor porcentaje de “únicamente dispositivo”: 26,2%.

A medida que se avanza en los grupos socioeconómicos, algunas combinaciones experimentan cambios sustantivos. El porcentaje de hogares que tiene libros y dispositivos al mismo tiempo crece de forma importante al punto que el quintil V tiene 2,3 veces más participación que el quintil I. La otra combinación que crece conforme crece el nivel de riqueza es el de la tenencia de libros únicamente, situación en la cual el quintil V duplica la proporción el I.



Gráfico 13

Disponibilidad de libros y dispositivos electrónicos en el hogar, por quintil de ingreso



Fuente: Estimaciones a partir de la EMNA 2018.

Las brechas analizadas en materia de entorno familiar se pueden ver complementadas con dos indicadores sobre el nivel de desarrollo cognitivo de las personas menores entre 3 y 4 años. Ciertamente los datos del gráfico 13 concuerdan con las grandes tendencias antes descritas. En ambos casos, es clara la correlación entre condición socioeconómica y avance cognitivo, ambos medidos a partir del reconocimiento del alfabeto y de los números del 1 al 10. Esta vinculación, si bien idéntica en cuanto a la tendencia general, muestra ciertos detalles que merecen una valoración puntual.

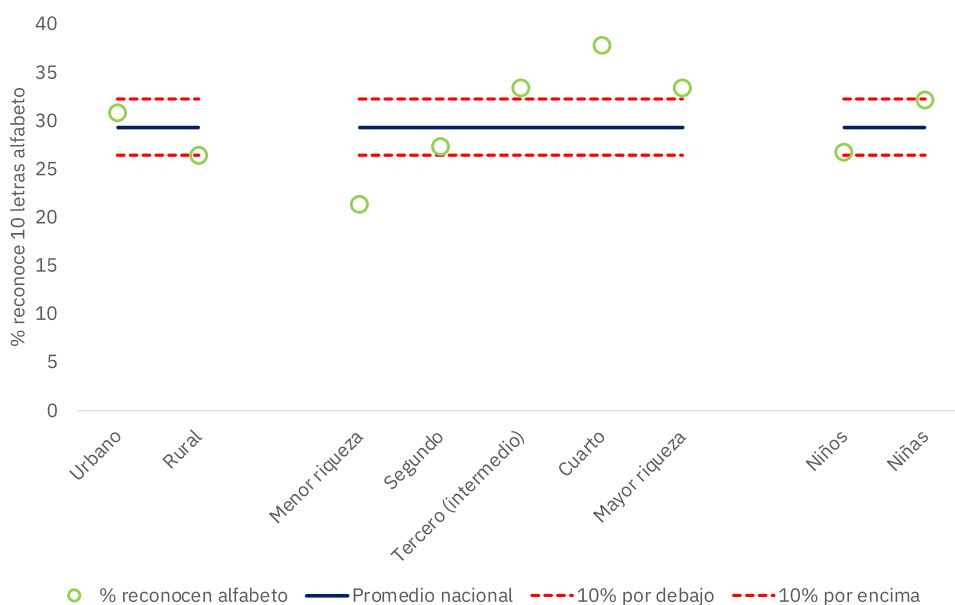
En cuanto al porcentaje de menores que reconocen 10 letras del alfabeto, la tasa de avance en los últimos dos quintiles es 1,64 veces superior a la del primer quintil, una distancia significativa entre extremos. El quintil V rompe el patrón ascendente al mostrar porcentajes que son más congruentes con el quintil III que con lo esperado para el grupo de mejor posicionamiento material. De hecho, la tasa de reconocimiento del quintil V es 11,1% menor que la del quintil IV.

Al explorar el grado de reconocimiento numérico, las distancias son aún mayores. Tres subgrupos emergen en este caso. El primero corresponde al quintil I, segmento con el mayor rezago relativo, en cuyo caso poco más de un tercio de sus infantes logran reconocer los primeros 10 números. El segundo subgrupo abarca los quintiles II al IV y en él todos los agregados

muestran niveles de reconocimiento de entre el 51% y el 61%, es decir, en promedio mantienen tasas que son, en promedio, un 61% superior al quintil I. Finalmente, el tercer subgrupo se compone del quintil V, con un 80,4% de logro cognitivo. Los menores del quintil V alcanzan tasas de reconocimiento matemático que son 1,41 veces superior al subgrupo de quintiles II al IV y 2,26 veces mayor al quintil I.

Gráfico 14

Tasa de reconocimiento del alfabeto y los primeros números



Fuente: Estimaciones a partir de la EMNA 2018.

## Salud y nutrición

Amplia evidencia existe en torno a los beneficios de corto y largo plazo de gozar, durante las primeras etapas de vida, de condiciones sanitarias y un estado nutricional apropiados. Hirve et al (2023), es una revisión de 42 ensayos clínicos controlados que incluyeron 15,557 menores de edad, concluyen que la provisión de servicios de salud durante la primera infancia se relaciona con mejores resultados cognitivos en menores de 0 a 36 meses a la vez que se presentan mayores desarrollos motrices. Caroline (2023), por ejemplo, menciona que el acceso a una dieta balanceada es esencial para promover un adecuado desarrollo cerebral, un sistema inmune fortalecido, huesos fuertes y un buen funcionamiento del sistema óseo. Por su lado, problemas asociados con desnutrición o sobrepeso podrían conllevar a serios problemas de salud en la niñez propiamente pero también durante el periodo de adultez. Es decir, que cualquier limitante durante los primeros años de vida tiene repercusiones más allá de la niñez sea, por ejemplo, debido a un crecimiento cerebral insuficiente o a la aparición de enfermedades crónicas como diabetes, elevando las posibilidades de muerte prematura. Este vínculo no se limita a la salud física, sino que abarca de igual manera a la salud mental. Así, una nutrición debida se asocia con menores niveles de ansiedad infantil.

Para el análisis de salud y nutrición, el estudio considera los siguientes indicadores derivados de la EMNA 2018:

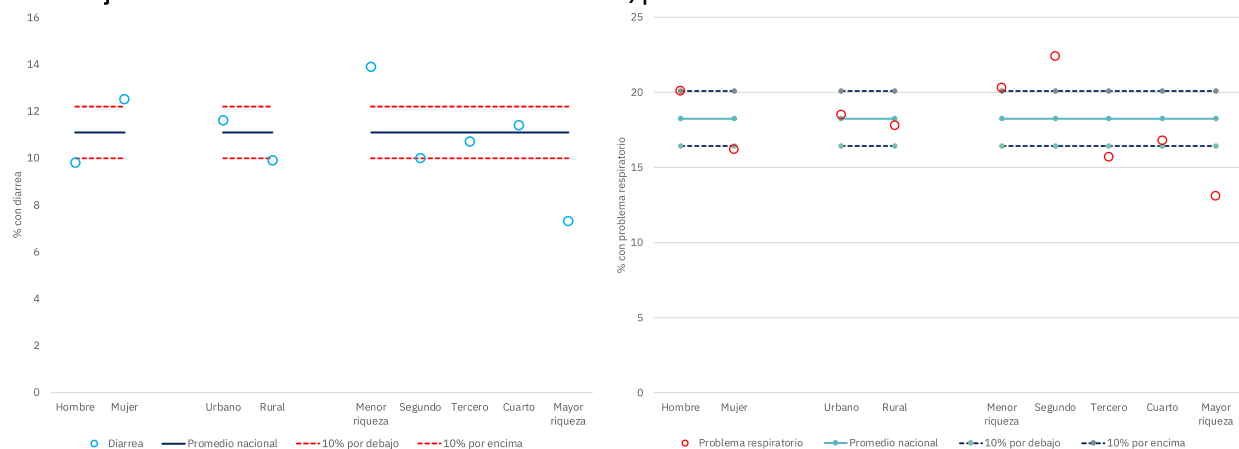
- Porcentaje de menores de 5 años con diarrea o problemas respiratorios en las pasadas dos semanas, según característica
- Porcentaje de infantes entre 5 y 17 años que experimentan problemas de aprendizaje o ansiedad, según característica
- Porcentaje de población infantil con bajo peso u obesidad

Cuando se considera el tema sanitario, los patrones son muy variados. Sobre la ocurrencia de casos de diarrea en personas menores a 5 años, uno de cada nueve menores tuvo una situación de estas en las dos semanas previas a la entrevista. Aquellos grupos más afectados fueron las niñas, las personas menores residentes en zonas urbanas y aquellas de los quintiles I son quienes presentan el mayor porcentaje de poblaciones que habrían tenido al menos un episodio. Son las brechas por zona (1,17 veces) las más reducidas en tanto la distancia entre los grupos de menor y mayor riqueza son las más amplias (1,89 veces). La distancia entre niños y niñas es, para este caso, significativo y del orden de las 1,28 veces.

A nivel de problemas respiratorios, un 18,2% de las personas menores de 5 años tuvo al menos una situación como tal. En este caso, el patrón difiere respecto al caso previo en dos aspectos. Primero, los niños tuvieron una mayor incidencia (1,24 veces respecto a las niñas) mientras que a nivel socioeconómico fueron los menores del segundo quintil, no del primero, quienes experimentaron esa misma situación. La distancia entre el segundo y el quinto quintil se estima en 1,55 veces mayor.

Dos aspectos adicionales llaman la atención. La primera es que fueron las personas menores de zonas urbanas quienes volvieron a mostrar mayores porcentajes, si bien en esta ocasión el margen se redujo considerablemente (1,04 veces). Segundo, cuando el análisis se enfoca en la dimensión socioeconómica, pareciera existir no dos sino 3 segmentos poblacionales a su interior. Por lo general, los resultados indican que los quintiles I y II efectivamente aparecen persistentemente con los peores resultados analizados. Segundo, los quintiles III y IV se separan del anterior, pero rezagan resultados del quinto quintil, grupo que en los dos resultados sanitarios estudiados aparece con las menores tasas de incidencia. De esta forma, por ejemplo, la tasa de menores con episodios de diarrea es 1,51 veces mayor entre el segundo subgrupo (quintiles III y IV) respecto al quintil V mientras que en problemas respiratorios la brecha se ubica en 1,24 veces.

**Gráfico 15**  
**Porcentaje de infantes con determinada enfermedad, por característica**



Fuente: Estimaciones a partir de EMNA 2018.

Experimentar una condición de enfermedad es tan sólo una primera parte del proceso analítico de la desigualdad por cuanto podría reflejar condiciones individuales, de familia o de lugar de residencia que podrían incidir en que el menor de edad esté más o menos expuesto a factores que minen su condición (i.e. determinantes sociales de la salud).

Una consideración mayor, sin embargo, requiere analizar temas de oportunidad, acceso y calidad de la atención sanitaria en caso de necesidad. Para ello, el análisis toma varias preguntas de la EMNA y concatena una serie de cuestiones sobre acceso y calidad del servicio.

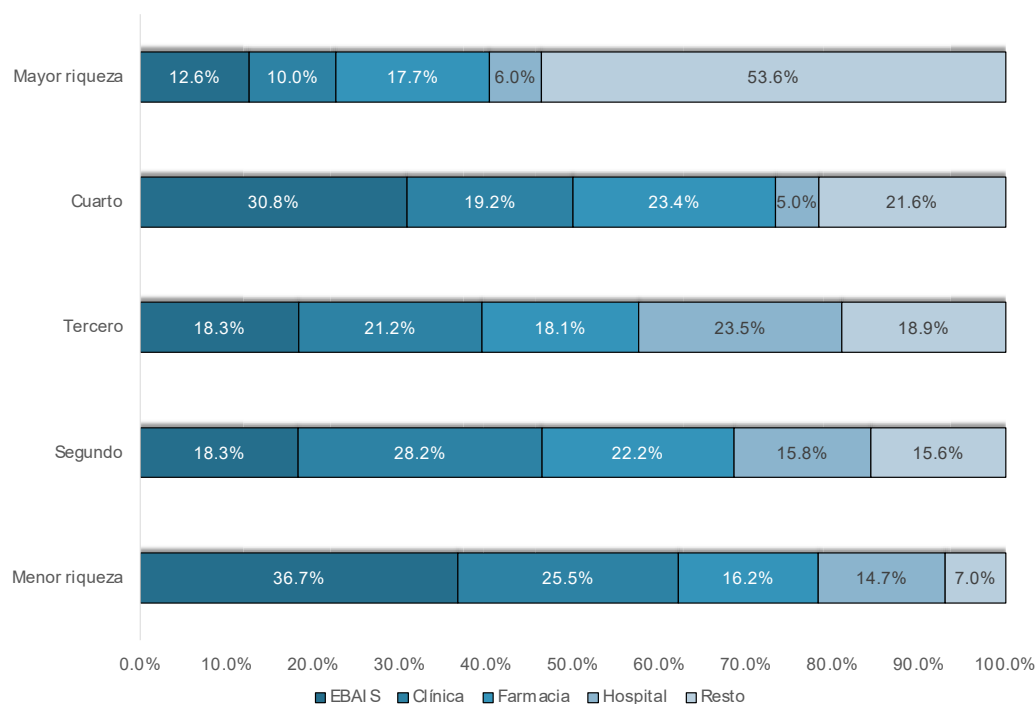
Dos aspectos sobresalen. Lo primero es la significativa menor proporción de personas del quintil I que decidieron buscar ayuda médica ante la presencia de un episodio de enfermedad entre sus hijos e hijas. Conforme se asciende entre los grupos socioeconómicos, la decisión de buscar apoyo clínico se incrementa. Los tres primeros quintiles no superaron el 80% de respuestas positivas en tanto en el quintil V ese porcentaje ascendió al 93,4%. Cabe destacar que esta situación puede ser producto tanto de una decisión personal (i.e. de la persona a cargo del menor en este caso) como de una barrera de acceso propiamente dicho. Por ejemplo, de las personas del quintil I que tuvieron un episodio de enfermedad infantil en sus hogares, un 20% no buscó servicio médico no obstante contar con seguro de salud en tanto un 7,8% no lo hizo no obstante estar afiliado/a a un seguro de salud. En el quintil V, ese porcentaje de personas se elevó al 6,6% del total de casos. En general, un 16% de las personas con casos de enfermedad infantil en sus casas no buscó servicio médico teniendo seguro de forma que una de las posibles barreras de acceso (ausencia de seguro) pareciera explicar poco la decisión de no demandar dichos servicios.

Un segundo matiz importante comprende el lugar donde buscó apoyo médico o tratamiento. Institucionalmente, los servicios públicos provistos por la CCSS son claves para los grupos de menor nivel socioeconómico: un 77% de las personas del quintil I que requirieron servicios para sus hijos o hijas optó por visitar una clínica, un hospital público o un EBAIS. Esta cifra se redujo progresivamente a un 62,3% (promedio) en los quintiles II y III, 55% para el quintil IV y apenas un 29,8% para el quinto quintil. Para este último grupo, el sector médico privado representa un

proveedor muy importante. Si se consideran clínicas, hospitales y médicos especialistas, el 51% de las necesidades se suplen por esa vía, una cifra que alcanza al 1,4% de los requerimientos del quintil I y el 7,5% de las del quintil II.

Gráfico 16

Principales proveedores de servicios de salud a hogares con necesidades, por quintil



Fuente: Estimaciones a partir de la EMNA 2018.

Resulta importante anotar la existencia de diferencias significativas por grupo socioeconómico en otras variables de acceso a servicios sanitarios. Una de ellas se refiere al porcentaje de menores que recibió medicamentos debido a un episodio de enfermedad. A nivel nacional, el 92,1% de las personas menores de 5 años recibió algún medicamento a partir de una complicación de salud. No se observa una diferencia significativa en cuanto al acceso de medicamentos por zona de residencia y la distancia por sexo es reducida (1,03 veces). De nuevo, son las brechas por quintil de riqueza las más considerables con la particularidad que los segmentos intermedios muestran atípicos. Por ejemplo, el 96% de los infantes enfermos del quintil V recibieron medicamentos para su tratamiento en tanto para el quintil I ese porcentaje cae al 88,1% (1,09 veces). Entre los quintiles II y IV, las tasas de medicación fueron en descenso cayendo casi cuatro puntos entre ellos. Sólo las personas menores del quintil I no superar el 90% de cobertura.

Las brechas observadas en este apartado pueden ser producto de muy diversos factores. Un primer factor tendría naturaleza clínica, es decir, el episodio experimentado por el menor no requería de un medicamento para su solución. Podría surgir acá la pregunta sobre las razones por las cuales los episodios de los menores del primer quintil persistentemente ocuparían menos medicamentos que aquellos del quinto quintil.

Segundo, barreras de naturaleza institucional, geográfica o financiera podrían ser parte de las razones detrás de las brechas antes comentadas. Según se comentó anteriormente, la alta cobertura con seguro de salud es un factor que facilita el acceso a servicios y medicamentos en nuestro país, al menos como una primera puerta. Sin embargo, otros aspectos podrían jugar un rol mayor. La barrera financiera es una de ella. En Costa Rica, las mayores erogaciones en medicamentos provienen del gasto de bolsillo ejecutado por los hogares. En promedio, un 59,1% del total gastado en este rubro lo ejecutan las familias (OPS-MS, 2022). El elevado costo de los medicamentos en el país (Vargas y Cuendis, 2022) crea un obstáculo para que muchas familias puedan adquirir las medicinas en farmacias privadas, dejando dicha alternativa en proveedores públicos. De tal forma que, si se desea obtener un medicamento por esta vía, la persona debe aplicar el procedimiento respectivo de atención para su respectiva valoración médica y obtener la receta correspondiente. Por ejemplo, según datos de la EMNA misma, el 81% de los menores enfermos del primer quintil que requirieron medicamentos lo obtuvo del sistema público (EBAIS, clínicas, hospitales, médicos) mientras la compra directiva en farmacias representó el 16,8% de dichas necesidades. Al otro lado del espectro, los menores del quinto quintil obtuvieron, en el 56% de los casos, las medicinas para su cura en tanto la compra en farmacias superaron el 37% de los casos.

El análisis también consideró aspectos cognitivos y de salud mental en el segmento de menores entre 5 y 17 años. Para ello se tomaron dos indicadores de la EMNA 2018. El primero se refiere al porcentaje de menores con problemas de aprendizaje, desde aquellos con “cierta dificultad” hasta los de mayor grado (“le resulta imposible aprender”). El segundo indicador contempla el porcentaje de menores cuyos progenitores consideran que de manera frecuente presenta cuadros de ansiedad y nerviosismo<sup>5</sup>.

Varios aspectos se derivan del cuadro 4. Los patrones difieren de manera importante para cada caso. Los infantes con mayores porcentajes de dificultad en aprendizaje suelen ser de zonas rurales (1,22 veces respecto a urbanos), del primer quintil de riqueza (2,38 veces mayor que quintil V) y mujeres, si bien en este último caso la brecha es muy reducida (1,02 veces). Persiste la distancia del quintil V respecto a otros grupos intermedios al punto que las personas menores del quintil IV, segundo grupo con menor porcentaje, mostraron un valor 1,37 veces superior al del quinto quintil.

La valoración en cuanto a condiciones de ansiedad o preocupación presenta giros importantes. A nivel nacional, un tercio de los infantes muestra patrones esporádicos o recurrentes de estrés, nerviosismo o ansiedad. Aproximadamente uno de cada cuatro menores de 5 a 17 años tiene episodios recurrentes (diarios, semanales o mensuales) y el 8,5% estaría experimentando esas mismas condiciones diariamente.

Contrario a lo mostrado en la mayoría de los indicadores, son los infantes del quintil V quienes presentan las mayores tasas al respecto. Según la información disponible, un 70% de los miembros de este grupo tiende a experimentar algún grado de ansiedad o preocupación en contraposición al 52% de los menores del quintil I y el 56% del quintil II (1,29 veces en promedio). Además, aquellos menores de zonas urbanas tienen más probabilidad de

---

<sup>5</sup> Resulta importante mencionar que estos porcentajes responden a valoraciones que las personas entrevistadas hacen sobre los menores de edad respecto a pares y no necesariamente a criterios clínicos debidamente confirmados.

experimentar dicha condición (1,21 veces). No hay distancias significativas por sexo con 59,1% de los varones y 59,3% de las mujeres en tales condiciones.

**Cuadro 3**

**Menores entre 5 y 17 años con dificultades de aprendizaje o niveles de ansiedad**

Condición	Aprendizaje	Ansiedad, nerviosismo o preocupación
Hombre	15,3	59,1
Mujer	15,7	59,3
Urbano	14,5	62,5
Rural	17,7	51,8
Menor riqueza	20,9	52,0
Segundo	17,5	56,4
Tercero	17,0	55,3
Cuarto	12,1	64,3
Mayor riqueza	8,8	69,6

Fuente: Estimaciones con base en EMNA 2018.

Para analizar el ámbito nutricional en menores de edad, tres indicadores de resultado fueron considerados. Para malnutrición se considera tanto el bajo peso para talla (desnutrición), la baja altura para edad (retraso en el crecimiento) y el elevado peso para talla (sobrepeso). Para su valoración, el análisis utiliza el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece que la desnutrición o el retraso en el crecimiento surgen cuando los valores respectivos son inferiores a -2 desviaciones estándar respecto a la media. En el caso del sobrepeso, se considera que el infante experimenta tal condición si su peso es mayor a las +2 desviaciones estándar respecto a la media.

El bajo peso para la talla afecta, según la EMNA 2018, al 1,8% de los menores de 5 años en Costa Rica. Las mayores tasas se ubican en infantes urbanos (1,3 veces mayor a menores rurales) y aquellos que residen en hogares del primer y tercer quintil. Por su lado, no hay diferencias por sexo mientras los quintiles IV y II experimentan las tasas más bajas no sólo por criterio socioeconómico sino de entre todas las características consideradas. El porcentaje de desnutrición en el quintil III es 1,83 veces superior al observado en el cuarto quintil.

El sobrepeso sí representa un problema mayor a nivel nacional. En promedio, un 7,4% de las personas menores de 5 años tiene tal condición. Son los varones (1,19 veces), infantes de zonas urbanas (1,09 veces) y pertenecientes al quintil V (1,33 veces respecto al quintil I) los segmentos con mayor incidencia. De nuevo, el sobrepeso está más fuertemente vinculado con la condición socioeconómica de forma que los tres últimos quintiles de riqueza tienen tasas por encima del promedio nacional con el quinto quintil siendo el subgrupo individual con el mayor porcentaje de los acá contemplados.

Finalmente, el 9% de los infantes muestran retardo en su crecimiento, siendo esta la condición con la mayor tasa de incidencia en la niñez menor de 5 años y con las brechas más pronunciadas entre los grupos acá considerados. El perfil del menor de edad con problemas de desarrollo es parecido al hallado en problemas de obesidad, es decir, son menores urbanos, varones, del quinto quintil de riqueza. Las distancias respecto a sus contrapartes, eso sí, son muchos mayores que en otros casos: 1,76 veces entre infantes urbanos-rurales, 1,36 veces entre hombres-mujeres y 2 veces entre quintil V y quintil III.

#### Cuadro 4

Indicadores antropométricos en menores de 5 años, por característica

	Bajo peso para talla	Elevado peso para edad	Talla para edad
Hombres	1,8%	8,0%	10,3%
Mujeres	1,8%	6,7%	7,6%
Urbano	1,9%	7,6%	10,5%
Rural	1,5%	7,0%	5,9%
Menor riqueza	2,1%	6,4%	9,1%
Segundo	1,5%	7,4%	8,3%
Tercero	2,3%	8,0%	6,8%
Cuarto	1,3%	7,6%	8,7%
Mayor riqueza	1,7%	8,5%	13,5%
	Bajo peso para talla	Elevado peso para edad	Talla para edad
<b>Nacional</b>	<b>1,8%</b>	<b>7,4%</b>	<b>9,0%</b>

Fuente: EMNA.

#### **Oportunidades laborales**

El segundo bloque de análisis analizar **“Oportunidades Laborales”**. El mercado laboral ejerce un rol fundamental en la dinámica de la desigualdad sea aquella de naturaleza monetaria como la multidimensional. Como tal, su influencia va más allá del ámbito salarial ya que en él se gestan otros aspectos fundamentales para el bienestar de la población como el nivel de cobertura de las personas trabajadoras con seguridad social, el cumplimiento de los derechos laborales y los patrones de discriminación, entre otros. Además, los mercados de trabajo pueden erigir barreras que limiten el acceso a empleo a ciertos grupos o que podrían restringir la promoción jerárquica hacia mejores puestos, tal es el caso del fenómeno del techo de cristal.

Para analizar el desempeño del mercado laboral en un plano de desigualdad, el capítulo considera los principios que rigen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como



las contribuciones de organismos como la OIT y su enfoque del Trabajo Decente<sup>6</sup> como puntos de referencia. Los artículos 56 al 63 de la Constitución Política de Costa Rica ratifican este enfoque de derechos humanos al establecer que “...el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad” (Artículo 56) y que “...todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo” (Artículo 57), entre otras referencias de la norma.

Según lo detalla el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “*toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo*”. Adicionalmente, la misma norma define los siguientes derechos laborales:

- Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Metodológicamente hablando, esta sección considera los principios de Derechos Humanos y los entrecruza con el abordaje metodológico desarrollado por Perez-Arce et al (2016). Según este último enfoque, el nivel y evolución de los ingresos laborales puede entenderse como producto de tres fuerzas que operan de forma simultánea: a) cantidad y calidad del nivel de desarrollo humano que posea la persona trabajadora; b) el nivel de intensidad laboral y c) los rendimientos que la persona trabajadora recibe.

### **Una fuerza laboral que se educa al tiempo que sus distancias se cierran**

El primer aspecto de interés en materia de acumulación de desarrollo humano se refiere al nivel de escolaridad de las personas ocupadas. En la actualidad (II.2023), la escolaridad promedio de las personas que trabajan se estima en 10,2 años, cifra que significa un incremento de 0,55 años en relación con el II.2013. Las personas ocupadas con mejor nivel de escolaridad suelen ser mujeres, menores de 44 años, no migrantes, residentes de zonas urbanas y de la región Central. Entre 2013 y 2023, no hubo cambios en las características del perfil educativo, es decir, los mismos grupos con escolaridad por encima del promedio en el primer año se mantuvieron en el segundo año.

No obstante, esa relativa rigidez de los sub-grupos respecto al promedio nacional, sí es posible observar cambios de otra naturaleza. El cuadro 6 muestra la escolaridad promedio para los distintos grupos poblacionales en el 2013 y el 2023. Varias conclusiones emanan del cuadro referenciado. En primer lugar, prácticamente todas las condiciones acá consideradas vieron aumentar su escolaridad promedio al tiempo que la dispersión de los datos tendió a caer (i.e. la desigualdad se redujo). Los segmentos ganadores fueron las regiones Pacífico Central (+1,19 años) y Brunca (+1,25 años) en tanto fueron las personas trabajadoras de 60 años y más el

---

<sup>6</sup> El Trabajo Decente se define como “*trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social*” (OIT, 1999: 3).

segmento etario con la mayor expansión (+1,10 años). Por otro lado, los grupos con menor crecimiento fueron las personas ocupadas de 45 a 59 años (sin aumento en escolaridad), las personas migrantes (+0,26 años) y aquellas residentes en las regiones Chorotega (+0,31 años) y la Huetar Norte (+0,43 años). A manera de ejemplo, lo anterior implicó que mientras una persona trabajadora de la región Brunca tuvo en promedio 250 días más de escolaridad en el 2023 respecto al 2013, en la región Chorotega esa cifra se elevó a apenas 62 días.

Todo lo anterior condujo a que la desigualdad de esta variable se redujera de forma que el coeficiente de Gini bajó de 0,264 en el 2013 a 0,247 en el 2023. La reducción en la dispersión de datos se visualiza en la cantidad de casos que cambiaron el color de su celda, es decir, pasaron de ser características muy alejadas o cercanas al valor promedio a un posicionamiento intermedio (celdas amarillas). En total, tres condiciones cambiaron su posición inicial: las personas trabajadoras de la Pacífico Central y los grupos poblacionales de entre 35 años y 59 años (dos grupos).

#### Cuadro 5

Escolaridad promedio de población ocupada de 25 años o más, por característica

Característica	2013	2023
Hombre	9,1	9,6
Mujer	10,5	11,1
Urbano	10,3	10,8
Rural	7,6	8,4
Central	10,2	10,7
Chorotega	9,3	9,6
Pacífico Central	8,5	9,6
Brunca	8,7	9,9
Huetar Caribe	8,5	9,1
Huetar Norte	7,6	8,1
No migrante	9,8	10,4
Migrante	8,1	8,4
25 a 34 años	10,4	11,2
35 a 44 años	9,8	10,6
45 a 59 años	9,4	9,4
60 años y más	7,7	8,8
Nacional	9,6	10,2
Característica	2013	2023
Gini de escolaridad	0,264	0,247

Fuente: Elaboración con base en ECE II.2013 y ECE II.2023

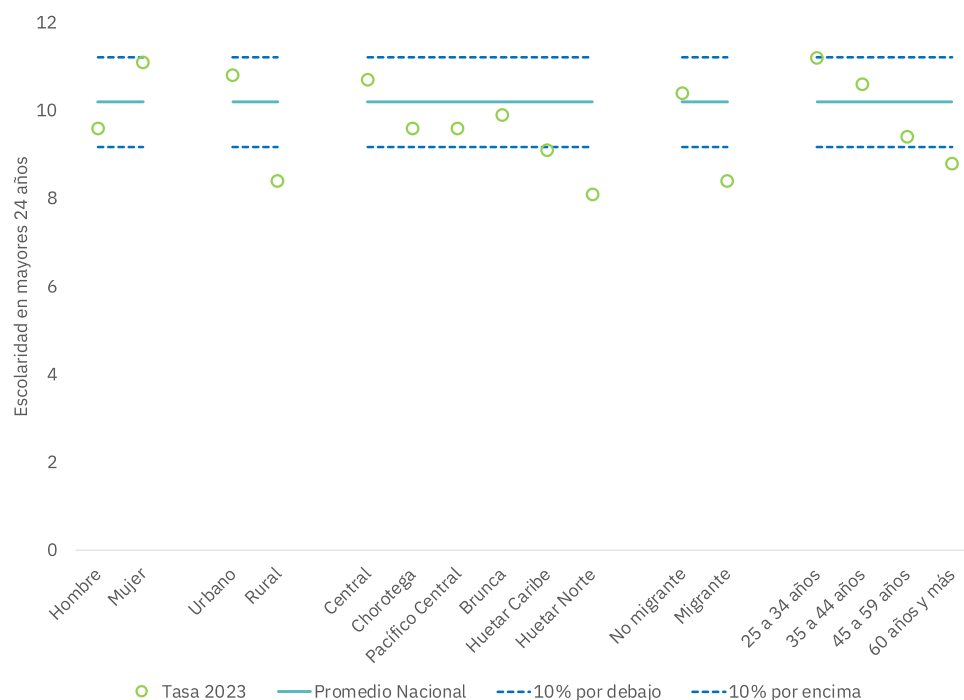
El gráfico 17 muestra la evolución de las brechas de escolaridad por característica personal en los dos años considerados en este análisis. Cada brecha compara el mejor valor del grupo versus el resto de los integrantes.

En promedio, las mujeres tienen un nivel de escolaridad que es 1,16 veces más elevado que la de los hombres, no observándose cambio en dicho porcentaje a lo largo del tiempo. La brecha urbana-rural tendió a caer (de 1,36 a 1,28 veces) en tanto la diferencia por condición migrante más bien se extendió. Al 2023, una persona trabajadora no migrante tiene un 1,24 veces más de escolaridad que una persona migrante, porcentaje equivalente a dos años más de educación.

Las otras dos condiciones, por grupo etario y por región, muestran patrones muy disímiles. Por ejemplo, las personas jóvenes trabajadoras de 25 a 34 años tienen la mayor escolaridad absoluta por grupo de edad, pero al comparar su situación con el resto de los segmentos etarios se presentan tres situaciones que emergen entre 2013 y 2023: una persistencia de la brecha con el grupo de 35 a 44 años (1,06 veces en ambos años); un incremento respecto al grupo 44 a 59 años y una reducción de la brecha con las personas adultas de 60 años o más.

Por su lado, las diferencias regionales han experimentado modificaciones significativas. Únicamente las personas ocupadas de la región Central se posicionan con niveles de escolaridad por encima del promedio nacional habiendo sido sus brechas del orden del 1,1 veces con la región Chorotega y de 1,34 veces con la región Huetar Norte. Entre esos dos porcentajes se ubican el resto de las regiones. Para el 2023, las brechas entre la región Central y las regiones Pacífico Central, Brunca y Huetar Caribe se habían contraído mientras con la Huetar Norte se había mantenido y únicamente con la Chorotega se expandió. En este caso, las distancias de escolaridad se acortaron a un rango entre 1,08 veces (con la Brunca) y el 1,33% con la Huetar Norte. Si la estimación se genera entre personas ocupadas urbanas de la región Central y ocupadas rurales de la región Huetar (la de menor escolaridad), entonces la brecha entre ambas se eleva a 1,47 veces.

**Gráfico 17**  
Brechas de escolaridad por característica personal, 2013 y 2023<sup>7</sup>



Fuente: Elaboración con base en ECE II.2013 y ECE II.2023.

Además de los años de escolaridad formal, las oportunidades laborales (presentes y futuras) podrían depender de otro conjunto de habilidades y condiciones que faciliten la inserción en el mercado laboral o los ascensos en el escalafón jerárquico. En esta línea analítica, el estudio ha seleccionado tres indicadores cuya información se muestra en el gráfico 7. Los tres indicadores considerados son: porcentajes de las personas ocupadas que habla un segundo idioma, porcentaje que tiene educación completa o niveles superiores (completos o incompletos) y porcentaje de las personas empleadas que han recibido un curso complementario de capacitación.

A nivel nacional, la ECE II.2023 muestra que sólo uno de cada diez personas trabajadoras indica dominar un segundo idioma. De los 16 subgrupos poblacionales tomados en cuenta, únicamente cinco tienen porcentajes por encima de la media costarricense. Los grupos que mantienen un mayor dominio de una segunda lengua son prioritariamente hombres, residentes en la región Central, de zonas urbanas, no migrantes y jóvenes de 25 a 34 años. En corto, esta caracterización es un espejo de aquella sobre escolaridad excepto por el hecho que los hombres aparecen con mejor indicador que las mujeres. Una cantidad importante de aspectos se ubican alejados del promedio nacional: las personas ocupadas de zonas rurales, las que habitan en las regiones Pacífico Central, Huetar Caribe y Huetar Norte, las personas migrantes y aquellas de entre 25 y 34 años. Sólo este último grupo muestra una situación ventajosa el contar con un porcentaje de conocimiento del segundo idioma que es casi 5 puntos por encima de la media nacional.

<sup>7</sup> Para cada barra, la primera variable denota la de mayor escolaridad.

Las brechas intra-grupo aparecen con valores máximos por zona de residencia (3,0 veces) y entre las regiones Central y Huetar Norte (5,2 veces) en tanto es la diferencia por sexo la de menor magnitud (1,1 veces). Otros grupos con un rezago relativo importante respecto al mejor desempeño corresponden a las personas ocupadas del Pacífico Central, las de Huetar Caribe y aquellas entre 45 y 59 años. Si se valoran estas distancias en función de su valor óptimo (1), sólo una de ellas (por sexo) se ubica relativamente cercana al parámetro (i.e. dentro del rango del 0,25 de la desviación estándar) mientras cinco de ellas (rural, Pacífico Central, Huetar Caribe, Huetar Norte y personas entre 45 y 59 años) se encuentran a dos desviaciones estándar o más.

**Cuadro 6**

**Indicadores complementarios de formación educativa, 2023**

Característica	% con segundo idioma	% con secundaria completa o superior	% con cursos no formales
Hombre	10,8	41,5	24,6
Mujer	9,9	55,6	33,3
Urbano	12,5	51,9	29,2
Rural	4,2	31,2	24,8
Central	13	51,1	28,8
Chorotega	7,5	42,2	28,2
Pacífico Central	4,9	40,1	32
Brunca	7,1	45,9	22,3
Huetar Caribe	5,8	39,8	21,4
Huetar Norte	2,5	25,6	30,4
No migrante	11	48,1	29,2
Característica	% con segundo idioma	% con secundaria completa o superior	% con cursos no formales
Migrante	5,7	35,7	19,6
25 a 34 años	15	59,2	29,9
35 a 44 años	10,1	49,7	30,5
45 a 59 años	7,4	37,1	26,6
60 años y más	7,9	33	23,3
<b>Nacional</b>	<b>10,4</b>	<b>46,7</b>	<b>28,1</b>

Fuente: Los cálculos de segundo idioma y educación secundaria/universitaria provienen de la ECE II.2023. El indicador de formación complementaria proviene de la ENAHO 2022.

El segundo indicador complementario se refiere al porcentaje de personas trabajadoras que han completado secundaria, tienen alguna educación universitaria o ya han concluido sus estudios superiores. Con su inclusión se busca ilustrar aspectos de logro académico, así como aproximar el potencial para aprovechar oportunidades académicas y laborales futuras dado su nivel educativo actual. Por ejemplo, una persona con diploma de educación secundaria o grado universitario puede optar por una mayor cantidad de oportunidades laborales o inclusive continuar estudiando hacia grados superiores. Una persona que no haya completado al menos el bachillerato en secundaria ve reducidas esas perspectivas.

En Costa Rica, un 46,7% de las personas trabajadoras tiene al menos educación secundaria completa. Este indicador encuentra una amplia dispersión de tasas según el grupo al que se haga referencia. Individualmente, los grupos con mayor nivel de rezago (respecto al promedio) se encuentran en la Huetar Norte (25,6%), zonas rurales (31,2%), personas ocupadas de 60 o más años (33%), migrantes (35,7%) y el grupo de 45 a 59 años (37,1%). Sólo un segmento, el de personas jóvenes (25-34 años), se desprende considerablemente del resto de grupos poblacionales acá discutidos: seis de cada diez jóvenes que ya laboran tienen bachillerato de secundaria o educación universitaria, al menos parcial. Este dato refleja una importante separación generacional respecto a las cohortes de más de 45 años y cuyas tasas respectivas no superan el 35% de su respectivo grupo.

En cuanto a las distancias intra-grupales, varias aristas importantes aparecen. De entre los indicadores analizados, este coeficiente se ubica entre los de mayor distancia entre hombres y mujeres. La brecha estimada muestra que un 55,6% de las mujeres trabajadoras tienen secundaria completa o más en contraposición al 41,5% de los hombres, una diferencia de casi 14 puntos (1,34 veces).

A nivel territorial, la distancia entre las zonas urbanas y rurales es de 20,7 puntos porcentuales (ratio = 1,66 veces), una de las más amplias de la lista. Regionalmente, el rango entre la región Central y el resto va desde un mínimo de 1,11 veces (con la Brunca) y de 2,00 veces (con la Huetar Norte). Cabe recordar que, cuanto más cercana la brecha a 1, mayor igualdad de condiciones se experimenta. La brecha se eleva de forma importante si la comparación se centra entre personas trabajadoras urbanas de la región Central (53,4%) y aquellas rurales de la región Huetar Norte (20,4%). En tal caso, la diferencia es de 2,61 veces. Ninguna brecha se encuentra dentro del rango mínimo (0,25 de la desviación estándar) lo que sugiere la persistencia de desigualdades significativas en todas ellas.

Finalmente, el tercer indicador corresponde al porcentaje de personas ocupadas que ha completado un curso no formal. Según la ENAHO 2022, un 28% de las personas ocupadas mencionan haber recibido una capacitación extra. Dos aspectos parecen relevantes. El primero es que, respecto a ese promedio, las regiones Central y Chorotega se ubican muy cerca del mismo (zona verde) mientras la Brunca, la Huetar Caribe, las personas migrantes y aquellas personas adultas de 60 años o más muestran porcentajes muy por debajo del promedio en el orden del 19%-23,3%. Las mujeres también se encuentran alejadas del rango, pero en una posición ventajosa: una de cada tres ha recibido capacitación.

Las brechas entre grupos presentan perfiles muy particulares no observados en las demás variables. La distancia entre hombres y mujeres, en favor de las segundas, es elevada del orden de las 1,35 veces, valor que la posiciona como una brecha de distancia significativa (zona roja).

A nivel geográfico, la brecha urbana-rural (1,18 veces) es reducida en relación con las métricas usadas en este apartado mientras que por región de planificación resulta interesante anotar que el porcentaje de la región Central no siempre es el más elevado. De hecho, dos regiones, la Pacífico Central y la Huetar Norte, tienen un mayor porcentaje de personas capacitadas que la región Central. Con la región Chorotega, la distancia es prácticamente la misma (1,02 veces) en tanto con la Brunca y la Huetar Caribe las diferencias son altamente elevadas, superiores a 1,3 veces. La brecha más amplia se observa por condición migrante (1,49 veces) con la particularidad que la población trabajadora migrante es, de todos los grupos, quienes menos capacitación adicional reciben (únicamente una de cada cinco personas).

Finalmente, por edad, la brecha ente jóvenes y adultos de 35 a 44 años es prácticamente nula pero aquella con adultos de 60 años o más se estima en 1,28 veces, ubicándose en zona de alta diferencia. A medida que se avanza en el espectro etario, el porcentaje de personas trabajadoras capacitadas disminuye.

#### Mayor escolaridad e inserción laboral exitosa, un vínculo con tendencia a romperse

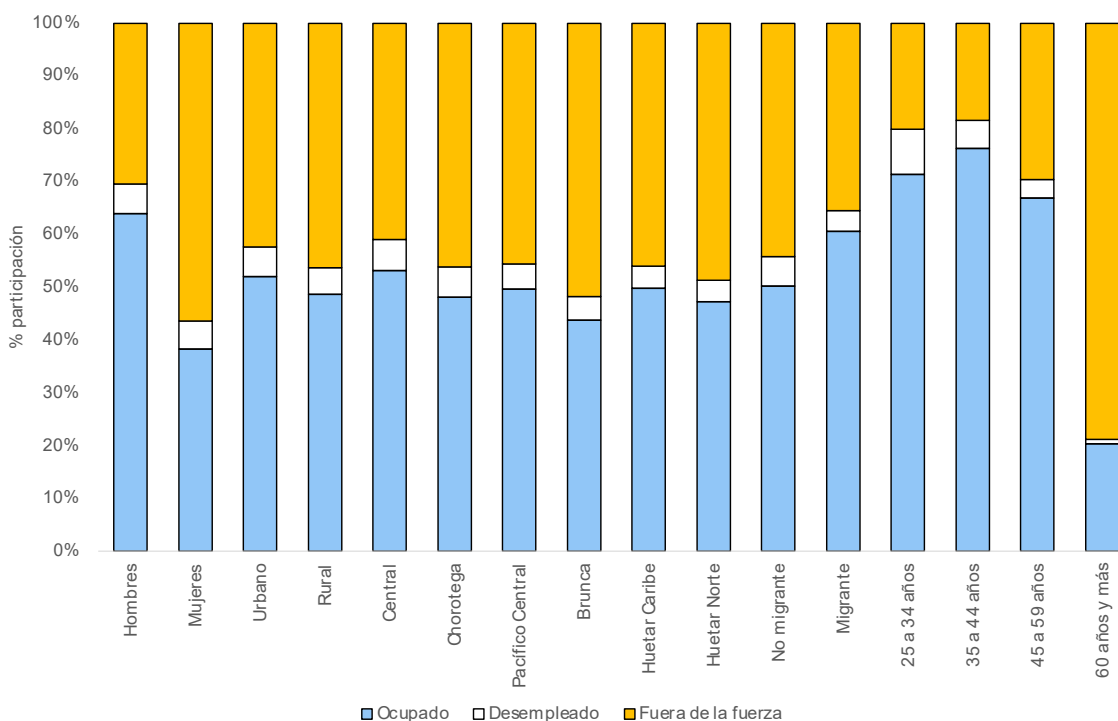
El segundo ámbito de interés dentro del mercado laboral se refiere a las diferencias existentes entre distintos grupos poblacionales para incorporarse en el mercado laboral y las condiciones en que lo hacen aquellas personas que efectivamente participan. Para ello se presentan como temas de análisis los patrones de participación, así como las características de inserción al mercado que muestran los grupos que participan activamente.

La primera consideración relevante responde a la estructura de la población en edad de trabajar según el tipo de relación con el mercado. A nivel nacional, poco más de la mitad de la población de 15 años o más se encuentra ocupada en tanto un 43,4% se ubica fuera de la fuerza laboral. El 5,4% se clasifica como población desempleada. Entre 2013 y 2023, la población fuera del mercado laboral creció en 6 puntos porcentuales en tanto la población ocupada y la desempleada vieron caer sus participaciones porcentuales, en especial la primera (-4,9 puntos).

Estos cambios en la estructura de la población en edad de trabajar están influenciados por cambios desde muy distintos frentes. El aumento en el segmento fuera de la fuerza laboral estuvo impulsado por el crecimiento de ese componente en las regiones Huetar Norte (11,7 puntos), Brunca (7,8 puntos), zonas rurales (6,9 puntos) y personas migrantes (6,8 puntos). Fueron la región Chorotega y el grupo de 25 a 34 años quienes menos crecieron en este apartado con un aumento inferior a 1 punto porcentual en cada caso. Como es esperable, estos mismos segmentos poblacionales experimentaron las mayores caídas en el porcentaje de personas ocupadas. De hecho, la reducción en la ocupación explica el 73,3% del aumento en la población fuera de la fuerza laboral. Únicamente en un caso, el de jóvenes de 25 a 34 años, la reducción del porcentaje ocupado se tradujo parcialmente en un aumento de la tasa de desempleo.

Gráfico 18

Participación en mercado laboral de población en edad de trabajar, por grupo. 2023



Según datos de la ECE, entre 2013 y 2023 la tasa de participación en el mercado laboral<sup>8</sup> cayó casi 6 puntos porcentuales al pasar de 62,7% a 56,6%. Tres consideraciones llaman la atención. La primera es que son las mujeres el grupo poblacional que menor participación al alcanzar una tasa del 43,6% del segmento en edad de trabajar. Esto significa que, de las 2,1 millones de mujeres que conforman el grupo de 15 años o más, únicamente 902 mil participan del mercado de trabajo, sea como mujeres ocupadas o en búsqueda de empleo. Las personas residentes en las regiones Brunca (48,3%) y Huetar Norte (51,3%) completan los tres grupos con menores participaciones laborales. Al otro extremo del espectro, son las personas de 35 a 44 años (81,6%) y las de 25 a 34 años (80%) las que lideran el indicador.

Segundo, entre 2013 y 2023, todos los grupos poblacionales (excepto el de 35 a 44 años) perdieron participación laboral en mayor o menor grado. Las principales caídas, en cuanto a puntos de participación, se observaron entre residentes de la Huetar Norte (-11,7 puntos menos), la región Brunca (-7,8 puntos) y la zona rural (-6,9 puntos). Los grupos de personas entre 25 y 34 y entre 35 y 44 años tuvieron caídas o incrementos que, en cada caso, no superaron el punto porcentual.

Estas variaciones en las tasas de participación permitieron a su vez ciertos cambios en el posicionamiento relativo de los diferentes grupos. Las mujeres persisten, en ambos años, como el segmento con menor tasa de participación habiendo a su vez perdido 5,7 puntos en ese lapso. La Huetar Norte, octava en el 2013, aparece ahora como la tercera población con menor

<sup>8</sup> La tasa de participación se estima como la suma de personas ocupadas y personas desempleadas como porcentaje de la población en edad de trabajar (15 años o más).



participación. La zona rural, la región Brunca y los hombres también vieron empeorar su posición relativa.

Tercero, en materia de brechas de la fuerza laboral, aquellas de género se muestran como las más amplias y en proceso de expansión a lo largo del tiempo. La diferencia de tasas de participación entre hombres y mujeres pasó de 1,54 a 1,59 veces, siendo las más amplias de entre los grupos estudiados y posicionándose como una brecha altamente significativa (zona roja).

Contrario a lo observado en la dimensión anterior en materia educativa, las brechas por zona geográfica son reducidas y relativamente estables. Entre 2013 y 2023, la brecha pasó de 1,05 a 1,07 veces, siendo considerada una brecha de moderada significancia (zona amarilla). Esta dimensión presenta las distancias de participación más reducidas de la lista.

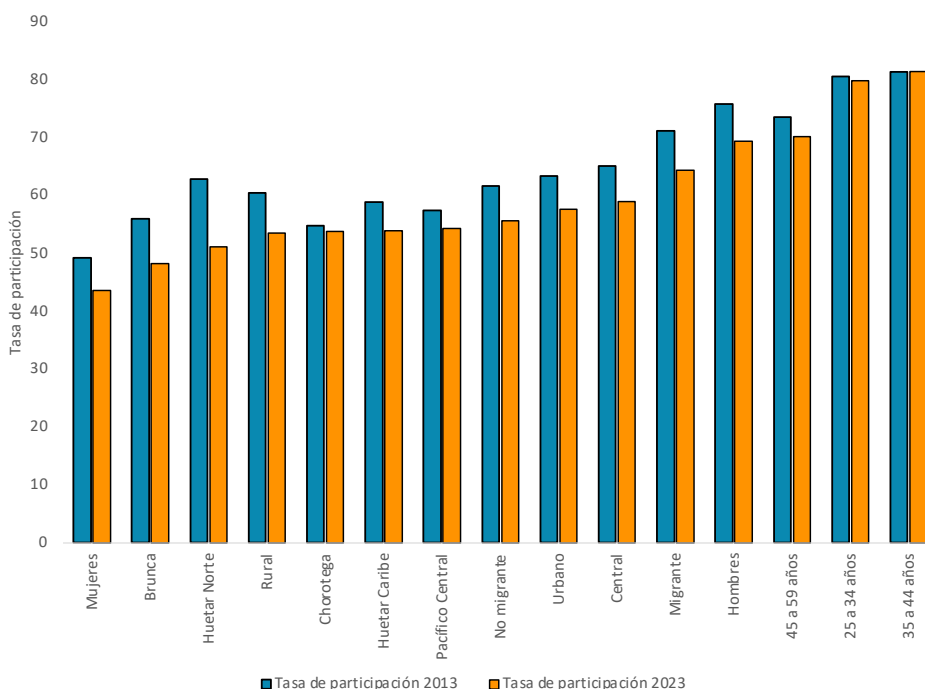
El desempeño a nivel de región es más diverso. De las 5 relaciones estudiadas, la brecha entre la región Central y el resto de las regiones se mantuvo igual en un caso (Huetar Caribe), aumentó en dos casos (Brunca y Huetar Norte) y bajó en otros dos (Pacífico Central y Chorotega). La brecha entre la Central y la Huetar Norte, que en el 2013 era prácticamente igual, se elevó a tal grado que se convirtió en la más amplia de todas, justo al límite entre la zona amarilla y la zona roja.

Los últimos dos grupos se refieren a las diferencias por condición migrante y grupo etario. En cuanto a los primeros, la participación de la población migrante es mayor a la no migrante siendo la brecha en favor de los primeros de 1,15 veces. Eso sí, entre los dos años considerados, las personas migrantes vieron caer su tasa de participación (-6,8 puntos) a un nivel superior a las no migrantes (-6 puntos).

Dentro de los grupos de edad, la evidencia no muestra cambios importantes entre grupos de menos de 45 años en tanto la brecha entre el grupo de 35 a 44 y el de 45-59 años creció y se posicionó en el segmento amarillo.

Gráfico 19

Estructura laboral de población 15 años o más, por condición individual (II.2023)



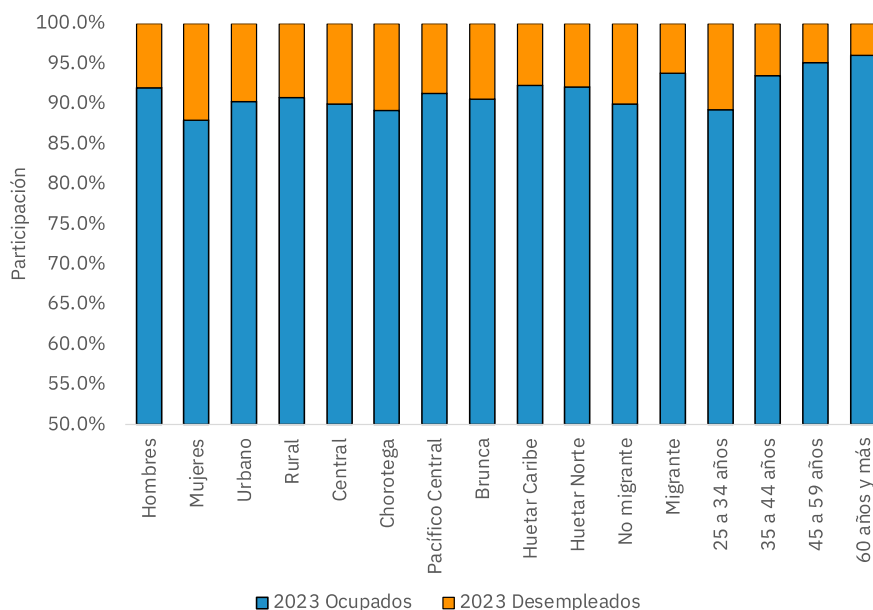
Fuente: Estimaciones con base en ECE II.2023.

Ahora bien, no sólo es importante saber qué porcentaje de la población participa del mercado laboral sino la forma en que lo hace, esto por cuanto, a mayor porcentaje de ocupación, más exitosa la incorporación. Para ello se analiza la composición de la fuerza laboral por grupo, en el entendido general que su tamaño muestra una reducción entre los dos años estudiados.

Para el 2023, la fuerza laboral propiamente dicha se compone de un 90,4% de personas ocupadas y un 9,6% de desempleo. Los grupos etarios de 35 a 59 años y las personas migrantes muestran las mayores tasas de ocupación con tasas por encima del 93,6% de sus respectivas fuerzas laborales (i.e. tasas de desempleo de entre 4,8% y 6,2%). Por el contrario, la ocupación es comparativamente baja en los sectores de mujeres, residentes de la Región Chorotegea y jóvenes de 25 a 34 años, todas con tasas de desempleo por encima del 10,8%.

De los segmentos poblacionales del gráfico 19, las mujeres tienen la mayor tasa de desempleo con un 12,1% de su fuerza laboral. Junto a las regiones Central (-0,3%) y Pacífico Central (-0,2%), las mujeres (-0,8%) son uno de los tres grupos cuya tasa de desempleo se redujo en la menor magnitud. Por su lado, las tasas de paro en Brunca (-2,9%), Huetar Caribe (-4,8%) y personas adultas de 35 a 44 años (-2,6%) experimentaron las mayores reducciones. Finalmente, personas jóvenes de 25 a 34 años, por su lado, fueron los únicos segmentos cuya tasa de desempleo aumentó (+1,5 puntos).

Gráfico 20  
Estructura de la PEA por característica individual, 2023



Fuente: Estimaciones con base en ECE II.2023.

Un tema adicional en cuanto a la participación laboral responde justamente al segmento poblacional que se encuentra fuera del mercado laboral. Según se comentó anteriormente, de la población en edad de trabajar, aquella clasificada como fuera del mercado laboral ganó considerable participación en la estructura del grupo (del 37,3% al 43,4%). De todos los segmentos, las mujeres son, por mucho, las que muestran la mayor proporción de personas fuera del mercado laboral: el 56,4% de ellas no tienen la oportunidad de laborar ni de buscar empleo. Esto se traduce, en términos nominales, en 1,166,444 mujeres en dicha condición. Otras poblaciones con elevada proporción de personas fuera del mercado laboral son la región Brunca (51,7%) y la Huetar Norte (48,7%). La brecha por sexo indica que el porcentaje de mujeres fuera del mercado es 1,85 veces superior al de hombres, siendo, de nuevo, la más amplia del conjunto de variables acá analizadas. De las otras poblaciones, las brechas son más amplias para grupos rurales (1,09 veces), no migrantes (1,25 veces) y todas las regiones del país en cuanto a su comparación con la región Central.

Los casos de mujeres, la región Brunca y la Huetar Norte merecen análisis especial dado lo comentado en el párrafo anterior en donde se refleja que la mitad o más de su población en edad de trabajar se encuentra fuera del mercado de trabajo. El análisis explora, para cada caso, las razones para no participar del mercado laboral de los grupos de interés y de los dos grupos de referencia que le acompañan (hombres y región Central).

Según se detalla a continuación, por sexo, las razones para no participar del mercado laboral difieren de forma significativa. Cerca de dos de cada tres hombres que se encuentran fuera del mercado de trabajo lo hacen por asistir al sistema educativo. Las otras dos razones se asocian al no deseo de trabajar (16,3%) y a razones personales (10,9%).

En el caso de las mujeres, las razones muestran algunas diferencias significativas. Para todo grupo como un todo, la existencia de obligaciones familiares asociadas principalmente a cuidado y trabajo doméstico explica el 46,6% de las razones para no buscar empleo en tanto un 28,4% se origina en la asistencia al sistema educativo. En total, se estima en 455 mil mujeres las que no participan del mercado laboral por tales obligaciones familiares. En contraparte, son 18,000 mil los hombres en tales condiciones.

Una exploración más detallada permite adentrarse en las condiciones específicas que gobiernan la exclusión del mercado laboral por sexo. Entre mujeres con responsabilidades familiares, la edad promedio es de 45 años habiendo cerca de 35,000 de ellas con edades por debajo de los 25 años. Su escolaridad promedio alcanza los 7,95 años con 223,500 mujeres habiendo alcanzado primaria o menos y 38,000 teniendo algún tipo de educación terciaria. Si bien el casi 59% de las mujeres con compromisos familiares reside en la región Central (lo cual no es sorprendente por la elevada proporción que este territorio representa a nivel nacional), sí parece alertar el hecho que el 7,7% se ubique en la Huetar Norte rural en tanto otro 11% lo hace en las regiones Brunca y Huetar Caribe (cada una en idénticos porcentajes).

Regionalmente hablando, las tres razones más importantes en la región Central son la asistencia a centros de enseñanza (40,8% de los casos), la existencia de obligaciones familiares (33,6%) y la falta de deseos de trabajar (15,1%). Las dos regiones con mayor proporción de personas fuera del mercado laboral, por su lado, mantienen esas tres categorías como las más importantes, pero sobresale el mayor porcentaje de personas que no desean trabajar (por encima del 17,8%), la menor proporción de asistentes a centros educativos y la mayor tenencia de obligaciones familiares en la Huetar Norte. De hecho, para esta región, las obligaciones de cuidado y trabajo doméstico son la primera razón de ausencia del mercado de trabajo.

#### Cuadro 7

##### Razones para no buscar trabajo, por característica 2022

Razón	Hombre	Mujer	Central	Brunca	Huetar Norte
Asiste a centro de enseñanza	63,1	28,4	40,8	32,7	31,7
No desea trabajar	16,3	14,8	15,1	19,4	17,8
Tiene obligaciones personales	10,9	6,6	7,2	12,3	10,4
Tiene obligaciones familiares	4,1	46,6	33,6	33,5	37,9
Resto	5,7	3,6	3,4	2,1	2,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Estimaciones con base en ENAHO 2022.

La última variable de interés en este segmento se refiere a las desigualdades en las horas efectivamente laboradas con regularidad. Entre 2013 y 2023, el mercado laboral mantuvo prácticamente inalterado el número promedio de horas laboradas por semana al pasar de 43,2 a 43,0 horas. La distribución de esa dinámica mostró patrones muy diversos por entre los distintos grupos poblacionales que inclusive contradicen tendencias y brechas observadas en variables anteriores. En total, 10 categorías vieron reducir su promedio de horas trabajadas en tanto 5 lo vieron crecer.

En un primer lugar, las mujeres (el grupo con el menor número de horas laboradas por semana) lograron aumentar su promedio semanal en 1,6 horas, un 4,3% de incremento. Los hombres, por el contrario, vieron reducir su promedio en un 3% que equivale a 1,4 horas. Como resultado de lo anterior, la brecha por sexo bajó de 1,29 a 1,20 veces si bien se mantiene como la mayor diferencia existente entre los grupos estudiados.

La dimensión geográfica muestra varios patrones relevantes. A nivel urbano-rural, si bien la brecha es de las más reducidas, la misma ha tendido a extenderse de forma que paso de un valor prácticamente unitario (1,01 veces) en el 2013 a 1,02 veces en el 2023, siendo esta última una diferencia con diferencia significativa. Por otro lado, por región de planificación, la dispersión de resultados mostró una tendencia a reducirse en tanto la posición relativa de las regiones también mostró variantes importantes. En cuanto al primer punto, el rango estadístico entre el menor y el mayor promedio de horas trabajadas se redujo de 6,8 horas y 4,4 horas. La región Huetar Caribe aparece con la mayor cantidad de horas trabajadas tanto en el 2013 como en el 2023 si bien su promedio cayó en 1,3 horas. La unidad con la menor cantidad de horas laboradas varió de la región Central en el 2013 a la región Pacífico Central. En sentido neto, las regiones ganadoras del periodo fueron la Central (+2,2 horas) y la Brunca (+1,5 horas) en tanto la Chorotega (-2,2 horas) y la Huetar Caribe (-1,3 horas). La Pacífico Central y la Huetar Norte también experimentaron un declive en sus horas promedio.

La relación por condición migrante también se contrajo de forma significativa (de 1,07 a 1,02 veces) y si bien la distancia es estadísticamente válida, la tendencia podría hacerla desaparecer de continuar esta misma dinámica. El peso explicativo en el cierre de estas brechas se origina en la caída del promedio de horas laboradas por las personas migrantes equivalente a 1,7 horas en contraposición al aumento de la jornada semanal media de las personas no migrantes, misma que se elevó en 0,4 horas. Aun así, las personas migrantes trabajan, en promedio 1 hora más por semana que sus contrapartes no migrantes.

Finalmente, los segmentos etarios menores a 45 años tienen patrones muy similares de intensidad laboral si bien en la pasada década el grupo más joven perdió una mayor cantidad de horas laborables por semana (-1,4 horas) respecto al segmento 35-44 años (-0,6 horas). Únicamente las personas ocupadas de 45 a 59 años vieron crecer su jornada semanal en 0,90 horas.

### **Zonas costeras y personas migrantes con empleos de menor calidad**

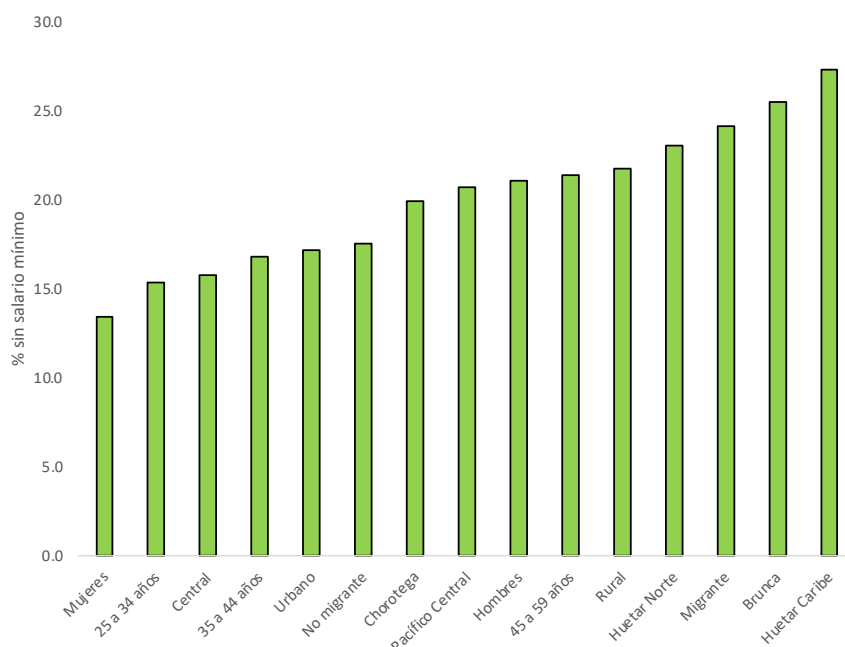
La tercera parte de este apartado analiza diferenciales en materia de ingresos laborales y de calidad en el empleo, medida a través de cumplimiento de garantías laborales.

En materia de pago del salario mínimo<sup>9</sup>, la evidencia muestra que son las mujeres, las personas de la región Central y jóvenes de 25 a 34 años quienes menos problemas de pago del salario mínimo enfrentan, todos eso sí con tasas entre 13% y 16% del total. Por su lado, las personas trabajadoras de las regiones Brunca, Huetar Caribe y migrantes tienen los mayores porcentajes de pago por debajo del mínimo: una de cada cuatro personas de estos grupos no recibe salario mínimo.

---

<sup>9</sup> En línea con el indicador estimado en la ECE II.2023, los cálculos se refieren a personas asalariadas que trabajan jornadas completas. El análisis lo ha restringido al sector privado.

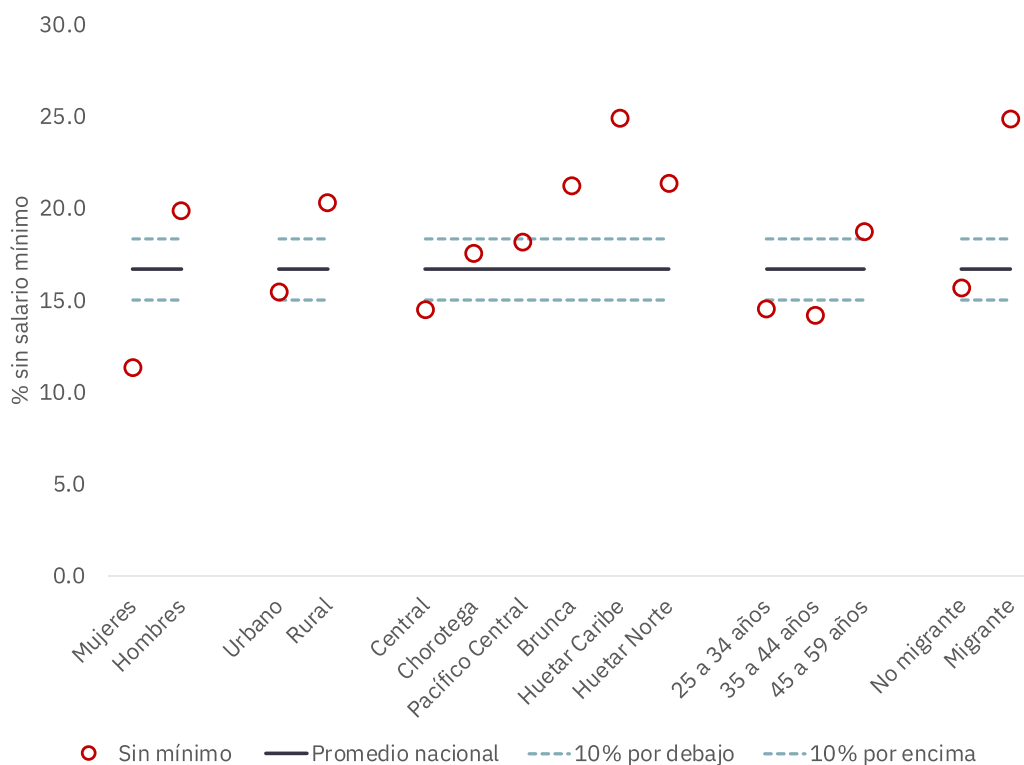
**Gráfico 21**  
**Porcentaje de trabajadoras sin pago de salario mínimo**



Fuente: Elaboración con ECE II.2023.

Si, en lugar de estimar el incumplimiento entre personas ocupadas con jornadas completas se calculase la tasa respectiva en personas subempleadas (<40 horas por semana), entonces los resultados cambiarían de manera sustancial. Por ejemplo, el promedio de personas ocupadas que reciben menos del pago mínimo por hora (¢1,467.4 para el 2023) se estimaría en 37,1%. Los segmentos con mayores niveles de incumplimiento se localizan en zonas rurales, la Huetar Caribe y la Huetar Norte donde seis de cada persona subempleada recibe menos del mínimo. Por el contrario, son los hombres, de zonas urbanas y la región Central, quienes tienen menores niveles de incumplimiento. Resulta interesante anotar que el porcentaje de incumplimiento en el grupo de personas trabajadoras subempleadas es siempre mayor que entre aquellas personas con jornadas superiores a 40 horas. Eso sugiere justamente que esta población actúa como un motor que eleva los niveles de desigualdad dentro del mercado de trabajo, tanto entre grupos (hombres y mujeres, por ejemplo) y a nivel intra-grupo (mujeres subempleadas y con jornadas completas).

**Gráfico 22**  
**Porcentaje de trabajadores sin pago de salario mínimo (<40 hrs)**



Fuente: Elaboración con ECE II.2023.

El cuadro 9 muestra los resultados para una serie de indicadores de calidad de empleo. En materia de subempleo, tres segmentos poblacionales experimentan tasas de dos dígitos que se alejan considerablemente del promedio nacional. Esos grupos son las personas de las regiones Chorotega, Pacífico Central y Huetar Norte. Por el contrario, los hombres, las personas residentes urbanas, de la región Central y entre 35-44 años presentan los valores más reducidos.

En materia de ausencia de cobertura con seguro social, todos los segmentos poblacionales analizados experimentan tasas de dos dígitos siendo los grupos más afectados las mujeres, de zonas rurales, de las regiones Huetar Caribe, Pacífico Central y Chorotega, en condición migrante. Por su lado, las personas ocupadas de la región Central y menores a 45 años tienen las menores tasas que, en todo caso, nunca son menores al 22% del grupo.

## Cuadro 8

## Indicadores de calidad de empleo

	% subempleo	Sin seguro por trabajo
Hombres	5,32	26,31
Mujeres	8,37	30,42
Urbano	5,38	26,00
Rural	9,67	33,29
Central	5,36	24,94
Chorotega	10,68	33,96
Pacífico Central	10,33	39,09
Brunca	5,66	28,37
Huetar Caribe	4,42	31,74
Huetar Norte	12,14	34,12
No migrante	6,25	26,49
Migrante	8,22	38,82
25 a 34 años	6,43	24,59
35 a 44 años	4,49	22,65
45 a 59 años	7,91	27,83

Fuente: Elaboración con ECE II.2023.

## Brechas laborales con lecturas diferenciadas por zona

Las conclusiones emanadas del trabajo cualitativo no se alejan substancialmente de lo anteriormente comentado, pero sí permiten ampliar en algunos ámbitos que no son frecuentemente considerados en los análisis.

En sí, las aspiraciones de los grupos parecen más que básicas: trabajos remunerados de manera justa, respeto entre jefaturas y subalternos, pago de horas extras, seguro social, cumplimiento de la legislación laboral que implique mayor inspección laboral, especialmente en las labores agrícolas. Esto pareciera ser el eje esperado para los casos donde se discute el trabajo asalariado. Cabe mencionar que, si bien el trabajo es una inquietud generalizada, hay diferencias en la manera en la que ocurre en la ruralidad y cómo sucede en la urbanidad.

En cuanto a la perspectiva rural, se señala ampliamente por las personas participantes del estudio cómo sus localidades experimentan una limitada demanda de empleo. Además, se indica que estas zonas presentan un desequilibrio entre *remuneración- carga de laboral – complejidad de las tareas*, incumplimiento de derechos laborales y poca diversidad de las fuentes de empleo, ubicándose en labores poco calificadas mayormente en el sector agrícola. A raíz de esto, la migración es frecuente. La migración interna también conlleva sus ajustes, como la adaptación espacial en estructuras habitacionales distintas, muchas veces más cerradas, menos espaciales o en malas condiciones. Quienes deben migrar lejos de su núcleo familiar también deben privarse de esa red de contención que este grupo de personas suele representar. Así lo deja ver esta participante del estudio, en donde se exponen varias migraciones de



Guanacaste a Limón y de nuevo a Guanacaste, en los que la motivación del desplazamiento fue de tipo laboral;

[...] mi papá se dedicaba a trabajar en las bananeras, entonces vivimos un tiempo en Limón. Mi mamá siempre estuvo con nosotros en lo que era educación y tiempo. Si nos dieron lo muy básico, vivíamos en Limón en una casa de madera en alto porque como llueve mucho se llenaba, dormíamos en el piso, no teníamos en realidad agua y luz y la alimentación sumamente básica. Así vivimos... Luego nos vinimos para Bolaños. [...] ellos han vivido, o vivieron siempre en Bolaños y se fueron más bien en busca de trabajo (Mujer, 31 años, La Cruz).

Existe entre los entrevistados una desazón especial sobre el rol de la educación. Aún cuando cada vez más personas puedan completar la educación secundaria, se formen en programas de educación técnica e incluso logren estudiar una carrera universitaria, no es garantía de que ello les facilite su ingreso al mercado laboral en sus cantones. Al respecto, una persona indígena bribri de la comunidad de Amubri afirma que *“Debería de haber otro tipo de oportunidades de trabajo, no solamente de educación<sup>10</sup> o eso, si no debería de haber más espacio de otras empresas que vengan a trabajar con la parte tecnológica y los que quieren estudiar tecnología tengan la oportunidad de trabajar en eso.”* (Hombre, 54 años, Talamanca, Telire, Amubri)

En cuanto al desequilibrio que se puede observar entre esfuerzo/remuneración, es manifiesta la baja satisfacción que tienen muchas de las personas consultadas, ya sea refiriéndose a la experiencia personal, de sus familias y/o la que pueden observar en sus entornos. La remuneración muchas veces no se ajusta a la carga de trabajo, pero al no encontrarse con muchas opciones en sus comunidades/cantones, deben permanecer en ellos y/o buscar un ingreso extra. En general, se encontró que las personas de estos 3 cantones rurales consideran que hay un gran incumplimiento de la legislación laboral, con más efecto sobre las labores agrícolas o aquellas que requieren un mayor uso de la fuerza física. Estas faltas se manifiestan en el no pago de horas extras, asignación posterior de tareas que no fueron las acordadas al momento de la contratación, no pago de la cuota patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social o de la no cobertura de la póliza por riesgos del trabajo, así como malos tratos por parte de las personas encargadas de supervisar las funciones.

Por otra parte, fue coincidente encontrar en el criterio de las personas participantes de esta de investigación de estos 3 cantones rurales la premisa de que no necesariamente esperan la apertura de fuentes de empleo en una empresa o institución. Ya sea por un deseo de independencia o por una desesperanza porque este tipo de organizaciones se interesen por sus territorios, se considera que la mejor opción para poder permanecer en sus territorios es emprendiendo y creando sus propios trabajos. Esto también puede significar el fortalecimiento-actualización de las formas de producir, principalmente en el sector agrícola, siendo que la tierra (o el mar) es la forma de sustento directo de muchas familias y el medio para generar los ingresos para complementar las otras necesidades básicas. Referente a esta necesidad de fomentar las capacidades para el trabajo independiente, es importante evaluar las acciones de las instituciones pertinentes, considerando que, por ejemplo;

---

<sup>10</sup> Quiere decir que no solo para integrarse al gremio de la educación como profesión.

En Tuis casi que todo mundo está con emprendimientos, la verdad, puras finquitas propias, negocitos propios, súpers y todo eso, pero sí acá en Tuis básicamente todo se mueve por emprendimiento propio. La gente se dedica a la ganadería, al café, a la caña o a cultivar lo que quieran cultivar, pero si la mayoría agropecuario, el sector (Hombre, 28 años, Turrialba, Tuis).

Por el lado urbano, un hallazgo común se refiere a la preocupación de lo difícil que es encontrar un trabajo en los últimos años. Pero la valoración del tema laboral no se circunscribe a esta consideración, sino que hay un conjunto adicional de temas complementarios. Uno de ellos es que estudiar una carrera universitaria ya no garantiza un pronto ingreso al mercado laboral ni una alta remuneración. Esta valoración fue particularmente alentada por las personas mayores de 60 años quienes mostraron preocupación por el futuro de sus descendientes dado que surgió la inquietud que algunas de sus hijas e hijos no tienen trabajos con condiciones estables y bien remunerados o que comenzaron a trabajar a edades más tardías en contraste con ellos. En el grupo focal de Escazú, las personas entre los 30 y los 50 años indicaron que la forma como se expresa la desigualdad en sus vidas es que cada vez se ofrecen peores condiciones laborales que generan gran incertidumbre, lo que lleva a una reducida capacidad de planificación del proyecto de vida en lo que concierne al ámbito económico.

Tres aspectos adicionales alimentan la discusión en torno al tema de lo laboral y la vivencia de la desigualdad. Primero, es necesario considerar el trabajo más allá del enfoque asalariado. En el caso de las zonas indígenas que contempló el estudio, por ejemplo, la principal queja es la ausencia de un pago justo por sus productos (plátano, cacao), lo que resulta en una preocupación central para estos territorios siendo la agricultura una de las pocas fuentes de ingreso posibles. Segundo, los procesos migratorios principalmente en las zonas rurales conllevan la explotación laboral, en claro irrespeto de los derechos humanos y generando tensiones en el contexto laboral local, principalmente en ciertos trabajos agrícolas. Es decir, en muchas zonas rurales la inmigración se concibe como un fenómeno de competencia desleal hacia las personas trabajadoras locales. Finalmente, si bien las personas tienden a favorecer el emprendimiento y la creación de sus propios empleos como una forma de mantenerse en sus comunidades rurales, el proceso de emprender formalmente se concibe como lleno de barreras procedimentales y jurídicas que impiden consolidar el proyecto.

### **Acumulación de activos**

El tercer apartado relevante en el análisis de los principales patrones de desigualdad y movilidad se refiere a la acumulación de activos, uno de los temas que en años recientes ha despertado más interés por cuanto es una de las vías a través de las cuales los elevados niveles de desigualdad se pueden mantener a través del tiempo. Entran en esta ecuación tanto la riqueza financiera como la tenencia de vivienda y la posesión de negocios.

Según lo comentan Nunn et al (2007) y CAF(2023), la acumulación de activos funge como promotora de la desigualdad en el largo plazo por muy distintas vías. Por ejemplo, la riqueza se puede heredar, permitiéndole a la siguiente generación disfrutar de mejores condiciones de vida sin ser necesariamente actor directo de su gestación. En materia de vivienda, su tenencia así como otros activos del hogar también forman parte de la riqueza familiar que puede ser transferida a su descendencia. Además, la calidad de la vivienda y sus características físicas podrían crear un ambiente apropiado para el desarrollo de los infantes al incidir positivamente

en su formación cognitiva, su salud y su desarrollo psicosocial. Todo esto no considera, además, la acumulación de intangibles relacionados con temas como gestión y disciplina financiera. Este apartado enfatiza las diferencias existentes en posesión de vivienda y sus condiciones, así como el acceso a crédito según las condiciones individuales de la población.

### ***Un país con alta tenencia de vivienda, pero con calidad diversa y poca protección de activos***

En cuanto a la vivienda, su análisis se ha popularizado en los estudios sobre desigualdad porque se considera uno de los activos que más equitativamente se encuentra distribuido por entre la población, contrario al caso de otros como la tenencia de instrumentos financieros. Como se mencionó anteriormente, la vivienda es un activo en sí cuyas condiciones y características pueden potenciar la riqueza familiar. En su estudio sobre posesión de vivienda y distribución de la riqueza en Europa, Causa, Woloszko y Leite (2020) concluyen que, en relación con este vínculo: a) la menor tenencia de hogar se asocia con elevados niveles de desigualdad de la riqueza; b) el pago de vivienda suele ser el pasivo más importante para las personas jóvenes y aquellas en los primeros grupos de riqueza; c) no existe evidencia que demuestre que la tenencia de vivienda motive mayores ahorros a largo plazo. Además, teóricamente la vivienda cumple un rol de apoyo a la formación de capital humano vía mejores condiciones de aprendizaje y fortalecimiento de la salud mental y física de las personas. Según Montero y Miranda (2023), en Costa Rica las personas que habitan en residencias en mal estado podrían perder hasta 5 años respecto a la esperanza de vida nacional debido a su mayor exposición a enfermedades infecciosas y crónicas y a una menor salud mental. El mejoramiento de las viviendas suele venir acompañado de mayor seguridad ciudadana, mayor disponibilidad de servicios y modernización del entorno del vecindario donde se reside.

En Costa Rica, un 74% de las familias indican contar con casa propia, sea propia totalmente paga (65%) o hipotecada (8,9%). Un 18,2% adicional alquila y un 7% reside en una vivienda prestada. Los precarios representan un 0,8% de las familias (cerca de 13,851 hogares).

Al analizar la tenencia de hogar por característica de la jefatura, cuatro grupos sobresalen por tener tasas muy reducidas por debajo del 50% del grupo correspondiente: las jefaturas jóvenes de 15 a 24 años (40,8%) y aquellas con persona migrante (45%). De los otros segmentos analizados, los hogares en pobreza extrema y en pobreza no extrema se ubican también dentro de los grupos con tenencias por debajo del 70% si bien en ambos casos tales porcentajes exceden el 68%. Al otro lado del espectro se ubican tres tipos de jefatura: con discapacidad (80,2%), adultos no migrantes (81,2%) y adultos mayores (87,3%).

A lo interno de cada grupo de interés, las brechas de tenencia son muy variadas. Respecto a sus contrapartes correspondientes, las mayores tasas se observan en jefaturas femeninas (1,04 veces), familias rurales (1,06 veces), las residentes en la región Brunca (1,11 veces respecto a Pacífico Central), los hogares del decil X (1,11 veces respecto al decil I) y las personas con discapacidad (1,1 veces). Según se comentó previamente, jefaturas jóvenes y de personas migrantes tienen las menores tasas de tenencia lo que conlleva, como es de esperar, a que las brechas respectivas sean igualmente amplias. De esta forma, por grupo etario, la posesión de vivienda es 2,14 veces más grande entre jefaturas de adultos mayores respecto a jóvenes, una diferencia que puede considerarse normal y esperable por ser la vivienda un activo que, por lo

general, se adquiere durante etapas más avanzadas del ciclo de vida. En cuanto a las distancias por condición migrante, las personas costarricenses tienden a tener 1,81 veces más vivienda que las personas migrantes.

La tenencia de vivienda es un primer aspecto de interés; la calidad de su infraestructura y su funcionalidad son otras condiciones que deben tomarse en cuenta sea para analizar su rol como activo valorizable o sea que el interés se centre en su papel promotor de desarrollo humano, especialmente durante la infancia y adolescencia. Tres elementos resultan claves acá: calidad de la infraestructura, nivel de hacinamiento y disponibilidad de servicios básicos.

El 8% de las viviendas en Costa Rica tienen mala calidad de infraestructura. Esto Los datos reflejan que esta es una variable de brechas amplias con algunas otras características no observadas anteriormente. Por ejemplo, todas las regiones de planificación excepto la Central (5,5% de los hogares con mala infraestructura) tienen tasas de dos dígitos hasta alcanzar un máximo de 14,1% en la Pacífico Central. Algo similar sucede por condición socioeconómica, misma en donde los hogares pobres tienen entre 14,1% (pobreza no extrema) y 20,4% (pobreza extrema) de sus residencias con construcciones inadecuadas. Este mismo patrón se observa por decil de ingreso, donde los tres primeros segmentos experimentan un porcentaje de deterioro que va del 11,4% (decil III) y el 20% (decil I) en contraste al 0,9% del decil X. Otras brechas igualmente amplias se observan en zonas rurales (1,62 veces mayor), hogares con jefatura migrante (1,84 veces) y hogares con jefes que tienen una discapacidad (1,71 veces). Muchos de estas categorías tienen la particularidad de ser segmentos con elevadas tasas de tenencia de vivienda, pero a la vez se ubican entre los grupos con casas más deterioradas.

El hacinamiento por dormitorios afecta al 1,4% de las familias en Costa Rica. Si bien el promedio nacional no representa a un elevado porcentaje de unidades, existen cuatro grupos cuyos niveles de hacinamiento son cerca de 3 veces o más el promedio nacional. Tales grupos son las jefaturas jóvenes (4,0%), migrantes (4,75%) y los segmentos altamente correlacionados del decil I (5,5%) y las familias en pobreza extrema (6,9%). Por su lado, los deciles 7 al 9 prácticamente no muestran tasas de hacinamiento (0,3% o menos del total de hogares), siendo acompañados por las jefaturas de adultos mayores (0,33%). Como resultado de lo anterior, las familias del decil X tienen 91,5 veces más niveles de hacinamiento que las familias de los mayores deciles, siendo esta la brecha más amplia de las acá consideradas. Otros grupos con tasas de hacinamiento substancialmente mayores respecto a su contraparte son las halladas entre regiones (la tasa en el Pacífico Central es 5,5 veces más elevada que la Brunca), jefatura migrante (4,4 veces) y zona (1,65 veces en territorios rurales).

Finalmente, según se comentó anteriormente, la vivienda cumple un rol gestor del desarrollo humano tanto por sus condiciones físicas como por la disponibilidad de servicios que promuevan una adecuada salud mental y física y, en general, una elevada calidad de vida. La disponibilidad de servicios públicos es una forma de dimensionar esta consideración. Para ello, se utiliza el porcentaje de hogares sin servicios básicos o con disponibilidad deficiente según lo define el INEC en la ENAHO.

Al respecto, el promedio nacional asciende al 6,3% de los hogares que no poseen servicios básicos con servicio apropiado. Siente grupos experimentan altos niveles de carencia que superan, en todos los casos, al 10% de las familias en esos segmentos. Los grupos con mayor rezago corresponden a jefaturas de migrantes extranjeros, residentes en el Pacífico Central,

Chorotega o Huetar Caribe, aquellas en pobreza extrema/pertenecientes al decil I y finalmente la de origen rural. Cerca de una de cada siete hogares del decil I, la Huetar Caribe o de zonas rurales tiene servicios básicos deficientes o no cuenta con ellos del todo. Por su lado, las familias de la región Central, urbanas y de los deciles VIII al X tienen tasas que son menos de la mitad que el promedio nacional. Al comparar las principales características a su interior, las brechas más significativas son halladas entre deciles (6,23 veces entre decil I y decil X) y consideraciones geográficas (5,84 veces por zona, 4,59 veces entre regiones Central y Huetar Caribe). Las diferencias por sexo (1,49 superior en jefaturas masculinas), condición migrante (1,72 veces superior en migrantes) y condición de discapacidad (1,19 veces mayor en jefaturas con discapacidad) rezagan considerablemente las otras características ya mencionadas.

Toda esta información se encuentra sintetizada en un solo indicador preparado por INEC y disponible en la ENAHO denominado “Calidad de la Vivienda”, misma que clasifica el estado de la residencia tomando hacinamiento, disponibilidad de servicios y calidad de la infraestructura para su valoración. Según el resultado, la vivienda podría clasificarse en inaceptable, deficiente, aceptable y óptima. En aras de profundizar en los patrones observados previamente, el análisis integró dos indicadores, el porcentaje de residencias con valoración inaceptable o deficiente y el porcentaje de tenencia de vivienda. Los resultados se muestran en el gráfico 23.

La figura se subdivide en cuatro grupos según la característica se encuentre por encima o por debajo de cada uno de los promedios respectivos (74% para tenencia, 9,4% para hogares calidad inaceptable o deficiente). Los cuatro grupos incluyen lo siguiente:

- Grupo I: grupos con baja tenencia y calidad por debajo del promedio;
- Grupo II: tenencia por encima del promedio y calidad por debajo del promedio;
- Grupo III: tenencia por encima del promedio y calidad superior al promedio
- Grupo IV: tenencia por debajo del promedio y calidad superior al promedio

Siguiendo la distribución de los distintos grupos poblacionales, el Grupo I incorpora dentro de sí aquellos segmentos en peores condiciones. Los hogares con jefatura joven y con personas migrantes se posicionan como los más afectados al contar con las menores tasas de posesión de vivienda al tiempo que las casas donde habitan tienen limitaciones de calidad superiores al promedio. Eso sí, ambos no son los únicos grupos poblacionales en dicha condición. Los resultados cruzados apuntan a 10 segmentos adicionales: la población en pobreza (extrema y no extrema), los deciles I al V excepto el II y las regiones Pacífico Central, Huetar Caribe y Huetar Norte.

El Grupo II tiene mejores porcentajes de tenencia, pero siguen habitando viviendas con limitaciones de servicios, construcción o hacinamiento. Aquí se ubican los hogares pertenecientes a los deciles VI y VII, aquellos con jefatura masculina, de zonas urbanas y sin discapacidad.

El Grupo III comprende los segmentos en mejor posición relativa al contabilizar altas tasas de tenencia con elevados niveles de calidad. Se ubican acá los hogares de la región Central, los deciles VIII al X, las jefaturas no migrantes y no pobres así como aquellas cuya cabeza es adulta mayor.

Por último, el Grupo IV tiende a mostrar menor posesión residencial, pero suelen vivir en hogares de mayor calidad. El decil II, las familias con jefatura femenina, aquellas que residen en las regiones Chorotega y Brunca, del sector rural, las jefaturas con discapacidad y las que se encuentran fuera del mercado laboral se clasifican en este segmento.

Gráfico 23

Distribución de los grupos poblacionales según tenencia y calidad de vivienda



Fuente: Elaboración con base en ENAHO 2022.

### Acceso a recursos financieros y disponibilidad de activos

El acceso a los mercados financieros se traduce en la posibilidad de contar con canales proveedores de recursos para adquirir determinados activos (como vivienda), financiar negocios o incrementar el nivel educativo de los hijos e hijas. Cuando los mismos funcionan con imperfecciones, algunos grupos poblacionales podrían tener un muy limitado acceso debido a su mayor riesgo de impago o la ausencia de bienes colaterales para respaldar créditos. Así, se genera una dependencia de la riqueza familiar existente que permite crear más activos y más riqueza, convirtiendo el patrón en un ciclo de acumulación intergeneracional que favorecería a aquellos que hoy día cuenten con alguna ventaja inicial. Si esa base no existe, las posibilidades de que la siguiente generación pueda despegarse de las condiciones que rigen hoy a su familia son bajas y por lo tanto la persistencia intergeneracional se mantendrá.

Diversos estudios han analizado la relación entre acceso financiero y desigualdad. Čihák y Sahay (2020) concluyen que aumentos en la inclusión financiera se asocian con menores niveles de desigualdad especialmente cuando la misma se enfoca en mejorar las condiciones de ese acceso en la población de menores recursos. La desigualdad se reduce a un ritmo más acelerado cuando el acceso mejora más en mujeres que en hombres. Sin embargo, una mayor participación en el

crédito resulta en resultados ambiguos que no necesariamente ratifican una relación negativa con la desigualdad. Delis, Fringuellotti y Ongena (2023) estimaron que aquellas personas dueñas de pequeños negocios cuya aplicación crediticia había sido aprobada mostraban aumentos promedio del 10% en sus ingresos en relación con aquellas cuya solicitud había sido rechazada.

Para analizar algunas consideraciones sobre disponibilidad de activos y posibilidades de acceso a los mercados financieros, el capítulo hace uso de la Encuesta Financiera de Hogares 2022 (EFH-2022) que permite obtener información sobre aspectos de interés como tenencia de activos físicos, tenencia de activos financieros, acceso a créditos y otros temas conexos.

Adicional a la discusión anterior sobre vivienda y rol formador de desarrollo humano, es posible también extender el análisis a consideraciones sobre la vivienda como activo componente del stock de riqueza de la familia. Varios puntos se discuten acá incluyendo tamaño de la residencia, valor estimado de la propiedad, protección con seguro y financiamiento vía crédito hipotecario.

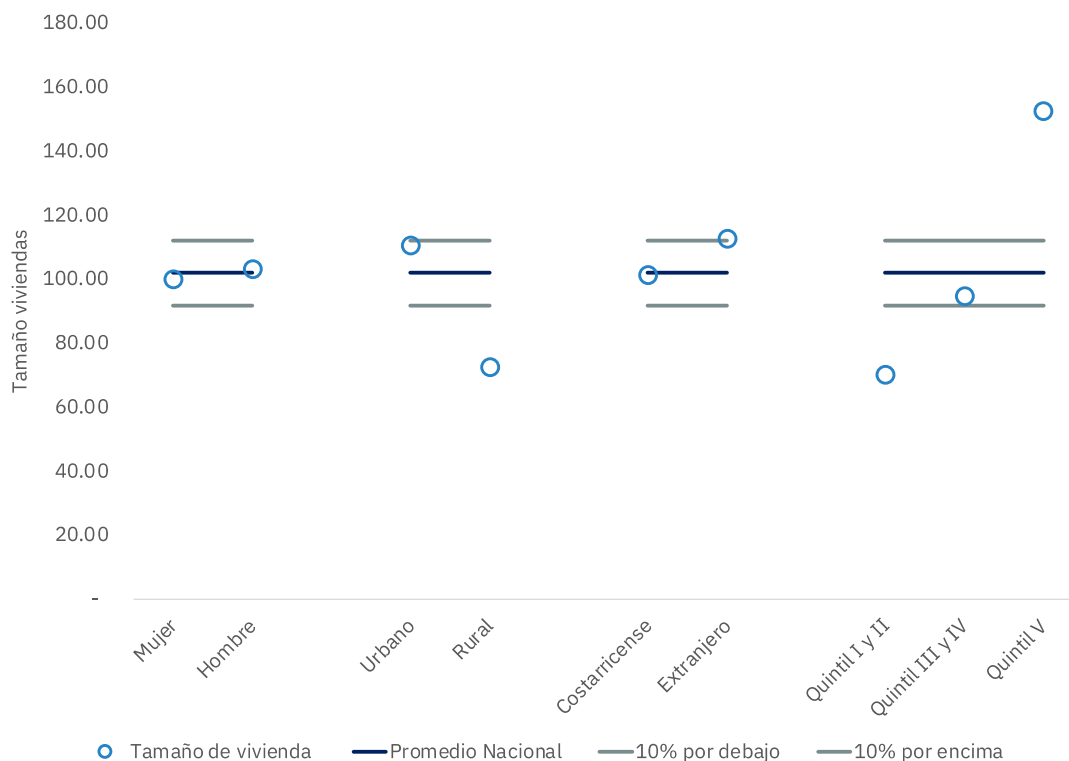
Según dimensiones de tamaño y costo, la casa promedio en Costa Rica mide 102 m<sup>2</sup> y tiene un valor proyectado por sus dueños de ₡48,1 millones. Tal y como es esperable, existe una asociación muy estrecha ( $R^2 = 0,96$ ) entre las dos variables según se detalla en el gráfico 24. Aun así, hay tres aspectos que llaman la atención.

En cuanto al tamaño de las residencias, los grupos analizados pueden estructurarse alrededor de 3 segmentos. Las familias de los quintiles I y II y las residentes rurales suelen vivir en hogares de menos de 73 m<sup>2</sup>, siendo los dos grupos con viviendas más reducidas. En segundo lugar, las familias de los quintiles III y IV, cuyas jefaturas son nacidas en Costa Rica, sin distinguir de sexo, viven en casas cuyos tamaños fluctúan entre los 94 y los 104 m<sup>2</sup>. Finalmente, los hogares con jefaturas de personas nacidas en el extranjero, de residencia urbana y pertenecientes al quintil V, tienen las viviendas más extensas que van entre los 110 m<sup>2</sup> y los 153 m<sup>2</sup>.

En segundo lugar, algunos perfiles rompen con la relación tamaño-costo. Si se compara el tamaño de la propiedad con su potencial valor, entonces dos grupos, familias rurales y las personas extranjeras, parecieran tener activos menos valorizados. Por ejemplo, las residencias de las familias rurales son 3,2% más grandes que aquellas de los quintiles I y II en tanto sus lotes son 55,5% mayores. Sin embargo, el potencial valor de estas (incluyendo terreno) es un 8,4% más bajo. Algo similar se observa entre personas extranjeras, mismas que poseen el segundo tamaño de casa más elevado (112,6 m<sup>2</sup>) con un valor de terreno y vivienda un 24% menor al de familias urbanas, su par más cercano (110,6 m<sup>2</sup>).

Tercero, las brechas entre grupos de la misma característica denotan un panorama variopinto. En cuanto a tamaño de la residencia, las diferencias más marcadas se dan entre grupos socioeconómicos (2,17 veces más grandes las del quintil V) y por zona (1,53 veces en favor de familias urbanas). Por su lado, las diferencias por sexo (1,03 veces) y origen de la jefatura (1,11 veces) son las más reducidas entre los segmentos analizados. Existe un detalle particular que acompaña el análisis de brechas: cuando las distancias se analizan no por tamaño sino por valor de la propiedad, las brechas se amplían. Por ejemplo, en el caso de las brechas por quintil, el costo estimado de sus residencias es 2,58 veces superior al grupo de los quintiles I y II, siendo este valor superior a la diferencia por tamaño. En corto, todos los grupos que hoy llevan ventaja en cuanto al tamaño promedio de su residencia ven incrementar su posición relativa al contar con activos que son más valorizados que aquellos de sus contrapartes.

**Gráfico 24**  
Tamaño de residencia, por característica individual



Fuente: Elaboración con datos de la EFH-2022.

Dos aspectos complementarios profundizan en el análisis en torno a la vivienda. El primero se refiere al porcentaje de viviendas que fue financiada con un crédito hipotecario. Si bien la adquisición de una residencia puede darse por otros mecanismos (herencias, ahorros, etc), la obtención de un crédito para vivienda podría servir como señal de acceso a mercados financieros.

El 29,4% de las viviendas procedentes de la Encuesta fueron adquiridas gracias a un crédito hipotecario. Los grupos poblacionales con menor acceso concuerdan con las conclusiones anteriores en materia de tenencia de vivienda y otras condiciones. En corto, se ubicaron por debajo del promedio nacional los quintiles I y II (12,8%), las familias rurales (13,4), las mujeres (26,5%) y las jefaturas de origen costarricense (29,3%). Por su lado, con acceso intermedio aparecen los hogares de quintiles III y IV, hogares con jefaturas de extranjeros, las jefaturas masculinas y las familias residentes urbanas. Todos estos grupos mostraron tasas de respuesta positiva de entre 30% y 36,2%. Finalmente, cerca del 54,5% de las familias del quintil V adquirió la vivienda vía hipoteca, al menos de forma parcial.

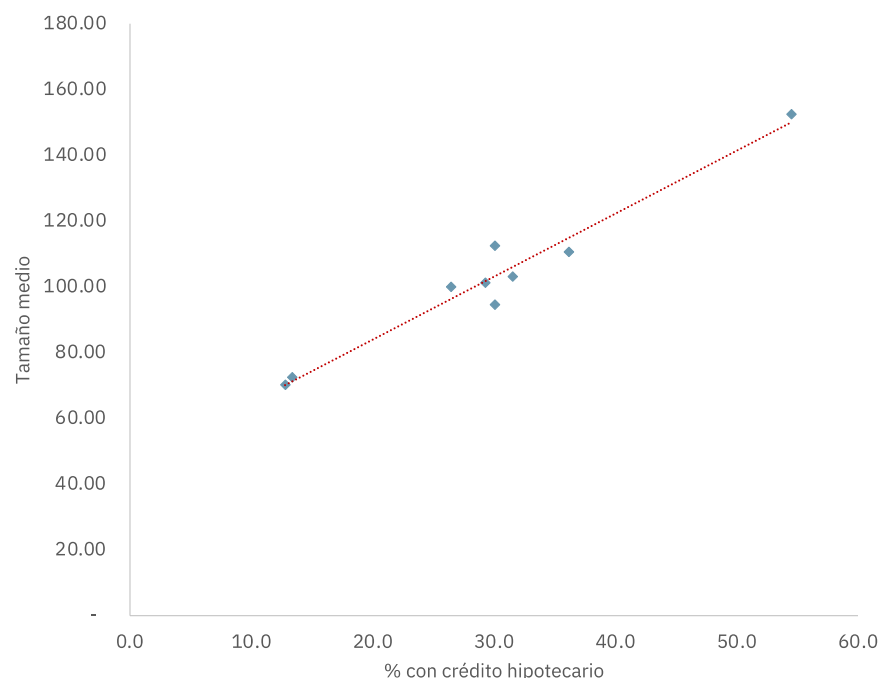
La combinación de resultados muestra un patrón muy cercano entre porcentaje de familias con acceso a crédito y el tamaño de la vivienda, una variable aproximada al valor del activo. La correlación entre ambas ( $R^2 = 0,95$ ) podría sugerir que la forma como se otorga el crédito estaría



favoreciendo la adquisición de activos más valiosos por parte de aquellos grupos que ya de por sí tienen mejor perfil socioeconómico.

### Gráfico 25

#### Correlación entre acceso a crédito y tamaño de la vivienda



Fuente: Estimaciones con base en EFH-2022.

El segundo tema discute la proporción de casas protegidas con un seguro, aspecto que la CAF (2022: 39) contempla en los siguientes términos:

La exposición a choques producto de desastres naturales, enfermedades e inestabilidad macroeconómica puede afectar la acumulación de activos y, en algunos casos, conllevar a situaciones de pobreza. La inestabilidad macroeconómica ha sido frecuente en la región, pero el peso de los desastres naturales como un factor que incrementa la desigualdad podría convertirse en una preocupación central en el futuro...Las familias pobres son más vulnerables a todos estos choques tanto por estar más expuestas como por carecer o tener acceso parcial a mecanismos de aseguramiento. La vulnerabilidad a estos riesgos tiene implicancias sobre la persistencia intergeneracional del bienestar. Sufrir choques puede afectar las transferencias entre padres e hijos, al reducir, por ejemplo, los montos de las herencias, e incluso cambiar la dirección de las transferencias en vida, teniendo que ser los hijos quienes asistan a sus padres, reduciéndose así su capacidad de ahorro.

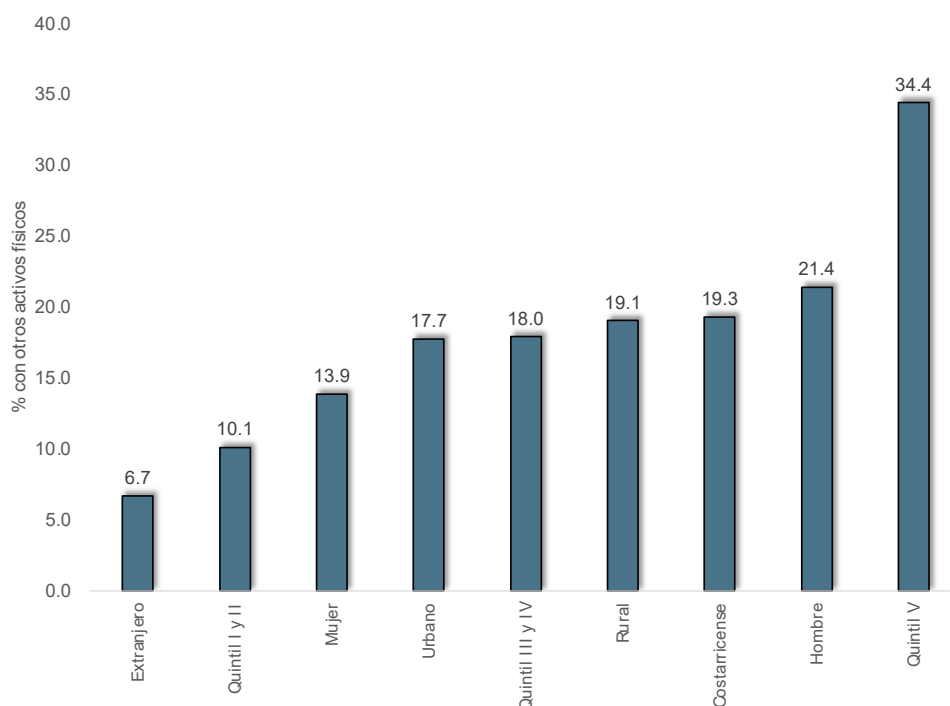
Los datos de la encuesta muestran que, en general, la familia costarricense es poco propensa a adquirir seguros para proteger activos como la vivienda. Únicamente un 4,6% de las personas

entrevistadas manifestó haber comprado un seguro contra siniestros. De los distintos subgrupos, cinco aparecen con porcentajes por debajo de la media nacional, pero es uno (quintiles I y II, con 0,3%) el que se aleja considerablemente de la misma. Con brechas menores, pero con tasas cercanas al 50% del promedio costarricense, aparecen los hogares rurales (2%) y aquellos con jefatura de una persona migrante (2,5%). Las familias del quintil V, de nuevo, son el único segmento con tasas extraordinarias (16,2%) respecto al resto de grupo. Al igual que con las relaciones anteriores, la asociación entre tenencia de seguro y tamaño de la vivienda es positiva y elevada ( $R^2 = 0,81$ ), una indicación que son los activos residenciales más valiosos los que suelen estar más protegidos ante riesgos de diversa naturaleza.

En cuanto a la tenencia de otras propiedades (descartando la vivienda primaria, ya discutida), alrededor del 18% de los hogares poseen al menos una segunda de ellas. Los hogares con menores porcentajes se caracterizan por tener jefatura de persona migrante, de los primeros dos quintiles de ingreso en tanto mujeres, personas residentes urbanas y familias de los quintiles III y IV, si bien también se ubican por debajo de la media nacional, se aproximan a dicho valor. Por otro lado, los grupos con mayor porcentaje de una segunda propiedad son el quintil V (uno de cada tres hogares posee una), las familias con jefatura masculina, particularmente costarricense de nacimiento (uno de cada cinco).

### Gráfico 26

Porcentaje de hogares con una segunda propiedad, por característica de la jefatura



Fuente: Estimaciones con base en EFH-2022.

Si bien un elevado porcentaje de familias posee al menos un activo financiero, la tenencia de los más

En complemento a lo anterior, el análisis explora la tenencia de activos financieros, sean en la forma de cuentas bancarias, certificados de depósito, acciones, fondos, acciones o pensiones, entre otros. En total, el 17,75% de los hogares en Costa Rica no posee ningún tipo de activo financiero. Del 83% restante, un 76% tiene un activo, un 5% tiene 2 y el restante tiene 3 o 4. El activo más común entre los hogares es la cuenta bancaria al existir en un 81% de los hogares (ver cuadro 10). La cuenta bancaria es prácticamente universal en el quintil V (96,4%) en tanto las jefaturas de personas extranjeras (63,6%) y las del quintil I (74,6%) experimentan los menores porcentajes.

Adicional a ello, ninguno de los otros activos contemplados en la encuesta supera 4,1% de tenencia. Los otros dos activos financieros más populares en los hogares son los certificados a plazo (4,1%) y las pensiones voluntarias (2,0%).

Individualmente hablando, llama la atención la situación de algunos sectores poblacionales puntuales. Los quintiles I y II, recurrentemente los segmentos que más rezagan en los distintos indicadores estudiados, refuerzan la idea de vulnerabilidad al contar con sólo un activo, las cuentas bancarias, cuya cobertura alcanza las tres cuartas partes del grupo. Si bien esporádicamente aparecen familias de este quintil con certificados y pensiones voluntarias, su cobertura no alcanza siquiera al 1% de los hogares. Los datos van más allá. De las jefaturas de este conjunto de hogares que poseen cuenta bancaria, el saldo promedio asciende a ₡126 mil colones mientras un 45,8% de esas cuentas tiene cero colones ahorrados.

En el caso de los hogares con jefatura femenina, sus tasas de tenencia de activos financieros son mejores respecto al caso previo si bien tienden a rezagar la condición de las jefaturas masculinas. La tenencia de cuentas bancarias y certificados a plazo son los activos más frecuentes con brechas importantes entre el saldo de cuenta de ahorros en mujeres (₡282 mil) y el de hombres (₡927 mil). Aproximadamente un tercio de las cuentas bancarias en manos de jefas tienen saldo en cero.

Finalmente, las familias rurales muestran las brechas de tenencia más amplias en relación con los hogares urbanos. Esto es particularmente cierto en activos como certificados a plazo, donde las unidades urbanas tienen 7 veces más instrumentos de este tipo y en fondos de inversión, donde el coeficiente es 8,6 veces mayor. 40,3%. En cuanto a cuentas bancarias, un 80,2% de los hogares tiene una de ellas. El saldo promedio en hogares rurales es de ₡496,000 con un 40,3% teniendo saldo cero. En contraste, las familias urbanas mantienen saldos promedio de ₡707,000 con un 28% no teniendo fondos.

Cuadro 9

Porcentaje de hogares que poseen activos financieros, por tipo de activo y condición de la jefatura

Grupo	Cuenta bancaria		Fondos de inversión		Pensiones voluntarias	Dinero prestado	Otros activos financieros
		CDP		Acciones			
Hombre	83,4%	4,5%	1,2%	0,6%	2,6%	0,3%	0,2%
Mujer	80,6%	3,3%	0,6%	0,1%	1,1%	0,4%	0,3%
Urbano	82,9%	5,2%	1,3%	0,4%	2,3%	0,5%	0,3%
Rural	80,2%	0,7%	0,1%	0,1%	0,8%	0,1%	0,0%
Nacional	84,1%	4,2%	1,0%	0,4%	2,1%	0,4%	0,2%
Extranjero	63,6%	1,7%	0,8%	0,3%	0,5%	0,6%	0,5%
Quintil I y II	74,6%	0,7%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
Quintil III y IV	82,7%	2,1%	0,2%	0,0%	1,0%	0,5%	0,3%
Quintil V	96,4%	14,2%	4,5%	1,8%	7,4%	0,9%	0,7%

Fuente: Estimaciones con base en EFH-2022.

Finalmente, el análisis valora de forma integral la tenencia de activos físicos (propiedades, vehículos, etc) y de activos financieros en un enfoque conjunto. Los datos del cuadro 11 muestran que un 5,4% de los hogares nacionales no tiene activos de ninguna naturaleza. A eso se le suma un 13% de hogares donde sólo existe un activo financiero, el cual usualmente es una cuenta bancaria. Por el contrario, casi las dos terceras partes de las familias tienen un activo físico y uno financiero.

Cuadro 10

Distribución de hogares por tenencia de activos financieros y físicos

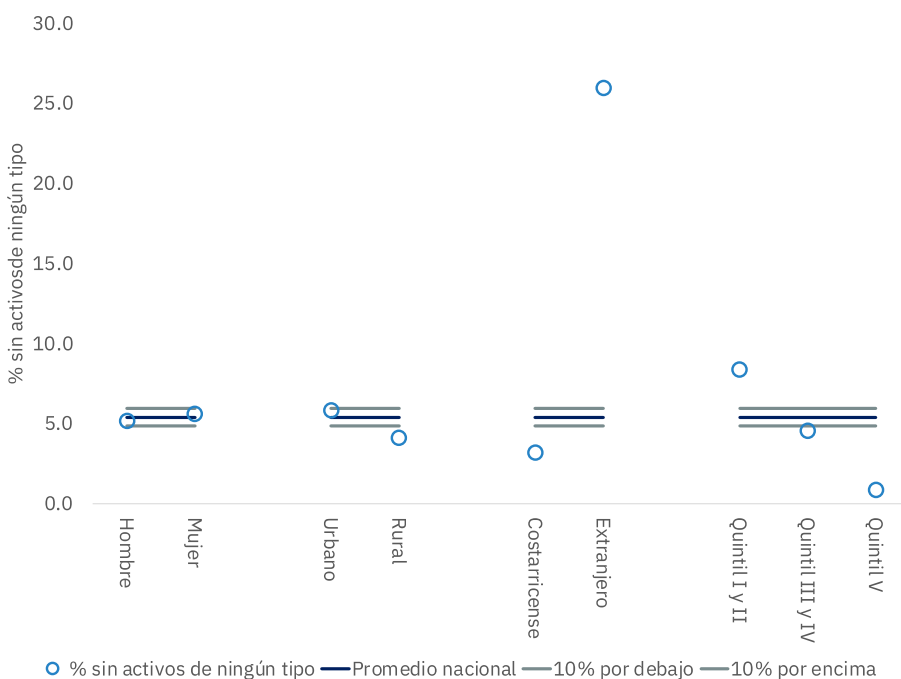
Tenencia de activos físicos	Número de activos financieros				
	0	1	2	3	4
No	5,4	12,9	0,3	0,1	0,0
SI	12,4	63,2	4,7	0,8	0,3

Fuente: estimaciones con base en EFH-2022

Por último, cabe mencionar que son las personas extranjeras las más vulnerables desde la óptica de tenencia de activos. En contraste al 5,4% de hogares sin activos mencionado anteriormente, un 26% de las familias con jefatura migrante no posee respaldo alguno de ningún tipo. Los dos quintiles de menor ingreso, como se ha presentado antes, son otro de los grupos más vulnerables a shocks con un 8,4% de los mismos sin activos.

Gráfico 27

Porcentaje de hogares sin activos físicos ni financieros, por característica de la jefatura



Fuente: estimaciones con base en EFH-2022.

## Política pública y desigualdad

Tras el contrato social de los años 40, Costa Rica se ha caracterizado por la implementación de políticas públicas y políticas sociales que le hacen destacar con logros en salud, educación, y la inversión del gasto social en programas sociales.

Sin embargo, y pese a estos esfuerzos históricos ampliamente reconocidos, en el documento denominado Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica 2017, señala que: “(...) A pesar de recientes mejorías, la desigualdad y la pobreza siguen siendo altas y los mecanismos de redistribución han sido demasiado débiles para reducirlas adecuadamente (...) (p.9).

Son las políticas públicas un mecanismo de aspiración universal y son las políticas sociales un vehículo para acercar a las personas más desprotegidas a condiciones igualitarias y equitativas. Sin embargo, estas políticas no siempre suelen ser tan eficientes para atender las desigualdades multidimensionales: lo rural y lo urbano, el ciclo de la vida, son un retrato de ello.

### Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil: barreras institucionales y los problemas de su universalización.

El programa de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil -REDCUDI- nace bajo la administración Chinchilla Miranda en el periodo 2010-2014 al aprobarse la Ley 9220 (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil). El mismo tiene corte universal y de naturaleza solidaria en el grupo de 0 a 12 años. tuvo su génesis en un doble propósito: el de promover el desarrollo

infantil y el de incorporar a más mujeres al mercado de trabajo. Existe sólida evidencia sobre la relación entre ambos elementos y de su potencial para incidir en la reducción de la desigualdad presente y futura. En el Informe Económico para Costa Rica, la OCDE (2018: 9) ha indicado contundentemente que “la medida más efectiva que Costa Rica puede adoptar para poner un alto a la creciente desigualdad y dar a cada niño una oportunidad justa de tener éxito en cuanto aprendizaje y vida es priorizar la expansión de la Atención y la Educación en la Primera Infancia (EAPI)”.

La REDCUDI busca favorecer el cumplimiento de los objetivos plasmados en la Política de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018 – 2030, particularmente los relacionados con el Nudo 2 “División sexual del trabajo e injusta distribución del cuidado”. Como indica esta política pública, “la corresponsabilidad social de los cuidados es una tarea pendiente, pues el recargo en las mujeres les afecta de manera negativa al limitar su tiempo, ampliar su jornada laboral, impactar su salud física y psicológica, y limitar sus posibilidades de estudio y empleo, entre otras cosas” (Política Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018 - 2030, 2018, p.29).

Mediante Decreto Ejecutivo N° 41584-MTSS-MCD-MCND Creación de la Comisión interinstitucional para la promoción de la corresponsabilidad social en la crianza de las y los menores de edad”, considerando IV, se señaló lo siguiente:

*“(...) Atendiendo al interés superior del menor de edad, el Estado está llamado a promover todos aquellos mecanismos que fortalezcan la crianza del hijo o la hija de los padres que trabajan, de tal manera que cuenten con espacios que permitan velar por el cuidado del menor de edad”.*

Además, son parte de la REDCUDI los Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral del Patronato Nacional de la Infancia y el Programa de Atención y Promoción Infantil de la Dirección Nacional de CEN-CINAI. Según la ENAHO 2022, la población meta se estima en 797,954 menores de 13 años a las cuales debe sumarse la demanda de la población con discapacidad menor de 18 años incluida en la reforma de Ley.

Para dar cumplimiento al cometido, en primera instancia la Ley N° 9220 del 2011 destina un 4% de todos los recursos del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares al presupuesto ordinario del Instituto Mixto de Ayuda Social. Tras dos reformas a la Ley N°9220, la ley N° 9941 y Ley N°10038, ambas correspondientes al año 2021, la REDCUDI obtiene financiamiento adicional proveniente del veinte por ciento (20%) del total de los recursos asignados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por concepto de impuesto sobre la renta, la totalidad del superávit libre acumulado del ejercicio económico tras anterior del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), registrado en la liquidación presupuestaria y el cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del superávit libre acumulado del ejercicio económico tras anterior del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), registrado en la liquidación presupuestaria.

Para el año 2022, el informe de ejecución presupuestaria y población beneficiaria del Programa de Protección y Promoción Social del IMAS estimó en 30,360 hogares beneficiados con servicios de cuidado. A eso debe añadirse la población beneficiaria de las otras dos instancias. En total, se calcula en unas 70 mil las niñas y niños beneficiarias de la REDCUDI, cifra que correspondería a

un 8,8% de la población meta, aproximadamente. Esta cobertura se encuentra aún lejos de la universalidad. En total, la ejecución presupuestaria en el año 2022 fue de ₡69,494.1 millones.

### ¿Qué barreras dificultan la universalización de la cobertura de la Red?

La imposibilidad de haber alcanzado hoy, 9 años después de aprobada la legislación respectiva, el objetivo de universalizar los servicios de cuidado a toda la población meta, requiere de una valoración que permita identificar las distintas barreras que podrían afectar la consecución de esta meta.

Una primera barrera tiene **naturaleza legal**. De modo general toda la legislación de la Red, en su carácter afirmativo, enfatiza su carácter universal, de acceso público y solidario y además promueve la corresponsabilidad social de los cuidados mediante la participación de diversos actores. El problema ha sido que, de una u otra forma, el programa se ha quedado en el grupo focalizado llegando a los hogares con mayores niveles de pobreza y exclusión, y en menos medida a los hogares en vulnerabilidad socioeconómica.

Este patrón tiene una estrecha relación con la naturaleza del financiamiento histórico de la Red y con una contradicción interna creada por la misma ley. Por un lado, la normativa establece cobertura universal para el grupo de menores, según fue comentado. Por el otro, el financiamiento provino, durante muchos años, de los recursos de FODESAF, mismos que sólo pueden ser utilizados para apoyar acciones de lucha contra la pobreza. Por lo tanto, en ese sentido, toda persona menor de edad potencialmente beneficiaria de la Red no tendría una fuente de financiamiento estable y por lo tanto la posibilidad de aumentar la cobertura en estos segmentos poblacionales queda limitada a decisiones políticas. Se espera que con la reforma al financiamiento del PANI en el 2021, esta situación se modifique parcialmente y permita la implementación de modelos de copago (cofinanciamiento) para beneficiar familias de ingresos medios o más. Sin embargo, aun con las reformas contempladas, la legislación vigente no crea suficientes recursos para universalizar los servicios sea con subsidios totales o parciales.

A lo anterior se le une un problema de naturaleza **institucional** y una barrera financiera extra. Primero, los cambios al financiamiento de la Red deben ser normados dado que el reglamento actual y vigente data del año 2019, mismo que no incluye a la población con discapacidad menor de 18 años de edad.

En materia **financiera**, a la fecha no se cuenta con evidencia de contar con este financiamiento adicional, mismo que podría verse comprometido tras la implementación de la Ley N°9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, situación que podría comprometer el aumento de la cobertura de niños y niñas beneficiarios.

Otra situación que afecta a las familias es que los servicios de cuidado carecen de opciones que se ajusten a las diversas necesidades de los hogares que lo demandan, puntualmente sobre la disponibilidad de establecimientos y la flexibilidad de horarios en jornadas ampliadas o nocturnas, en mayor medida sobre esta última. Esta barrera organizacional es clave en la exclusión de una cantidad importante de posibles personas beneficiarias. Para el país, se constituye en un reto la universalización progresiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, bajo un enfoque de género y corresponsabilidad social, según lo indica el Informe Económico para Costa Rica:

“La mayoría de las mujeres que se ubican en primeros tres quintiles de ingresos, indican que las responsabilidades de cuidado de familiares representan un obstáculo para el trabajo, con frecuencia no tienen acceso a los servicios de atención pública, y es poco probable que puedan pagar servicios de atención privada. La introducción de un mecanismo de cobro con base en los ingresos, similares a los que existen en Francia o Noruega, podría permitir a los padres acceder a los servicios de atención a un menor costo y al mismo tiempo aumentar los ingresos no gubernamentales para la ampliación de los programas de EAPI, pero debería ser administrado con cuidado para asegurar que los cobros no estén basados en la capacidad de pago y no constituyan una barrera para el acceso (2018).”

Existen otras barreras de tipo institucional que podrían afectar los avances en materia de cobertura. La reglamentación de ciertos procesos ilustra esta situación. Por ejemplo, la indicación de la Contraloría General de la República en su Informe Nro. DFOE-SOC-IF-18-2015 (2015), señala el riesgo de generar un círculo vicioso para las familias beneficiarias de la REDCUDI una vez que son mejoradas sus condiciones socioeconómicas, debido a que estas condiciones de mayor bienestar podría excluirlas del beneficio otorgado por este programa, retornándolas a su punto de origen.

A manera de cierre, es posible identificar otras 3 grandes limitaciones que generan desigualdad en el acceso de los servicios de cuidado según se extrae de la legislación vigente:

**Gobernanza:** la REDCUDI se constituye a partir de programas o subsidios de tres diferentes instituciones, cada una de ellas con legislación disímil, lo que impacta en la calidad, el acceso, la cobertura y la oferta estatal que se brinda. La ley no establece una figura única que se encargue de homologar y regular la prestación de estos servicios.

**Calidad de los servicios:** cada una de las instituciones regula la operación de la subvención estatal, mediante subsidios, convenios o prestación directa de los servicios. Este aspecto se traduce en variedad de alternativas de atención que no cuentan con una normativa única para la prestación de sus servicios. Otro aspecto importante en temas de calidad es notar la deficiencia en la infraestructura, los aspectos culturales, los servicios profesionales y el equipamiento de los centros, situación que no se encuentra normada en la ley N°9220 y sus reformas y sí medianamente en la Ley General de Centros de Atención Integral N°8017. Además, es importante considerar las necesidades específicas de la población con discapacidad de 18 años que requieren de servicios y atenciones particulares para su cuidado.

**Corresponsabilidad:** La ausencia del cumplimiento de la ley en cuanto a la promoción de la corresponsabilidad del cuidado representa también un obstáculo importante para aquellos hogares trabajadores y podría propiciar incremento en la tasa de desalentados para el país. El costo del servicio puede representar un obstáculo para una parte importante de los hogares, ya que los servicios suelen ser costosos y mucho más cuando las familias no pueden ser cubiertas por mecanismos de subvención estatal.



## **La Caja Costarricense del Seguro Social: asignación presupuestaria y necesidades sanitarias**

El financiamiento de la salud de un país puede visualizarse como un proceso que comprende tres grandes momentos: la recaudación, la mancomunación de fondos y los mecanismos de asignación de recursos. Todos, de una forma u otra, ejercen influencia sobre aspectos claves del sector en términos de acceso, eficiencia y como el acceso a los servicios, la equidad del financiamiento y la eficiencia de las actividades y todos requieren apuntar hacia los mismos objetivos en aras de fortalecer el impacto sobre la condición sanitaria de la población.

En Costa Rica, el financiamiento mayoritario proviene de fuentes públicas. Según el Informe de cuentas de salud de Costa Rica, 2017-2019 (OPS-MS, 2022), un 74% del gasto tiene origen público, especialmente bajo el esquema de contribuciones a la seguridad social (seguro de salud). En los años previos a la llegada del COVID-19, el gasto corriente sanitario creció del 7,0% (2017) al 7,6% (2019) producto especialmente de un aumento del gasto corriente público del 5,3% al 5,6%.

Si bien la inversión en el sector es elevada y cercana a las recomendaciones internacionales del 6% del PIB, lo cierto es que aún persisten una serie de retos en materia de eficiencia, cobertura, calidad y acceso. Por ejemplo, sólo un 63% de la población costarricense se encuentra satisfecha con la disponibilidad de servicios de salud en tanto las listas de espera se estimaron en abril del 2023, sólo para cirugía, en 175,630 personas que esperaban un promedio de 533 días.

En vista de lo anterior, resulta claro que la mejora en la provisión y acceso de servicios médicos pasa tanto por una adecuada recaudación como por el establecimiento de mecanismos de presupuestación y ejecución de recursos que permitan hacer llegar los fondos a las poblaciones con necesidad epidemiológica al tiempo que el presupuesto se transforma en servicios concretos.

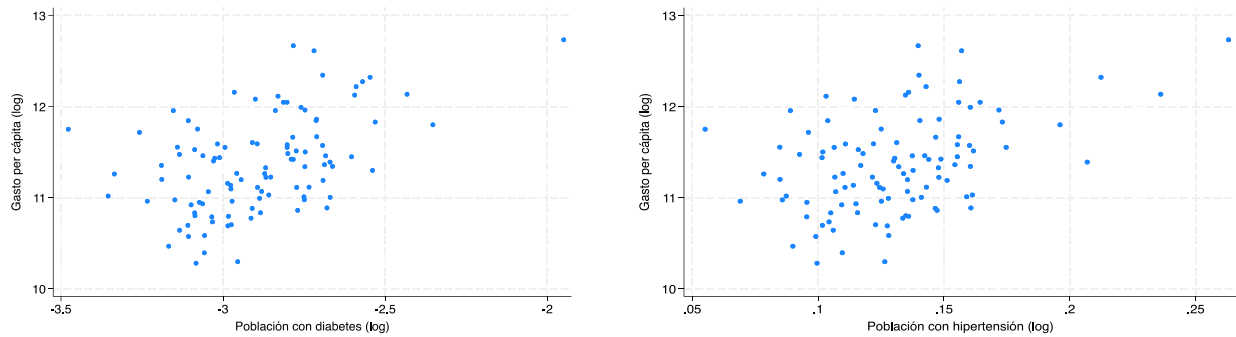
El modelo presupuestario seguido por la CCSS responde al llamado modelo “inflacionario” o “histórico”, mismo que se estima con base en los recursos humanos y materiales con que disponga cada Área de Salud, desligándose por lo general de la producción requerida. Por su lado, los presupuestos basados en necesidades toman como punto de referencia el perfil epidemiológico poblacional y derivan del mismo una serie de actividades clínicas y no clínicas necesarias para atender tales necesidades. Así las cosas, debería existir una relación positiva entre necesidades sanitarias y asignación de recursos de forma tal que los sitios con mayores incidencias de enfermedad recibirían mayores presupuestos.

Los gráficos a continuación ilustran la relación entre necesidades sanitarias y asignación presupuestaria por Área de Salud, según estructura territorial de la CCSS. Las necesidades se han aproximado en términos del porcentaje de población con diabetes y con hipertensión que se cruzan con los presupuestos por persona.

Dos aspectos merecen ser considerados. La primera es que, en efecto, existe para este caso una relación positiva entre la prevalencia de diabetes (correlación = 0,547) e hipertensión (correlación = 0,453) y la asignación de recursos. Así las cosas, la fórmula asignativa utilizada por la CCSS pareciera estar diseñada de forma tal que favorece aquellas Áreas con mayor prevalencia de enfermedades crónicas.

Esta conclusión, sin embargo, adolece de un problema específico: Áreas de Salud con las mismas tasas de diabetes o hipertensión podrían estar recibiendo distintos montos. He acá un elemento **propiciador de desigualdad**. Por ejemplo, las Áreas de Salud de Santa Rosa y Escazú tienen ambas las mismas tasas de diabetes (4,35% de sus respectivas poblaciones). No obstante, mientras la primera recibe ₡96,268 por persona, la segunda recibió ₡41,877 en el 2022. Este resultado debería ser sujeto de valoraciones más puntuales por cuanto la diferencia entre los presupuestos podría estar siendo explicada por mayores tasas de otras enfermedades en Escazú.

Gráfico 28  
Correlación entre gasto per cápita y enfermedades crónicas, 2022



Fuente: Elaboración con base en datos de la CCSS.

## Anexos

### Anexo 1. Distribución de cantones por aglomerado

Clúster 1	Clúster 2	Clúster 3	Clúster 4	Clúster 5
San Isidro	Parrita	Acosta	Guatuso	Talamanca
Flores	Montes de Oro	Puriscal	Osa	La Cruz
Escazú	Sarchí	Alajuelita	Upala	Corredores
Desamparados	Turrubares	San Ramón	Coto Brus	Golfito
Heredia	Garabito	Quepos	Buenos Aires	Los Chiles
San José	Paraíso	Turrialba	Santa Cruz	Matina
Palmares	León Cortés Castro	Carrillo		Bagaces
Vázquez de Coronado	Barva	Esparza		Sarapiquí
Moravia	San Carlos	Abangares		Siquirres
La Unión	Grecia	Nandayure		Limón
Curridabat	Tarrazú	Tilarán		
Alajuela	Jiménez	Liberia		
Montes de Oca	Santa Ana	Puntarenas		
Goicoechea	Cartago	Mora		
San Rafael	Aserri	Río Cuarto		
San Pablo	Guácimo	Pococí		
Tibás	Poás	Oreamuno		
Belén	Hojancha	San Mateo		
Santa Bárbara	Naranjo	Pérez Zeledón		
Santo Domingo	El Guarco	Nicoya		
	Orotina	Alvarado		
	Atenas			
	Dota			
	Cañas			
	Zarcelero			

Anexo 2

Matriz de transición de nivel de instrucción alcanzado

Progenitores	Descendientes								
	Sin nivel de instrucción	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria académica incompleta	Secundaria académica completa	Secundaria técnica incompleta	Secundaria técnica completa	Educación superior de pregrado y grado	Educación superior de posgrado
Sin nivel de instrucción	3,353	4,029	6,025	3,721	4,428	149	306	570	166
Primaria incompleta	5,976	12,610	27,876	22,622	21,606	275	1,692	13,132	339
Primaria completa	4,274	7,131	36,746	41,627	51,403	482	5,386	45,050	2,090
Secundaria académica incompleta	1,379	1,276	6,093	17,081	21,162	0	3,123	28,511	1,306
Secundaria académica completa	691	271	4,043	9,181	21,347	0	1,610	24,886	1,345
Secundaria técnica incompleta	0	0	306	0	187	0	0	0	0
Secundaria técnica completa	0	0	0	1,642	1,359	0	917	4,485	219
Educación superior de pregrado y grado	849	0	1,560	6,103	11,483	0	0	47,712	3,568
Educación superior de posgrado	0	0	0	202	972	0	0	9,351	1,469

## Referencias

- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2013) *Democracy, redistribution, and inequality*. Working Paper 19746 National Bureau of Economic Research
- Adler NE., Stewart J. y otros (2007). Reaching for a healthier life: facts on socioeconomic status and health in the US. MacArthur Foundation Research Network. Socioeconomic Status and Health; 2007. P. 43.
- Afonso, H., LaFleur, M., & Alarcón, D. (2015) *Concepts of Inequality: Development Issues No. 1. New York, USA: Development Strategy and Policy Analysis Unit in Development Policy and Analysis Division, UN/DESA*. Recuperado de: [https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess\\_dev\\_issues/dsp\\_policy\\_01.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_dev_issues/dsp_policy_01.pdf)
- Allin, S., Mossialos, E. y otros (2004). Making decisions on public health: a review of eight countries. European Observatory on Health Systems and Policies.
- Amarante, V., & Jiménez, J. P. (2016). Income distribution and the imposition of high taxes in Latin America. *Cuadernos de Economía*, 35(67), 39-73.
- Anderson, E., d'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018) *Does government spending affect income poverty? A meta-regression analysis*. *World Development*, 103, 60–71. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Anderson, Tim. (2014) *Why Inequality Matters*. Recuperado de: [https://www.researchgate.net/publication/268139069\\_Why\\_Inequality\\_Matters](https://www.researchgate.net/publication/268139069_Why_Inequality_Matters)
- Andreoli, F., & Zoli, C. (2020) *From unidimensional to multidimensional inequality: a review*. *Metron*, 78(1), 5–42. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s40300-020-00168-4>
- Antonio Favila Tello, José César Lenin Navarro Chávez (2017). Desigualdad educativa y su relación con la distribución del ingreso en los estados mexicanos. *Revista de Investigación Educativa* enero-junio, 2017.
- Arcaya MC, Arcaya AL, Subramanian SV. (2015) Inequalities in health: definitions, concepts, and theories. *Glob Health Action*. 2015;8:27106 – <http://dx.doi.org/10.3402/gha.v8.27106>.
- Arce, F. P., de Lima Amaral, E. F., Price, C. C., & Huang, H. (2016) *Inequality and Opportunity: The Relationship Between Income Inequality and Intergenerational Transmission of Income*. RAND.
- Arias Ramírez, R., & Sánchez Hernández, L. (2012) *Análisis de la desigualdad socioeconómica en Costa Rica por criterio territorial*. Recuperado de: <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/363>
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, No 9220. San José: Gobierno de la República.
- Atkinson, A. B., Piketty, T., & Saez, E. (2011) *Top incomes in the Long Run of history*. *Journal of Economic Literature*, 49(1), 3–71. Recuperado de: <https://doi.org/10.1257/jel.49.1.3>
- Barreto, M. (2017). Desigualdades en Salud: una perspectiva global. *Revista Ciência & Saúde Coletiva*, 22(7):2097-2108.

- Barros, J. D. A. (2018) *Equality and difference: a conceptual discussion mediated by the counterpoint of inequalities*. Revista Brasileira de Educação, 23. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/275/27554785076/27554785076.pdf>
- Becerril Montekio V., Medina G., Aquino R. (2011). Sistema de salud de Brasil. Revista Salud Pública México, 2011; 53 supl 2:S120-S131
- Becker, G. S., & Tomes, N. (1979) *An equilibrium theory of the distribution of income and intergenerational mobility*. The journal of political economy, 87(6), 1153–1189. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/1833328>
- Becker, G. S., & Tomes, N. (1986) *Human capital and the rise and fall of families*. Journal of labor economics, 4(3), S1–S39. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/2534952>
- Benhabib, J., Bisin, A., & Jackson, M. O. (Eds.). (2010) *Handbook of social economics*. Elsevier.
- Berman, Y. (2022) *Absolute intragenerational mobility in the United States, 1962–2014*. Journal of Economic Inequality, 20(3), 587–609. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s10888-022-09529-7>
- Berniell, L., De La Mata, D., Schargrotsky, E., Alves, G., Ferreira, F., & Álvarez, F. (2022) *Desigualdades heredadas. El rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones*. Resumen Ejecutivo
- Bilal, U. (2021). COVID-19 en Estados Unidos: la desigualdad social como causa y consecuencia. Revista De Medicina Y Cine, 16(e), 105–117. <https://doi.org/10.14201/rmc202016e105117>
- Blanchet, T., Fournier, J., & Piketty, T. (2022) *Generalized Pareto curves: theory and applications*. Review of Income and Wealth, 68(1), 263-288. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/roiw.12510>
- Blanden, J., Doepke, M., & Stuhler, J. (2022) *Educational Inequality*. National Bureau of Economic Research. Recuperado de: [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w29979/w29979.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29979/w29979.pdf)
- Borrella, C. y Artazcoza, L. (2008). Las políticas para disminuir las desigualdades en salud. Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud. Barcelona, España.
- Bova, D. M. (2020) *Intergenerational equity and transitional inequality measurement: techniques and empirics*. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 129-129. Recuperado de: <https://www.ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/article/download/1015/1005>
- Bova, D. M. (2020) *Intergenerational Equity and Transitional Inequality Measurement: Techniques and Empirics*. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 129. Recuperado de: <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p129>
- Bradbury, K., & Triest, R. K. (2016) *Introduction: Inequality of economic opportunity*. The Russell Sage Foundation journal of the social sciences: RSF, 2(2), 1. Recuperado de: <https://doi.org/10.7758/rsf.2016.2.2.01>

- Brubaker, R. (2015) *Difference and inequality*. *Grounds for difference*, 1, 11-47. Recuperado de: [https://www.academia.edu/download/64145661/GFD%201%20Difference%20and%20Inequality%20final%20pre-publication%20\(1\).pdf](https://www.academia.edu/download/64145661/GFD%201%20Difference%20and%20Inequality%20final%20pre-publication%20(1).pdf)
- Bruno Sobral de Carvalho y Baldur Schubert (2013). El sistema único de salud del Brasil, público, universal y gratuito: su regulación y control en el contexto de la salud suplementaria. *Monitor Estratégico*. Superintendencia Nacional de Salud. Enero 2013
- Brunori P, Palmisano F & Peragine V (2019) *Inequality of opportunity in sub-Saharan Africa*, *Applied Economics*, DOI: 10.1080/00036846.2019.1619018 Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1619018>
- Brunori, P., Ferreira, F. H., & Peragine, V. (2013) *Inequality of opportunity, income inequality, and economic mobility: Some international comparisons*. In *Getting development right: Structural transformation, inclusion, and sustainability in the post-crisis era* (pp. 85-115). New York: Palgrave Macmillan US. Recuperado de: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/69406/1/735486352.pdf>
- Bui, T. K. T., & Erreygers, G. (2020) *Multidimensional inequality in Vietnam, 2002–2012*. *Economies*, 8(2), 29. Recuperado de: <https://www.mdpi.com/2227-7099/8/2/29/pdf>
- Bull, B. (2019) *Combating Inequality: Is There a “Scandinavian Way” to Reduce Inequality in Latin America?*. *Iberoamericana*. *Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 48(1), pp. 53–66. Recuperado de: <https://doi.org/10.16993/iberoamericana.454>
- Bull, B. (2019). *Combating Inequality: Is There a “Scandinavian Way” to Reduce Inequality in Latin America?* *Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 48(1), pp. 53–66. DOI: <https://doi.org/10.16993/iberoamericana.454>
- Burchardt, Tania & Hick, Rod. (2017) *Inequality and the Capability Approach*. DOI:10.13140/RG.2.2.16706.07360
- Busso, M. y Messina, J. (2020) *La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada*. Banco Interamericano de Desarrollo. Monografías del BID; 837.
- Busso, M., & Messina, J. (2020) *La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada*. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/La-crisis-de-la-desigualdad-America-Latina-y-el-Caribe-en-la-encrucijada.pdf>
- Buttrick, N. R., & Oishi, S. (2017) *The psychological consequences of income inequality*. *Social and Personality Psychology Compass*, 11(3), e12304.
- Cappelari, L., & Milano, U. C. (2016) *Income inequality and social origins*. *IZA world of labor: evidence-based policy making*. Recuperado de: <https://doi.org/10.15185/izawol.261>
- Cecchini, S., y Atuesta, B. (2017). *Programas de Transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe: tendencias de cobertura e inversión*. Repositorio Digital. CEPAL.
- CEPAL (2016). *La matriz de desigualdad social en América Latina*. I Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Noviembre de 2016

- CEPAL (2017) Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Publicación de las Naciones Unidas.
- CEPAL (2018) Herramientas para el análisis de las desigualdades y del efecto redistributivo de las políticas públicas. Publicación de las Naciones Unidas.
- CEPAL (2018) Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Publicación de las Naciones Unidas.
- Cerezo García, V., & Landa Díaz, H. O. (2020). Crecimiento económico y desigualdad en Asia, Europa y América Latina, 1990-2019. *Investigación Económica*, 80(315), 59-80. <https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2021.315.77565>
- Chakravarty, S. R., & Lugo, M. A. (2019) *Multidimensional indicators of inequality and poverty*. *Poverty, Social Exclusion and Stochastic Dominance*, 223-259. Recuperado de: <https://web.law.duke.edu/sites/default/files/centers/clepp/Chakravarty-Lugo%20sept-2014.docx>
- Chancel L., Bothe P., Voituriez T. (2023) *Climate Inequality Report 2023*. World Inequality Lab Study 2023/1. Recuperado de: <https://wid.world/wp-content/uploads/2023/01/CBV2023-ClimateInequalityReport-3.pdf>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (Eds.). (2022) *World inequality report 2022*. Harvard University Press. Recuperado de: <https://wir2022.wid.world/download/>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. (2022) *World Inequality Report 2022*, World Inequality Lab. Recuperado de: <https://wir2022.wid.world/>
- Checchi, D., & Peragine, V. (2010) *Inequality of opportunity in Italy*. *The Journal of Economic Inequality*, 8, 429-450.
- Cheteni, P. (2019) *Explaining levels of between-group and within-group inequality and poverty in South Africa*. *Cogent Economics & Finance*, 7(1), 1698266. Recuperado de: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23322039.2019.1698266>
- Chyn, E., & Katz, L. F. (2021) *Neighborhoods matter: Assessing the evidence for place effects*. *Journal of Economic Perspectives*, 35(4), 197-222. Recuperado de: <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.35.4.197>
- Clark, D. (2005) *The Capability Approach: Its Development, Critiques and Recent Advances* GPRG-WPS-032. *Development Studies*, Band. 2. Recuperado de: [https://base.socioeco.org/docs/developments\\_critiques\\_advances.pdf](https://base.socioeco.org/docs/developments_critiques_advances.pdf)
- Colagrossi, M., Geraci, A., & Mazzarella, G. (2023) *Intergenerational mobility in the Netherlands: models, outcomes and trends*. *Journal of Economic Inequality*. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s10888-023-09569-7>
- Comisión Europea (2017). Lucha contra las desigualdades. Ficha temática del semestre europeo. Tomado de [https://commission.europa.eu/system/files/2018-06/european-semester\\_thematic-factsheet\\_addressing-inequalities\\_es.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2018-06/european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_es.pdf)



- Constantine, C. (2022) *Income Inequality in Guyana: Class or Ethnicity? New Evidence from Survey Data*. ECINEQ (No. 631). Recuperado de: <http://www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2022-631.pdf>
- Contraloría General de la República (2015). Informe Nro. DFOE-SOC-IF-18-2015, Auditoría de Carácter Especial sobre la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. San José: Contraloría General de la República.
- Corak, M. (2013) *Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility*. Journal of Economic Perspectives, 27(3), 79-102. Recuperado de: [https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.27.3.79?mod=article\\_inline](https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.27.3.79?mod=article_inline)
- Cowell, F. A., & Flachaire, E. (2022) *Inequality measurement: Methods and data*. In *Handbook of labor, human resources and population economics* (pp. 1-46). Cham: Springer International Publishing.
- de Farias Souza, W. P. S., & Cláudia, A. (2017) *Consideraciones sobre la desigualdad de oportunidades: nueva evidencia*. Revista de la CEPAL N° 121 Abril de 2017. Recuperado de: [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41150/REV121\\_Souza.pdf?sequence=1](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41150/REV121_Souza.pdf?sequence=1)
- De La Mata, D., Berniell, L., Schargrotsky, E., Álvarez, F., & Alves, G. (2022) *Desigualdades heredadas. El rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones, Resumen Ejecutivo*. Reporte de economía y desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Recuperado de: <https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1981/RED2022%20-%20Resumen%20Ejecutivo.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Deaton, A. (1999) *Inequalities in income and inequalities in health*. Recuperado de: [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w7141/w7141.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7141/w7141.pdf)
- del Castillo Negrete, M. (2022) *La distribución del ingreso y la riqueza: Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas*. Síntesis (No. 48636). Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Dickman SL, Himmelstein DU, Woolhandler S. (2017). Inequality and the health-care system in the USA. *Lancet*. 2017 Apr 8;389(10077):1431-1441. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30398-7.
- Doerrenberg ,P., Peichl A. (2014) *The impact of redistributive policies on inequality in OECD countries*. ZEW Discussion Papers, No. 14-012. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim. Recuperado de: <https://nbnresolving.de/urn:nbn:de:bsz:180-madoc-35932>
- Doris Cardona, Laura Acosta y otros (2011). *Inequidades en salud entre países de Latinoamérica y el Caribe (2005-2010)*. Grupo de Investigación Observatorio de la Salud Pública, Universidad CES, Medellín, Colombia.

- Duncan, G. J., & Murnane, R. J. (2016) *Rising inequality in family incomes and children's educational outcomes*. The Russell Sage Foundation journal of the social sciences: RSF, 2(2), 142. Recuperado de: <https://doi.org/10.7758/rsf.2016.2.2.06>
- Estadísticas Sanitarias Mundiales (2020): monitoreando la salud para los ODS, objetivo de desarrollo sostenible. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020. Licencia. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- Estrada, A., Kataryniuk, I. y Martínez, J. (2016). Tendencias recientes en el análisis de la desigualdad. Cuaderno de Información Económica. No251. Economía Internacional. Banco de España.
- European experiences*. European Network on Interventions and Policies to Reduce Inequalities in Health. The Lancet Vol. 362. Recuperado de: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(03\)14639-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)14639-9/fulltext)
- European Observatory on Health Systems and Policies (2022), Norway: Health System Summary. WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen. ISBN 9789289059053
- Faggian, A., Michelangeli, A., & Tkach, K. (2022) *Inequality in Europe: Reality, Perceptions, and Hopes*. University of Milan Bicocca Department of Economics, Management and Statistics Working Paper, (489). Recuperado de: <http://rcea.org/RePEc/pdf/wp22-03.pdf>
- Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002) *Inequality and violent crime*. The journal of Law and Economics, 45(1), 1-39.
- Ferrant. (2015) *How do gender inequalities hinder development? Cross-country evidence*. Annals of economics and statistics, 117/118, 313. Recuperado de: <https://doi.org/10.15609/annaeconstat2009.117-118.313>
- Ferreira, F. H. G., & Peragine, V. (2015) *Equality of opportunity: Theory and evidence*. The World Bank. Recuperado de: <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7217>
- Ferreira, F. H., Peragine, V. (2015) *Equality of Opportunity: Theory and Evidence*. IZA Discussion Papers, No. 8994, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. Recuperado de: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/110717/1/dp8994.pdf>
- Foster, S. (2023) *Income inequality and household debt: Examining the impact of relative income on formal and informal debt in South Africa* (No. wp-2023-37). World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER). Recuperado de: <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2023-37-income-inequality-household-debt-impact-relative-income-formal-informal-debt-South-Africa.pdf>
- Gimpelson, V., & Treisman, D. (2015) *Misperceiving Inequality*. National Bureau of Economic Research. Recuperado de: [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w21174/w21174.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w21174/w21174.pdf)

- Giupponi, G., & Machin, S. (2022) *Labour market inequality*. IFS Deaton Review, 15. Recuperado de: <https://ifs.org.uk/sites/default/files/2022-08/Labour-market-inequality-IFS-Deaton-Review-of-Inequalities-2.pdf>
- Gobierno de la República de Costa Rica (2019). Decreto Ejecutivo N° 41584-MTSS-MCD-MCND Creación de la Comisión interinstitucional para la promoción de la corresponsabilidad social en la crianza de las y los menores de edad. Disponible en: [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88581&nValor3=115896&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88581&nValor3=115896&strTipM=TC)
- Goebel, J. (2007) *Methodological issues in the measurement of income and poverty*. Recuperado de: <https://api-depositonce.tu-berlin.de/server/api/core/bitstreams/19aafbcd-7bca-42cb-a726-e802056fc45a/content>
- Groshen, & Holzer. (2019) *Improving employment and earnings in twenty-first century labor markets: An introduction*. The Russell Sage Foundation journal of the social sciences: RSF, 5(5), 1. Recuperado de: <https://doi.org/10.7758/rsf.2019.5.5.01>
- Hauser, O. P., & Norton, M. I. (2017) *(Mis) perceptions of inequality*. Current opinion in psychology, 18, 21-25. Recuperado de: <https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/33591/Hauser%20-%20Curr%20Opin%20Psych%20-%202017%20-%20Public%20Preprint.pdf?sequence=1>
- Haynie, H. J., Kavanagh, P. H., Jordan, F. M., Ember, C. R., Gray, R. D., Greenhill, S. J. & Gavin, M. C. (2021) *Pathways to social inequality*. Evolutionary Human Sciences, 3, e35. Recuperado de: [https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/6639409D6A1E2B2CFA19EB55C7BAFECB/S2513843X21000323a\\_hi.pdf/pathways-to-social-inequality.pdf](https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/6639409D6A1E2B2CFA19EB55C7BAFECB/S2513843X21000323a_hi.pdf/pathways-to-social-inequality.pdf)
- He, Y., Zhou, L., Li, J., & Wu, J. (2021) *An empirical analysis of the impact of income inequality and social capital on physical and mental health - take China's micro-database analysis as an example*. International Journal for Equity in Health, 20(1). Recuperado de: <https://doi.org/10.1186/s12939-021-01560-w>
- Hodson, G. (2018). What the world can learn about equality from the Nordic model. The Conversation Magazine. Tomado de: <https://theconversation.com/what-the-world-can-learn-about-equality-from-the-nordic-model-99797>
- Huepe, M. (2023) *Desigualdades, inclusión laboral y futuro del trabajo en América Latina*. Recuperado de: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48947-desigualdades-inclusion-laboral-futuro-trabajo-america-latina>
- ILO (2021). Africa Regional Social Protection Strategy, 2021-2025: Towards 40 % – a social protection coverage acceleration framework to achieve the SDGs. International Labor Organization.
- Indira Gandhi National Open University (IGNOU). (s/f) *Unit-25 Concepts of Difference and Inequality Block-7: Theories of Social Satisfaction*. MA Sociology (MSO) Courses & Syllabus. Recuperado de: <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/26932/1/Unit-25.pdf>

- INEE (2019). Reformas educativas en Latinoamérica: realidades y perspectivas. Gaceta de la Política Nacional de Evaluación Educativa en México. [www.inee.com.mx](http://www.inee.com.mx)
- Institute National de Santé Publique (INSP 2016). Briefing Note Policy Approaches to Reducing Health Inequalities. Centre de Collaboration Nationale sur les politiques publiques et la Santé. Quebec, Canadá
- Instituto Mixto de Ayuda Social. informe de ejecución presupuestaria y población beneficiaria del Programa de Protección y Promoción Social del año 2022. <https://www.imas.go.cr/sites/default/files/docs/Informe%20Programa%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20Social%202022.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2014) *Encuesta Continua de Empleo. El empleo informal en Costa Rica*. Caracterización al IV trimestre 2013. Recuperado de: <https://inec.cr/wwwisis/documentos/INEC/ECE/2014/ECE-Empleo-Informal-CR.pdf>
- Instituto Nacional de las Mujeres (2018). Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018 – 2030. San José: Instituto Nacional de las Mujeres
- Isaacs, J. (2007) *Economic mobility of families across generations*. Economic Mobility Project.
- ISSA (2022). Promoción del crecimiento inclusivo y la cohesión social – Asia y el Pacífico. International Social Security Association.
- Itriago, D. (2020) *Análisis de la desigualdad multidimensional en Centroamérica y República Dominicana (CARD) y de una estrategia política regional para reducir las desigualdades*. Recuperado de: <https://www.afd.fr/es/ressources/analisis-de-la-desigualdad-multidimensional-en-centroamerica-y-republica-dominicana-card-y-de-una-estrategia-politica-regional-para-reducir-las-desigualdades>
- Jadotte, E. (2011) *Chapter 8 vulnerability to poverty: A microeconomic approach and application to the republic of Haiti*. En *Inequality of Opportunity: Theory and Measurement* (pp. 179–216). Emerald Group Publishing Limited. Recuperado de: [https://doi.org/10.1108/S1049-2585\(2011\)0000019011](https://doi.org/10.1108/S1049-2585(2011)0000019011)
- Jayadev, A., & Reddy, S. G. (2011) *Inequalities between groups: Theory and empirics*. *World Development*, 39(2), 159–173. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.032>
- Jere Behrman, Alejandro Gaviria y Miguel Székely, (2003). Who’s in and who’s out” Social exclusión in Latin America. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC, 2003.
- Jiménez, C. & López, L. (2021) *Desigualdad Multidimensional. La construcción de las categorías y el acercamiento a la medición del fenómeno*. Editorial Parmenia. Recuperado de: [https://www.researchgate.net/publication/355472948\\_Desigualdad\\_Multidimensional\\_La\\_construccion\\_de\\_las\\_categorias\\_y\\_el\\_acercamiento\\_a\\_la\\_medicion\\_del\\_fenomeno](https://www.researchgate.net/publication/355472948_Desigualdad_Multidimensional_La_construccion_de_las_categorias_y_el_acercamiento_a_la_medicion_del_fenomeno)
- Jiménez, M. (2018) *La movilidad intergeneracional del ingreso y sus métodos de estimación. Un análisis comparativo para Argentina y Chile*. Cuadernos de economía, 41(115), 79–103. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.cesjef.2017.04.001>
- Kanbur, R. (2007) *Coping with Crisis*. International Peace Institute. Recuperado de: [https://www.files.ethz.ch/isn/126966/poverty\\_conflict\\_06\\_2007.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/126966/poverty_conflict_06_2007.pdf)

- Kanbur, R. (2019) *Inequality in a global perspective*. Oxford Review of Economic Policy, 35(3), 431-444.
- Knell, M., & Stix, H. (2021) *Inequality, perception biases and trust*. Journal of Economic Inequality, 19(4), 801–824. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s10888-021-09490-x>
- Knudsen, E. I., Heckman, J. J., Cameron, J. L., & Shonkoff, J. P. (2006) *Economic, neurobiological, and behavioral perspectives on building America's future workforce*. Proceedings of the national Academy of Sciences, 103(27), 10155-10162. Recuperado de: <https://doi.org/10.1073/pnas.0600888103>
- Lago, M. (2021) . La situación de la Sanidad pública en América Latina. Les Études du CERI, 2021, 252-253, pp.85 - 99. fahal-03578902f
- Lakner, C., Mahler, D. G., Negre, M., & Prydz, E. B. (2022) *How much does reducing inequality matter for global poverty?*. Journal of Economic Inequality, 20(3), 559–585. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s10888-021-09510-w>
- Lebdioui, A. (2021) ¿Por siempre desigual? Estrategias innovadoras para reducir la desigualdad en América Latina. Latin America an Caribbean Centre. Tomado de: <https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2021/06/24/por-siempre-desigual-estrategias-innovadoras-para-reducir-la-desigualdad-en-america-latina/>
- Lee, J.-W. and H. Lee. 2018. Human Capital and Income Inequality. ADBI Working Paper 810. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Available: <https://www.adb.org/publications/human-capital-and-income-inequality>
- Lefranc, A., Pistolesi, N., Trannoy, A., Davidson, R., & Roemer, J. (2006) *Inequality of opportunities vs. inequality of outcomes: Are Western societies all alike?* Ecineq.org. Recuperado de: <http://www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2006-54.pdf>
- Leibbrandt, M. and Shipp, T (2017). Reducing inequalities in South Africa: progress on equality thwarted by slow growth and success of top earners. United Nations University.
- Low, S. M. (2011) *Claiming space for an engaged anthropology: Spatial inequality and social exclusion*. American anthropologist, 113(3), 389-407. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2011.01349.x>
- Mackenbach, J. P., & Bakker, M. J. (2003) *Tackling socioeconomic inequalities in health: analysis of*
- Mandel, H. (2009) *Configurations of gender inequality: the consequences of ideology and public policy* 1. The British journal of sociology, 60(4), 693-719. Recuperado de: <https://people.socsci.tau.ac.il/mu/hadasm/files/2010/12/Mandel2009BJS.pdf>
- Marcia Bebianno y Juan Manuel Jiménez (2011) Migración y desigualdad en las Américas. Desigualdad e inclusión social en las Américas: 14 ensayos. Organization of American States. Secretary General.
- Martich, E. (2021) Salud y desigualdad: la pandemia reforzó lo que ya sabíamos. Revista Nueva Sociedad No 293, mayo-junio de 2021, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.



- Martín-Legendre, JI. (2022). Reducción de la desigualdad y gasto social: Evidencia empírica para 35 países europeos, 2004-2018. Universidad de La Coruña, España. *International Review of Economic Policy* vol.4, nº.2, 2022, pp. 49-65 (ISSN 2695-7035)
- Mata, D. y Berniell, L. (2022). Desigualdad y baja movilidad social en América Latina y el Caribe. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)
- Mattison, S. M., Smith, E. A., Shenk, M. K., & Cochrane, E. E. (2016) *The evolution of inequality*. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, 25(4), 184-199. Recuperado de: <https://faculty.washington.edu/easmith/Mattison,Smith,Shenk&Cochrane2016-EvAnth.pdf>
- Mcknight, A., Mendes Loureiro, P., Vizard, P., Prats, A., Claver, A., Kumar, C., Espinoza-Lucero, P., Leavey, C., Mompelat, L., Fine, B., Fuentes-Nieva, R., Kabeer, N., & Mariotti, C. (s/f). *Multidimensional Inequality Framework*. Atlantic Fellows in Social and Economic Equity Programme. Recuperado de: <https://sticerd.lse.ac.uk/inequality/the-framework/media/mif-framework.pdf>
- Mdingi, K., & Ho, S.-Y. (2021) *Literature review on income inequality and economic growth*. *MethodsX*, 8(101402), 101402. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101402>
- Mehlbye, P., Schön, P., Martin, D., & Böhme, K. (2019) *Territorial Inequality: A New Priority for Europe*. Arguments for Place-Sensitive Policies and Investments. Territorial Thinkers' Briefing November 2019:06. Recuperado de: [https://territorialthinkers.eu/files/territorial\\_theme/Downloads/TT%20brief%20VI-191123Final.pdf](https://territorialthinkers.eu/files/territorial_theme/Downloads/TT%20brief%20VI-191123Final.pdf)
- Meneses Bucheli, K., Segura Carmona, R., & Córdova Montero, G. (2018) *Determinantes de la estructura productiva que impactan la desigualdad de ingresos*. Capítulo: Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas. Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2018. Recuperado de: [https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/2533/Desigualdad\\_Meneses%20et%20al%202018.pdf](https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/2533/Desigualdad_Meneses%20et%20al%202018.pdf)
- Mervyn y otros (2014). «Digital inclusion and social inclusion: a tale of two cities». *Information, communication and society* (núm. 17, vol. 9, págs. 1.086-1.104).
- Molinas, F. H. F. J. R., & Chanduvi, V. J. S. *Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean*. The World Bank. Recuperado de: <https://publications.iadb.org/publications/english/viewer/Measuring-Inequality-of-Opportunities-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf>
- Morales Aguilar, N., & Segura Carmona, R. (2019) *Estudio exploratorio del empleo y la desigualdad con datos del parque empresarial*. Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2019. Recuperado de: [http://repositorio.conare.ac.cr:8080/bitstream/handle/20.500.12337/7796/Morales\\_Segura\\_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://repositorio.conare.ac.cr:8080/bitstream/handle/20.500.12337/7796/Morales_Segura_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

- Nathan Deutscher, & Mazumder, B. (2021) *Measuring intergenerational income mobility: A synthesis of approaches*. Federal Reserve Bank of Chicago. Recuperado de: <https://doi.org/10.21033/wp-2021-09>
- Nettle, D. (2018). *Why inequality is bad*. En *Hanging on to the Edges* (1a ed., pp. 111–128). Open Book. Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv8d5sn3.10>
- Neumayer, E (2005) *Inequality and violent crime: evidence from data on robbery and violent theft*. *Journal of peace research*, 42 (1). pp. 101-112. ISSN 0022-3433 Recuperado de: [https://www.researchgate.net/publication/240704704\\_Inequality\\_and\\_Violent\\_Crime\\_Evidence\\_from\\_Data\\_on\\_Robbery\\_and\\_Violent\\_Theft](https://www.researchgate.net/publication/240704704_Inequality_and_Violent_Crime_Evidence_from_Data_on_Robbery_and_Violent_Theft)
- Neves Costa, R., & Pérez-Duarte, S. (2019) Not all inequality measures were created equal-The measurement of wealth inequality, its decompositions, and an application to European household wealth. *Statistics Paper Series* (No. 31). European Central Bank. Recuperado de: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps31~269c917f9f.en.pdf>
- NHS (2015). *Health inequalities: What are they? How do we reduce them?* Inequality Briefing 1 July 2015. Health Scotland.
- Nunn, A., Johnson, S., Monro, S., Bickerstaffe, T., Kelsey, S., (2007) *Factors influencing social mobility*. Research Report No 450. Department for Work and Pensions. Recuperado de: [https://www.researchgate.net/publication/237102825\\_Factors\\_influencing\\_social\\_mobility](https://www.researchgate.net/publication/237102825_Factors_influencing_social_mobility)
- OCDE (2017) sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica. Originalmente publicado por la OCDE en inglés bajo el título: *OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Costa Rica 2017* OCDE. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica para esta edición en español.
- OECD (2012) *Inequality in labour income – What are its drivers and how can it be reduced?* OECD Economics Department Policy Notes, No. 8. January 2012. Recuperado de: <https://www.oecd.org/tax/public-finance/49417273.pdf>
- OECD (2023). *Korea: Health System Overview*. OECD Library. Tomado del sitio: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6e005d47-en/index.html?itemId=/content/component/6e005d47-en>
- OECD/WHO (2022), *Health at a Glance: Asia/Pacific 2022: Measuring Progress Towards Universal Health Coverage*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/c7467f62-en>
- OIT (1999) Trabajo Decente. Memoria Del Director General. Conferencia Internacional Del Trabajo, 87 a Reunión, 100. <https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09651/09651%281999-87%29.pdf>
- OIT (1999) Trabajo Decente. Memoria Del Director General. Conferencia Internacional Del Trabajo, 87 a Reunión, 100. <https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09651/09651%281999-87%29.pdf>
- OIT (2021). *Desigualdades y el mundo del trabajo*. Conferencia Internacional del Trabajo, 109.<sup>a</sup> reunión, 2021. Organización Internacional del Trabajo.

- OIT. (1999) *Memoria del Director General: Trabajo decente*. Conferencia Internacional del Trabajo 87<sup>a</sup> reunión 1999. Recuperado de: <https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm>
- Olmedo Lucerón MC. (2008). Globalización, desigualdad y pobreza: un reto para las políticas sanitarias. *Revista Administración Sanitaria*. 2008;6(4):729-40 Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
- ONU (1999). *Desigualdad: cómo subsanar las diferencias*. Organización de las Naciones Unidas. UN75 Más allá del 2020.
- ONU (2017). *Income Inequality Trends in sub-Saharan Africa: Divergence, determinants and consequences*. 2017 United Nations Development Programme. Regional Bureau for Africa. 1 UN Plaza, New York, NY 10017, USA
- ONU (2020). *Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Organización de las Naciones Unidas. Sitio Web: <https://www.onu.org>
- ONU (2021). *Proceso de escucha global ONU75. Reporte de conclusiones*. New York, USA. Organización de las Naciones Unidas.
- OPS (2022). *Desigualdades en la salud en América Latina y el Caribe: Una línea de base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mujeres, niños y adolescentes*. Washington, D.C.; 2022. Organización Panamericana de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://doi.org/10.37774/9789275325742>
- Organización de las Naciones Unidas y Comité Económico para América Latina (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Disponible en: [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf) Santiago: Naciones Unidas.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2009) *Conocer los Derechos Fundamentales en el Trabajo*. Recuperado de: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-san\\_jose/documents/publication/wcms\\_180458.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-san_jose/documents/publication/wcms_180458.pdf)
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021) *Las desigualdades y el mundo del trabajo*. Informe IV. Conferencia Internacional del Trabajo, 109.<sup>a</sup> reunión, 2021 ILC.109/IV (Rev.) Recuperado de: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_792136.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_792136.pdf)
- Organización Panamericana de la Salud (2003). *Exclusión en salud en países de América Latina y el Caribe*. Washington, D.C.: OPS, © 2003.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2012). *Desigualdad de Género, Tiempo para actuar*. París: OCDE.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018). *Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica 2018*. París: OCDE.
- Ortiz, J. (2020) *Claves del por qué la educación en Singapur es de las mejores del mundo*. JOM Academy. 2023. Tomado de <https://jomacademy.com/claves-porque-la-educacion-en-singapur-es-de-las-mejores-del-mundo/>



- OXFAM (2015). Asia en la Encrucijada: por qué el continente debe hacer frente a la desigualdad ahora. Nota Informativa de OXFAM. [www.oxfam.org](http://www.oxfam.org)
- OXFAM (2019) Un cuento de dos continentes. Luchando contra la desigualdad en Africa. Oxfam International Month September 2019. Tomado de [www.oxfam.org](http://www.oxfam.org)
- OXFAM (2019). El poder de la educación en la lucha contra la desigualdad. OXFAM internacional. [www.oxfam.org](http://www.oxfam.org)
- Papatheodorou, Christos & Kostaki, Anastasia & Peristera, Paraskevi. (2002) *Assessing Income Distribution Using Kernel Estimates: A Comparative Study in Five European Countries*. Recuperado de: [https://www.researchgate.net/publication/277247575\\_Assessing\\_Income\\_Distribution\\_Using\\_Kernel\\_Estimates\\_A\\_Comparative\\_Study\\_in\\_Five\\_European\\_Countries](https://www.researchgate.net/publication/277247575_Assessing_Income_Distribution_Using_Kernel_Estimates_A_Comparative_Study_in_Five_European_Countries)
- Parlamento Europeo (2023) La lucha contra la pobreza, exclusión social y la discriminación. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
- Perez-Arce, F., Amaral, E. F. L., Huang, H., & Price, C. C. (2016) *Front Matter. En Inequality and Opportunity* (pp. i–ii). RAND Corporation.
- Perez-Arce, F., Amaral, E. F. L., Huang, H., & Price, C. C. (2016) *Trends in Inequality*. En *Inequality and Opportunity* (pp. 9–22). RAND Corporation. Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1d41dcd.11>
- Permanyer, I., & Smits, J. (2020). *Inequality in human development across the globe*. *Population and Development Review*, 46(3), 583-601. Recuperado de: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/padr.12343>
- Piketty, T. (1998) *Income Distribution Theory: A Survey of Selected Recent Contributions*. In *Contemporary Economic Issues: Volume 2 Labour, Food and Poverty* (pp. 25-38). London: Palgrave Macmillan UK.
- Piketty, T. (1999) *Attitudes Toward Income Inequality in France: Do People Really Disagree?* (p. 9918). Paris: CEPREMAP. [https://www.cepremap.fr/depot/couv\\_orange/co9918.pdf](https://www.cepremap.fr/depot/couv_orange/co9918.pdf)
- Polacko, M. (2021) *Causes and consequences of income inequality – an overview*. *Statistics, Politics, and Policy*, 12(2), 341–357. Recuperado de: <https://doi.org/10.1515/spp-2021-0017>
- Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2011) *Agencia y empoderamiento en la medición de la pobreza*. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano*. Boletín N° 79 – Noviembre 2011. Recuperado de: <https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Agencia1.pdf>
- Rajapaksa L, De Silva P, Abeykoon A, Somatunga L, Sathasivam S, Perera S et al (2021). Sri Lanka health system review. New Delhi: World Health Organization Regional Office for South-East Asia; 2021
- Ramos, X., & Van de Gaer, D. (2009). *Empirical evidence on inequality of opportunity*. In MARSEILLE MEETING. Recuperado de: [https://www.academia.edu/download/46978372/Empirical\\_evidence\\_on\\_inequality\\_of\\_opo20160703-1438-18nm0ow.pdf](https://www.academia.edu/download/46978372/Empirical_evidence_on_inequality_of_opo20160703-1438-18nm0ow.pdf)

- Ramos, X., & Van de Gaer, D. (2012) *Empirical approaches to inequality of opportunity: Principles, measures, and evidence*. Recuperado de: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/62458/1/719120381.pdf>
- Ramos, X., & Van de Gaer, D. (2016). *Approaches to inequality of opportunity: Principles, measures and evidence*. *Journal of Economic Surveys*, 30(5), 855-883. Recuperado de: [http://leonardo3.dse.univr.it/it/documents/it11/Reference\\_paper\\_Ramos.pdf](http://leonardo3.dse.univr.it/it/documents/it11/Reference_paper_Ramos.pdf)
- República De Costa Rica, Asamblea Legislativa. *Ley General de la Persona Joven y su Reglamento. Ley No 8261*. Contraloría de Servicios Estudiantiles, Ministerio de Educación Pública. Recuperado de: <https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/ley-general-persona-joven-reglamento.pdf>
- Rifat Atún, Luiz Odorico y otros (2015). La reforma de los sistemas de salud y la cobertura universal de salud en América Latina. Serie: Cobertura universal de salud en Latinoamérica. MEDICC Review ISSN 1527-3172 (Digital).
- Robeyns, I. (2003) *Sen's Capability Approach and Gender Inequality*. *Feminist Economics*. 9. 61-92. DOI: 10.1080/1354570022000078024
- Robeyns, I. (2006) *The capability approach in practice*. *Journal of political philosophy*, 14(3), 351-376.
- Robeyns, I. (2017) *Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-examined* (p. 266). Open Book Publishers. Recuperado de: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/30821/641879.pdf?sequence=1>
- Rocco, L. (2018). *Inequality in Europe*. European Investment Bank. Tomado de: [https://www.eib.org/attachments/efs/econ\\_inequality\\_in\\_europe\\_en.pdf](https://www.eib.org/attachments/efs/econ_inequality_in_europe_en.pdf)
- Rodríguez, C. (2009). Diferencias en las oportunidades educativas de las personas según su origen social en el estado de Hidalgo. En Consejo Mexicano de Investigación Educativa. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. México: Editor. pp. 1-14.
- Roemer, J. E., & Trannoy, A. (2016) *Equality of opportunity: Theory and measurement*. *Journal of Economic Literature*, 54(4), 1288-1332. Recuperado de: [https://campuspress.yale.edu/johnroemer/files/2017/04/Roemer.Trannoy.JEL\\_2016-copy-2g06mrh.pdf](https://campuspress.yale.edu/johnroemer/files/2017/04/Roemer.Trannoy.JEL_2016-copy-2g06mrh.pdf)
- Roine, J., Vlachos, J., & Waldenström, D. (2009) *The long-run determinants of inequality: What can we learn from top income data?* *Journal of public economics*, 93(7-8), 974-988. Recuperado de: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=2cad4bdff6ad791998f755b8fb7a293ef84b6d6>
- Rycroft, R. (2017) *The economics of inequality, discrimination, poverty, and mobility*. Routledge.
- Sabol, T. J., Sommer, T. E., Chase-Lansdale, P. L., & Brooks-Gunn, J. (2021) *Intergenerational economic mobility for low-income parents and their children: A dual developmental science framework*. *Annual Review of Psychology*, 72(1), 265–292. Recuperado de: <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-051001>

- Sachsida, A., de Mendonça, M. J. C., Loureiro, P. R., & Gutierrez, M. B. S. (2010) *Inequality and criminality revisited: further evidence from Brazil*. *Empirical Economics*, 39, 93-109.
- Sánchez, A., Favara, M., Sheridan, M., & Behrman, J. (s/f) *PIER Working Paper How early nutrition and foundational cognitive skills interconnect? Evidence from two developing countries*. Upenn.edu. Recuperado de: <https://economics.sas.upenn.edu/system/files/working-papers/22-032%20PIER%20Paper%20Submission.pdf>
- Sánchez, F. (2023). Los países más desiguales de Europa. El Observatorio Social. Fundación La Caixa. Barcelona, España.
- Savaglio, E. (2002) *Multidimensional inequality: A survey*. U of Siena, Economics Working Paper, (362). Recuperado de: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=23a8c590f5dc0349932a85667950c415d53baaf9>
- S. Cecchini, R. Holz y H. Soto de la Rosa (coords.), Caja de herramientas. Promoviendo la igualdad: el aporte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe (LC/TS.2021/55), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.
- Shimeles, A., Nabassaga, T. (2017), *Why is inequality high in Africa?* Working Paper Series N° 246, African Development Bank, Abidjan, Côte d'Ivoire.
- Sistema Costarricense de Información Jurídica, disponible en [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=77044](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=77044)
- Søgaard, J. E., Roine, J., Robling, P.-O., Pareliussen, J., Orsetta, C., Lindgren, P., Langørgen, A., Hermansen, M., Gunnarsson, K., Calmfors, L., Boschini, A., André, C., & Aaberge, R. (2018) *Increasing income inequality in the Nordics*. Nordic Council of Ministers. Recuperado de: <https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1198429/FULLTEXT01.pdf>
- Solon, G. (1999) *Intergenerational mobility in the labor market*. In *Handbook of labor economics* (Vol. 3, pp. 1761-1800). Elsevier.
- Solórzano, T., & Diego, J. (2014) *La desigualdad en la distribución de la educación en Costa Rica: una mirada comparativa de los últimos 25 años*. Informe Estado De La Educación 2015 (no. 5) Recuperado de: <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/771>
- Stewart, F. (2005) *Horizontal inequalities: A neglected dimension of development*. *Wider perspectives on global development*, 101, 135. Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, CRISE. Recuperado de: [https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:32f7741a-db35-4eae-8c88-bc055f214f2e/download\\_file?file\\_format=application%2Fpdf&safe\\_filename=wp1.pdf&ty](https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:32f7741a-db35-4eae-8c88-bc055f214f2e/download_file?file_format=application%2Fpdf&safe_filename=wp1.pdf&ty)
- Therborn, Göran (2009) *The killing fields of inequality*. Accedido en: <https://www.eurozine.com/the-killing-fields-of-inequality/>

- Thomas, V., Wang, Y., & Fan, X. (2001) *Measuring education inequality: Gini coefficients of education* (Vol. 2525). World Bank Publications.
- Torche, F. (2015) *Intergenerational mobility and equality of opportunity*. European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie, 56(3), 343-371. Recuperado de: <https://doi.org/10.1017/S0003975615000181>
- Tríos, Silvia (2022). Educación en Asia Meridional. Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales. Proyecto Lawi. Tomado de [www.leyderecho.org](http://www.leyderecho.org)
- UNESCO (2007). Informe de Seguimiento de la Educación para todos en el Mundo: Luchar contra la exclusión: enseñanza de las experiencias de los países. París, UNESCO
- UNESCO (2020). Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020: Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción. París, UNESCO
- UNESCO (2022). La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030. París, UNESCO
- UNESCO (2023). Education in Africa, placing equity in the heart of policy. Continental Report. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Education 2030
- UNICEF (2020) Transforming Education in Africa: An evidence-based overview and recommendations for long-term improvements. Executive Summary. African Union and UNICEF 2020.
- UNICEF. (2006) *Convención sobre los Derechos del Niño*. Recuperado de: <http://repositorio.mides.gub.uy:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1858/CONVENCI%C3%93N%20SOBRE%20LOS%20DERECHOS%20DEL%20NI%C3%91O.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Usaquén Chía, M. I. (2009). Pobreza y desigualdad en América Latina: ¿un problema de reformas institucionales? *Equidad y Desarrollo*, (12), 73-85. <https://doi.org/10.19052/ed.217>
- Vanhoudt, P. (1997) *An assessment of the macroeconomic determinants of inequality*. Vakgroep Publieke Economie. Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek
- Verbist, G., & Förster, M. (2019) Accounting for Public Services in Distributive Analysis 1. In *What Drives Inequality?* (Vol. 27, pp. 69-87). Emerald Publishing Limited. pp. 69-87. Recuperado de: <https://doi.org/10.1108/S1049-258520190000027006>
- Wagle, U. R. (2017) *How much do social protections matter to poverty and inequality? An insight from Asian experiences*. *Global social policy*, 17(2), 137-167.
- Whitehead M, Dahlgren G. (2006). Concepts and principles for tackling social inequities in health. *Levelling up (I)*. Copenhagen: World Health Organization; 2006. Studies on social and economic determinants of population health No 2.
- World Bank. (2005) *Inequity within Countries: Individuals and Groups*. Recuperado de: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/9d396c1e-898b-5aca-8e02-3c9f2186ae7e/content>
- Yáñez-Contreras, M., & García-Correa, C. (2013) *Métodos para la medición de la movilidad intergeneracional educativa en América Latina y Colombia*. Análisis y

perspectivas. *Entramado*, 9(2), 12-27. Recuperado de:  
<http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v9n2/v9n2a02.pdf>

Yang, J., Huang, X., & Liu, X. (2014) An analysis of education inequality in China. *International Journal of Educational Development*, 37, 2–10. Recuperado de:  
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.03.002>